CONTENIDO DE LOS ANEXOS.

Anexo I: Relación cronológica de disposiciones.
Anexo II: Reproducción íntegra o extractada de las principales disposiciones, proyectos y sentencias.
Anexo III: Extractos de discursos parlamentarios, programas políticos, acuerdos de Congresos, artículos periodísticos, cartas etc.

INDICE DE LOS ANEXOS.

| CAPITULO I:  | ANEXO I  | .................................................. | 2 |
|             | ANEXO II | .................................................. | 5 |
| CAPITULO II:| ANEXO I  | .................................................. | 11 |
|             | ANEXO II | .................................................. | 14 |
|             | ANEXO III| .................................................. | 40 |
| CAPITULO III:| ANEXO I  | .................................................. | 61 |
|             | ANEXO II | .................................................. | 63 |
|             | ANEXO III| .................................................. | 134 |
| CAPITULO IV:| ANEXO I  | .................................................. | 190 |
|             | ANEXO II | .................................................. | 191 |
|             | ANEXO IIIB| ................................................. | 258 |
|             | ANEXO III | .................................................. | 286 |
ANEXOS DEL CAPÍTULO PRIMERO
RELACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS SOBRE DISOLUCIÓN DE LOS GREMIOS.

Las primeras disposiciones.

1.692, 13 diciembre .......... Ley y Pragmática Sanción de Carlos II permitiendo tener fábricas sin ser agraciado.

1.705, 4 diciembre .......... Decreto de Felipe V en fomento de la industria.

Reinado de Carlos II

1.770 .................................. Decreto Real para suspender todas las Hermandades, Congregaciones y Cofradías erigidas sin aprobación de magistrados reales.

1.770, 10 junio ............... Real Decreto sobre los adelantamientos de fábricas, perfección de los artefactos, establecimientos y formación de gremios.

1.772, 30 abril ............... Real Cédula sobre admisión de maestros extranjeros.

1.777, 18 febrero ............. Resolución liberalizando el proceso productivo en las fábricas de seda.

1.778, 16 noviembre ........... Resolución sobre trabajo femenino.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Fecha</th>
<th>Evento</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.775, 25 enero</td>
<td>Se encarga a las Sociedades Económicas de Amigos del País un plan de reforma de las corporaciones.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.780, 12 julio</td>
<td>Liberalización de la fabricación de mallas de seda.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.782, 27 abril</td>
<td>Liberalización del trabajo de pintores, escultores y arquitectos.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.785, 1 mayo</td>
<td>Libertad de ejercicio de las profesiones de artes plásticas.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.787, 10 mayo</td>
<td>Resolución sobre concentración industrial.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Reinado de Carlos IV**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fecha</th>
<th>Evento</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.789, 9 septiembre</td>
<td>Pragmática permitiendo la importación de muselinas.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.790, 25 mayo</td>
<td>Real Orden aboliendo los exámenes de oficialía y maestría.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.790, 27 septiembre</td>
<td>Orden de reforma de las ordenanzas gremiales.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.795, 2-29 enero</td>
<td>Cédula extinguiendo los gremios de torcedores de seda.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.793, 23 julio</td>
<td>Permiso de establecimiento</td>
</tr>
</tbody>
</table>
a artesanos extranjeros, sin necesidad de examen.

1.797, 30 agosto .......... Circular relativa a la libre admisión de extranjeros.

1.798, 1 marzo ............ Circular permitiendo pasar de un oficio a otro.

La crisis final.

1.813, 6 junio ............ Decreto de las Cortes de Cádiz sobre "libre ejercicio de cualquier oficio".

1.814, 4 mayo ............ Decreto aboliendo la constitución y toda la legislación de las Cortes de Cádiz.

1.815, 14 marzo ............ Orden de la Junta General de Comercio sobre reformas de las ordenanzas.

1.816, 29 junio ............ Real Orden revocando Decreto de 1.813 y ordenando reformas de las ordenanzas.

1.820, 15 mayo ............ Decreto restaurando el de 1.813.

1.823, 1 octubre ............ Decreto anulando la legislación del trienio anterior.

1.834, 20 enero ............ Decreto aboliendo el fuero privilegiado de las corporaciones.

1.836, 6 diciembre ........ Decreto restaurando el de 1.813.
ANEXO II

EXTRACTOS DE ALGUNAS DE LAS MAS IMPORTANTES DISPOSICIONES
NORMATIVAS CITADAS PERO NO REPRODUCIDAS EN EL TEXTO.

Resolución de Carlos III liberalizando la industria textil, a consulta de 15 de febrero de 1.777, y cédula de la Junta de Comercio de 5 de marzo de 1.778. (Novísima recopilación, libro VIII, Título XXIV, Ley V).

"Habiendo acreditado la experiencia las ventajas y utilidades que ha producido a las fábricas de telas de Valencia la tolerancia, que se les permitió por órdenes de 17 de septiembre de 1.750 y 26 de abril de 1.755, de que fabricasen sus tejidos de menos ancho y cuantos el establecido por leyes y ordenanzas del año 1.684, imitando a las que se construyan e introduzcan de León de Francia y otros países extranjeros, y al deslорable estado en que hoy se miran las fábricas de Toledo, Sevilla, Granada, Málaga, y demás pueblos de mis reinos, por no disfrutar del mismo privilegio otorgado a las de Valencia..., he tenido a bien hacer extensiva y general a todas las fábricas de sedas de estos mis reinos la gracia concedida a las de Valencia ...".

Real Orden de 26 de mayo de 1.790 aboliendo las oposiciones gremiales (Cedulario de Carlos IV, pág. 183).

"Entendido el Rey de la solicitud de Nicolás Gardet sobre
que se le permita trabajar en su oficio de tornero sin
la obligación de examinarse en él, como pretenden los
- torneros, se ha servido S.M. resolver que la Sala de Ca-
sa y Corte mantenga a esta artista en el libre ejercicio
de su profesión, mediante su conocida habilidad, y ven-
taja que resulte el reino de su establecimiento, sin em-
bargo de la oposición de los vecinos del mismo; y lo
mismo se ejecuta con cualesquiera artesano de profesión
conocida, o no, en el Reino, cesiándose de su idonei-
dad, removiendo oposiciones gremiales".

Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1.813—
sobre el libre establecimiento de fábricas y ejercicio
de cualquier industria útil. (Colección de Decretos).
"Las Cortes generales y extraordinarias con el justo —
objeto de remover las trabas que hasta ahora han encontra-
do el progreso de la industria, decretan:

I. Todos los españoles y los extranjeros avenindados, o
que se avenidian en los pueblos de la Monarquía, podrán
libremente establecer las fábricas o artefactos de cual-
quiera clase que les acomode, sin necesidad de permiso —
ni licencia alguna, con tal que se sujeten a las reglas
de policía adoptadas, o que se adopten para la salubri-
dad de los mismos pueblos.

II. También podrán obrar libremente cualquier industria —
tria u oficio útil, sin necesidad de examen, título de
incorporación a los gremios respectivos, cuyas ordenanzas se derogan en esta parte.

Decreto de 1 de octubre de 1.823 de Fernando VII anulando la legislación del Trienio Liberal. (Cited by Díaz-Plaja, "La España del siglo XIX", pág. 170).

"... sentado ya otra vez en el trono de San Fernando por la mano sabia y justa del omnipotente, por las generosas resoluciones de mis poderosos aliados y por los denodados esfuerzos de mi primo, el duque de Angulema y su valiente ejército, deseando proveer el remedio a las más urgentes necesidades de mis pueblos, y manifestar a todo el mundo mi verdadera libertad he venido en decretar lo siguiente:

I.- Son nulos y de ningún valor los actos del gobierno — llamado constitucional (de cualquier clase y condición — que sean) que ha dominado mis pueblos desde el 7 de marzo de 1.820 hasta hoy, 1º de octubre de 1.823, declarando, como declaro, que en toda esta época he carecido de libertad...".

Real Decreto de 20 de enero de 1.834 arreglando las asociaciones gremiales del modo que se expresa. (Colección de Decretos).

"Deseando remover cuantos obstáculos se opusieron hasta ahora al fomento y prosperidad de las diferentes industrias convencida de que las reglas contenidas en los Estatutos y ordenanzas que dirigen las asociaciones gremia-
las formadas para protegerlas, han servido tal vez para acelerar su decadencia; y persuadida de la utilidad que pueden prestar al Estado dichas corporaciones, consideradas como reuniones de hombres animados por un interés común para estimular los progresos de las respectivas industrias, y auxiliarse recíprocamente en sus necesidades, ha tenido a bien resolver que todas las ordenanzas, estatutos o reglamentos peculiares a cada ramo de industria fabril que rigen hoy, o que se formen en lo sucesivo, hayan de arreglarse para que merezcan la real aprobación a las bases siguientes:

1º.— Las asociaciones gremiales, cualquiera que sea su denominación, o su objeto, no gozan fuera privilegiado, y dependen exclusivamente de la autoridad municipal de cada pueblo.

... 

3º.— No podrán formarse asociaciones gremiales destinadas a monopolizar el trabajo en favor de un determinado número de individuos.

...

5º.— Ninguna ordenanza gremial será aprobada si contiene disposiciones contrarias a la libertad de la fabricación, a la de la circulación interior de los géneros y frutos del reino, o a la concurrencia indefinida del trabajo y de los capitales.

...
8º. Todo individuo puede ejercer simultáneamente cuan-
tas industrias posea, sin otra obligación que la de ins-
cribirse en los gremios respectivos a ellas.
ANTESOS DEL CAPÍTULO SEGUNDO
ANEXO I.

1) R.O. de 24 de junio de 1824 promoviendo la aceptación del maquinismo.

2) Bando del Jefe Político de Barcelona de septiembre de 1835, creando la Comisión mixta inspector de fábricas.

3) R.O.C. de 18 de febrero de 1839 autorizando las sociedades de socorros mútuos.

4) Bando de los Alcaldes de Barcelona y pueblos limítrofes de 23 de mayo de 1840, recordando que no se pueden efectuar reuniones ni suscripciones para formar sociedades.

5) Decreto de 6 de enero de 1841 disolviendo la Sociedad de Tejedores.

6) Bando del Jefe Político de Barcelona de 5 de mayo de 1841, autorizando, con recelo, la Sociedad de Tejedores.

7) Decreto de 9 de diciembre de 1841, disolviendo la Sociedad de Tejedores.

8) R.O. de 20 de marzo de 1842, autorizando a la Sociedad de Tejedores.

9) Bando del Capitán General de Cataluña de 16 de enero de 1843 disolviendo la Sociedad de Tejedores.

10) Bando del Jefe Político de Barcelona de 3 de octubre de 1844, contra la Sociedad de Tejedores.
11) Código Penal de 1848, art. 211 y 212 sobre asociaciones ilícitas, y 451 sobre colágaciones para abaratar el precio del trabajo (huelgas).

12) R.G. de 25 de septiembre de 1853, suspendiendo la eficacia de la R.G. de 28 de febrero de 1839.

13) R.G. de 31 de mayo de 1854, volviendo a permitir las sociedades de socorros mútuos.

8) Bienio Progresista.

14) Bando del Capitán General de Barcelona de 25 de julio de 1854 prohibiendo las selfactinas.

15) Bando del Jefe Político de Barcelona de 30 de abril de 1855, recortando el derecho de asociación.

16) Bando del Capitán General de Barcelona de 21 de junio de 1855, recortando el derecho de asociación.

17) Bando del Capitán General de Barcelona de 3 de julio de 1855, desdiciéndose del anterior.

18) Bando del Gobernador Civil de Barcelona de 25 de agosto de 1855, ordenando formar estadística de las asociaciones textiles.

19) Proyecto de ley de Alonso Martínez sobre ejercicio, policía societades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera.
Con el Bienio Progresista a la Revolución Septembrina.

20) Decreto de abril de 1857 aboliendo todas las sociedades obreras del tipo que fuesen.

21) R.O.C. de 26 de noviembre de 1859 contra las sociedades obreras.

22) R.U. de 18 de junio de 1861, denegando la solicitud para constituir una sociedad de socorros mútuos.

23) Ley de 22 de junio de 1864 sobre reuniones públicas.

24) Proyecto de ley de 29 de enero de 1866 sobre sociedades públicas presentado al Senado por Posada Herrera.
ANEXO II

REPRODUCCIÓN INTEGRAL O EXTRACTADA DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL PERÍODO.

1) Real Orden de 24 de junio de 1824.

"Entenderá el Rey mestero Señor de la instancia hecha por Miguel Leocet, fabricante de paños de balletas en la villa de Camprodon en Cataluña, en que de resultas de haberse arrojado una multitud desenfrenada a desmontar las máquinas de hilar y cañar de sus fábricas, perdonando generosamente a los occisos los perjuicios que la han causado, solicita se imponga la más estrecha responsabilidad a las Autoridades del país para que no se repitan estos excesos; y teniendo presente los tristes resultados que padecieron las fábricas de Aloay, Segovia y otras por iguales causas de anteponer los jornaleros sus intereses y subsistencia a la utilidad pública, como que ni tampoco debe obligarse a los fabricantes a que empleen otros brazos y gastos que los necesarios, proporcionándoles las máquinas la economía, igualdad y perfección que no logran con aquellos; se ha servido S.M. mandar, de conformidad con el dictamen de la Junta de Fomento de la riqueza del Reino, que se imponga la más estrecha responsabilidad a las Justicias y Ayuntamiento de la villa de Camprodon, haciéndola extensiva a las Autoridades principales de la provincia; que se pague a aquellas qué medidas han tomado para reprimir y castigar a los atentadores a dichos excesos; que el señor movimiento que se observe para repetirlos, empleen las Autoridades los medios que las leyes ponen en sus manos, y se tomen causas para la averiguación y castigo de los occisos; que se llamen a presencia del Ayuntamiento las menores cesantes, sus padres, mujeres y jefes de las familias en pequeño número de cada vez, y les instruya del bien que, tras el uso de las máquinas, proviniéndoles que de repetirse los
desórdenes serán procesados y castigados como tumultuarios; que por medio del Prelado se exhorte a los párrrocos a predicarles lo que se propie de su ministerio pastoral para impedir tales excesos, que se encargue a los Jefes de la fuerza armada cooperen a la protección de las fábricas y a prevenir todo escándalo, dándoles guardia por alguna temporada en caso necesario; y que se procura eficazmente emplear en caníos, obras públicas de la provincia y otras labores análogas a estos brazos, que claman por ocupación, y abrigan, aunque callen, la inquietud y descontento a la par de su miseria, mientras no se les proporcione útiles tareas. De Real Orden...

Luis Lópes Ballesteros"
3) Bando del Jefe Político de Barcelona dando cumplimiento al Decreto de la Real Audiencia de 6 de enero de 1841.

"1° Las Asociaciones para protegerse y recorrerse mutuamente los trabajadores por medios legales y justos son permitidas; pero en cantera alguna ha de emplearse para ello seducción, conciencia ni violencia de ninguna especie, ni contra obreros, sean o no asociados, ni contra dueños de fábricas ni de establecimiento alguno industrial.

2° No se permitirá que los fabricantes, por suministro de capitales o por públicos o secretos medios de ocación y violencia, ni entre los de la misma clase ni entre los obreros, intenten fijar a merced de su agradación y voluntad la suerte de estos. Cualquier injusta coalición de parte de los dueños de fábricas, aunque no fuere acompañada de violencia ostensible, vendría a ser, por los efectos que indispenablemente produciría, tan criminal y condensable como en las clases proletarias el uso de la fuerza que reprimen las leyes.

....."

4) Crimen de 9 de diciembre de 1841.

"No debe darse en el Reino asociación alguna que no esté autorizada por el Gobierno, según se dispone en las leyes 12 y 13, título 12 de la Novísima Repoblación, y hallándose formada en esa capital sin aquel necesario requisito una asociación llamada de protección mutua de tejedores de algodón, disponía V. E. que cesara inmediatamente, dando parte al Ministerio de la Gobernación de haberse así verificado para ponerlo en conocimiento de S.A. el Regente del Reino..." (Dirigida al Gobierno político de la ciudad de Barcelona).

5) Real Orden de 20 de Marzo de 1842.

"5. A que darse que se proporcione a las diferentes clases de la sociedad los medios de fomentar su bienestar y que se proteja el espíritu de asociación entre ellas, por las ventajas inmensurables que produce, y de que la experiencia nos proporcione cada día notables ejemplos, las tendrá en todas ocasiones su share protectora siempre que su objeto no sea otro que el filantrópico..., que para constituirlos no se apela a la obseción y a la ociosidad... y que a su sombra no se quieran imponer a otras clases condicio
nes enrocadas, forzándoles a reconocer obligaciones que no pastaron...”

6) Bando de 3 de octubre de 1844 (Gobernador Civil de Barcelona).

"Habiéndose llegado a mi noticia que en algunas fábricas de esta capital han sido denunciados e insultados por sus trabajadores, los operarios que por carecer de jornal fueron destinados a ellas, a título de que esos no pertenecen a la disuelta Sociedad de Tejedores, y mansueto como estoy a no permitir unos excesos que atacan directamente al libre ejercicio de la industria, vengo en ordenar lo siguiente:

1º. Todo el que directa o indirectamente insultare a los operarios —que sean destinados a las fábricas de esta capital, será castigado con todo el rigor de la ley, según la gravedad del caso.

2º. Los dueños de las fábricas, los comisionados, suplentes, capos de decena y demás capataces o jefes que haya o pueda haber, son esencialmente responsables de toda tropelía o exceso que en su establecimiento se cometa, y los primeros tienen la obligación de avisaos rápidamente de cuanto adviertan, con nota nominal de los presos de ellos.

3º. Siendo las fábricas un sitio destinado exclusivamente al trabajo, queda prohibida desde hoy en ellas la lectura de periódicos y demás papeles públicos.

4º. El Director de la Junta de Fábricas, don Nicolás Tous, cuidará con especial cuidado de que no tenga ingreso en ellas ningún operario, sin antes la presente la correspondiente papeleta de salida del propietario a quien déje de servir.

5º. Los dueños de las fábricas no podrán rebajar el precio actual de los jornales, dar mayor extensión a las piezas de las que en el día tienen, ni alterar en nada el orden interior del establecimiento. Toda contravención a lo expuesto será castigada con el rigor que acerquen su importancia.

Francisco Fulgencio."

7) Código Penal de 1842

"De las demás asociaciones ilícitas.

Art. 211. Es también ilícita toda asociación de más de veinte personas que se reúna diariamente, o en días señalados, para tratar de asuntos religiosos, literarios, o de cualquier otra clase, siempre que no se haya formado -
con el consentimiento de la Autoridad pública, o si faltare a las condiciones que fija la habieran fijado.

Art. 212. La asociación de que trata el artículo anterior será disuelta y sus directores, jefes o administradores serán castigados con la multa de 20 a 200 duros, y en caso de reincidencia con la de arresto mayor y doble multa.

En las mismas penas incurrirán los que prestaran para la asociación las casas que posean, administran o habitan.

"De las maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

Art. 461. Los que se coligaren con el fin de acuñar o adulterar abusivamente el precio del trabajo, o regular sus condiciones, serán castigados siempre que la coligación hubiere consensado a ejecutarse, con las penas de arresto mayor y multa de 10 a 100 duros.

Si la coligación se formar en una población menor de 10,000 almas, las penas serán arresto menor y multa de 5 a 50 duros.

Las penas se impondrán en ambos casos en su grado máximo a los Jefes y procesadores de la coligación, y a los que para asegurar su éxito emplearen violencias o amenazas, a no ser que por ellas merecieran mayor pena."

3) Real Orden de 25 de agosto de 1853.

"Habiendo acudido a S. M. la Sociedad económica matritense llamando su Real atención acerca de los funestos resultados que pueden producir a los intereses públicos y particulares la facilidad y frecuencia con que se establecen asociaciones de seguros mutuos sin la conveniente autorización e inspección del Gobierno, y haciendo presente que la ignorancia y mala fe pueden ocasionar abusos que desvirtúen el fundamento y beneficio principal de esta clase de asociaciones, esencialmente necesarias para el desarrollo de los pueblos, la Reina (Q.D.G.), deseosa de evitar los peligros del descrédito sin destrozar la infatigable acción individual, se ha dignado mandar:

1° Que en lo sucesivo no autorice V.S. la formación de ninguna sociedad de esta clase, no obstante lo dispuesto en la Real Orden de 28 de febrero de 1839, quedando en suspenso las disposiciones en ella contenidas.

2° Que todas las solicitudes que se presenten con el referido objeto se instruyan observando puntualmente lo preseptado en la Ley de 28 de febrero y Reglamento de 17 de febrero de 1848 en la parte en que sus disposiciones pue-

18
dan tener aplicación a las compañías de seguros mutuo, pues si bien aquellas sólo tratán de las mercantiles, no habiendo legislación especial para éstas, es por ahora indispensable recurrir a la que más analogía tiene con ellas.

Y 3º que V.S. resueta a este Ministerio a la mayor brevedad posible nota expresiva y circunstanciada de todas las sociedades de este género que se hallan establecidas en la provincia de su mando, manifestando su objeto, la autorización en que virtud existen, su régimen interior, y actual estado, acompañando además sus estatutos, una breve explicación de los resultados que hayan producido, y cuanto condúzca a formar una idea segura de la conveniencia de continuar el actual sistema o alterarlo en beneficio del público; tois a fin de preparar con estos datos un proyecto de ley para la definitiva organización de las expresadas asociaciones.

De Real Orden...— Aña. Sr. Gobernador de la Provincia de...”

9) Banco de 25 de Julio de 1854. (Capitán General de Cataluña).

"Habiéndose presentado una comisión de la clase de hiladores manifestándose los perjuicios que se le siguen de la continuación de las máquinas de nueva invención conocidas por selfactinas, exponiendo una copia de razones y hechos que han convencido al falso y hechos conocen la justicia de la reclamación, he tenido por conveniente resolver quedan prohibidas las expresadas máquinas selfactinas, expulsándose las máquinas que hasta ahora se han usado; providencia que toca, con tanta mayor convicción de falso, cuanto que ya varios fabricantes, conociendo los perjuicios y calamidades que se siguen de ella a la clase obrera, de propia voluntad y sin excitación alguna se decidieron a tomar este partido. En su consecuencia, dictará V.S. las disposiciones convenientes para que esta medida de imprescindible necesidad tenga desde luego la debida publicidad para su debido cumplimiento.— La Recha”.

10) Banco de 30 de Abril de 1855. (Gobernador Civil de Barcelona)

"Explotando su credulidad (la de los obreros) quieren algunos hacer degenerar es coaliciones criminales y reacciones políticas las asociaciones benéficas y filantrópicas, y, cumpliendo su deber debo dar la voz de alerta a la clase obrera, debe dar la voz de alerta a la clase fabricante. A unos y otros pro
tagerá la ley en el libro ejercicio de sus industrias y en su legítima asocia-
ción; a unos y otros castigará severamente al causar atentar o abusar de este
sagrado derecho del hombre.

1° Se establecerán en cada localidad manufacturera ocasiones mixtas per-
sistentes de cuatro, ocho y doce individuos para consiliar y dirname las cuestio-
nes laborales entre operarios y fabricantes, bajo la presidencia, con voto decisi-
vo, de los señores Alcaldes que llevarán a ejecución y cuidarán de la observan-
cia de los convenios y decisiones.

2° El precio de la mano de obra y las horas de duración del trabajo serán
convencionales entre fabricantes y operarios y con arreglo a las tarifas regula-
deras de precios establecidas o que se establecieren de común acuerdo, autori-
sándose estas sólo para la fabricación de tejidos y para los talleres donde se
reúnen más de cien operarios.

3° Si faltando a los compromisos contraídos el fabricante cerrase sus fa-
blicas, sufrirá una multa de 100 a 500 reales diarios si fuese sin causa justi-
ficada ante la misma comisión; y el obrero que abandonase el trabajo, otra de
5 a 50 reales, o un arresto de uno a cinco días.

4° Todo acto de ocasion o violencia contra la libre admisión o concurren-
cia de los obreros al trabajo y a las fábricas, será juzgado con arreglo al art.
461 del Código penal.

5° Los que se caligaren para abusar abusivamente el precio del trabajo
serán castigados según el mismo artículo, con la pena de arresto y multa de 10
100 duros; y los que se caligaren para encarcelarlo y a este fin abandonaren
el trabajo sufrirán las mismas penas.

*****

6° No se autoriza asociación alguna, sea de la clase que fuere, sino cir-
cunscrita a la localidad y limitada acarreante a objetos filantrópicos; y al es-
ten los jefes autorizados de cada asociación presentarán la autorización y regla-
mente a la alcaldía constitucional, con la lista de los asociados, dentro del
término de 30 días.

7° Todo acto de violencia para hacer ingresar en una asociación, es un
ataque a la libertad individual y como tal será castigado con arreglo a las le-
yes.

8° Para garantir a todo asociado el legítimo empleo de sus sacrificios, y
auxiliar su fomento y benéfica aplicación, presentarán anualmente sus juntas de gobierno, las cuentas de recogida e inversión de fondos a la respectiva alcaldía constitucional para su publicación, y ésta, con el parecer de los súbditos, las transmitirá a este gobierno de provincia para lo que hubiere lugar, proponiendo al mismo tiempo todos los medios que crean conducentes para mejorar la institución y condición moral y material de cada una de las diversas clases.

13o Las asociaciones autorizadas que no cumplieren dentro del plazo fijado con la presentación de las listas de socios se considerarán disueltas, y si se continuaren exigiendo las cuotas, se considerarán los anteriores como evadidores con arreglo al Código. Las demás asociaciones no autorizadas serán perseguidas con arreglo a las leyes.

Los señores alcaldes vigilaran el exacto cumplimiento de las precedentes disposiciones, quedando a la vez responsables de su puntual observancia.

11) Bando de 21 de Junio de 1855. (Capitan General de Cataluña)

"Siendo ya indispensable para la conservación del orden público en Cataluña, constantemente amenazado por las disensiones fabrilles, y tan necesario y urgente terminar estas, debiendo la autoridad castigar con el necesario rigor y con arreglo a disposiciones vigentes al que coarte la libertad de otro para disponer según mejora la parte de sus capitales o personas, con perjuicio de la tranquilidad que felizmente se disfruta y favoreciendo con ello los planes sediciosos de los que han levantado en otros puntos la bandera de rebeldía y despotismo, como adición a mi bando de 30 de Mayo último (en este bando se establecía la pena de muerte para los insurrectos carlistas), en virtud de las amplias facultades con que estoy autorizado, he tenido a bien ordenar:

1º Todo el que directa o indirectamente se propase a coartar la voluntad de otro para que se abra sus fábricas o concurra a trabajar en ellas si no acede a las exigencias que colectivamente se intenta imponer, será considerado como perturbador del orden, y se le castigará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2º del repetido bando del 30 de Mayo último (se decir, con pena de muerte. T de L.) y conforme a sus particulares circunstancias.

2º Para llevar a efecto la anterior disposición se declaran suprimidas en el acto todas las asociaciones que hoy existen entre fábricantes y opera—
ríos que no se hallen autorizadamente establéciéndose, y las que puedan existir porque tan solo tengan un objeto filantrópico o de acoletters sin la menor referencia a las actuales discusiones sobre precios o pagos de trabajos, continuarán bajo la inmediata dependencia de la autoridad local y con sujeción a la militar, ateniendo a las prescripciones que por separado habrán de dictar se para la rígida observancia de este bando.

12) Bando de 3 de julio de 1855. (Capitán General de Cataluña)

"En el día de hoy, y de un modo inacífulable, he visto se han suspendido todos los trabajos de las fábricas, cediendo los obreros a las sugerencias de mal índole, pues se comenta que muchos en la generalidad de ellos están contentos con los precios que le proporciona su honrada ocupación... Salvado y perdidamente se ha intentado persuadir a los honrados obreros que por la autoridad iban a descubrirse las asociaciones filantrópicas y de respetable objeto..."

13) Proyecto de ley sobre sociedades, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturer. (Presentado por Alonso Martínez a las Cortes Constituyentes, el 8 de Octubre de 1855).

"A LAS CORTES.

Intereses de la mayor importancia, la suerte del fabricante y del obrero, el porvenir de nuestras manufacturas, el reposo y bienestar de la sociedad entera desean hoy para la industria nacional nuevas prescripciones más acordes a su progreso, a las condiciones actuales de su existencia, a las lides y a la tendencia del siglo que reconoce en ella un germen fecundo de fuerzas y poderío para el Estado, y de prosperidad y riqueza para los pueblos y las particulares. Otras son ya las miras y las necesidades de la industria fabril y manufacturera; variación con los tiempos y las instituciones sus medios de acción, sus elementos de vida, los límites de sus vastas empresas, los recursos para realizarlas. Al trabajo aislado y reducido de la familia sucedió el de los grandes establecimientos fabriles, a la educación doméstica del operario, la que recibía en los talleres, al ejemplo paternal, ce de los maestros y capataces, a la fuerza limitada del hombre, la potencia mágica de la máquina; a la tradición y la rutina, la teoría del arte justificarse por el resultado de las aplicaciones, y el auxilio de las ciencias física-automáticas; a los cálculos del comerciante reducido a sus propios recursos, al espíritu de asociación, siempre activo y poderoso, emprendedor y resuelto; a los establecimientos industriales sin puntos de enlace ni intereses comunes, esparcidos y aislados en apartadas cárceles, el acoseamiento y la unidud poderio de los grandes centros de la producción inima..."
trial, donde la actividad del trabajo, el considerable número de operarios —atraídos por un malo destino—, la brina de intereses encontrados, las rivalidades de diversas profesiones y los esfuerzos del ingenio para extender los límites de la producción industrial, agitando los ánimos, e hiriendo las imaginaciones excitadas, más de una vez apartas de su objeto el movimiento productor, y con las armas legítimas para asestarle procuran también ancha entrada a otras que lo paralizan o destruyen, igualmente reprobadíes por la moral y por las leyes.

Si la opinión pública sabe apreciar en su justo valor estas variaciones de la industria nacional, y con ellas la nueva posición y los medios y los hábitos del productor, se reconoce generalmente la esquitulad y la justicia de —los principios en que se fundan las instituciones tutelares del trabajo y de la producción, y los admite con un elemento de vida para los talleres y las fábricas; si encuentran apoyo en las leyes y en el espíritu del siglo, se pueden sin embargo recibir todo su desarrollo, fueron a menudo apreciados de un modo general o inintencionado, y aún la buena fe les concedió nodo de una vez —tendencias y límites que alterando su naturaleza, o las esterilizaron de todo punto, o, lo que es peor, las convirtieron en daño de los intereses cuya seguridad y fomento se consagraban.

Para hacer ahora más conocida su verdadera índole, más fecunda su aplicación, menos ocasionada al error su inteligencia, no hay por fortuna que luchar ni con enojadas preocupaciones ni con una administración viciosa y espíritu —es. Desaparecieron ya los obstáculos con que luchaba un varón al genio industrial por espacio de tres siglos, sometido incesantemente a una odiosa tutela a la fiscalización suspicia y caustica que anegaba sus inspiraciones, al prurito de prescribirle reglas para darle nuevo impulso, cuanto solo producían su apocamiento y deméritos. Que no fue otro el resultado de los privilegios y las exclusiones abusivas de los reglamentos gremiales, de las leyes del aprendizaje, del inconsiderado afán de marcar límites al trabajo, condiciones a la mano de obra, precios al productos, oteras y odiosas trabas al genio industrial.

Ahorrado esto, nunca hubiera podido levantar su vuelo y concebir grandes empresas, ni corresponder alegremente al que, presumiendo por ventura propio ve la daba la muerte a fuerzas de cuidados inditiles. Consignados ahora en nuestras leyes los principios que aseguran la libertad y el desarrollo de la industria en sus diversos ramos; reconocido el derecho de asociación que la —extiende y mejora, inutil pareciera añadir nuevas y aún excesivas prescripciones a las ya publicadas para alentarla, si errores desplazables, el abuso de —las concesiones obtenidas, la importancia y complicación de los intereses, el influjo y la tendencia de los grandes centros industriales y las relaciones establecidas entre los fabricantes y los productores, no viningo a demostrar la necesidad de hacer más aplicables y fecundas las doctrinas que desde las Cortes de 1813 aseguraron con la libertad y la concurrencia del productor el espíritu de asociación y el respeto debido al trabajo. En efecto si una dolorosa experiencia enseñó la verdadera protección que desempeña la industria y libre al fin en sus creaciones dejó de luchar contra los abusos del poder o la fiscalidad —la las instituciones administrativas, todavía surgieron para ello obstáculos y aligeres del gusano mismo de la libertad, cuyos límites desconocían; de la superabundancia debida no regulada por la experiencia; del desarrollo, siempre era
ciente, de las empresas industriales; de la complicación de los intereses mútuos del fabricante y el obrero; del espíritu de asociación ejercido en una extensa escala; de un nuevo orden de necesidades y de ideas, nacido en el seno de las clases industriales; de las vicisitudes y las tendencias y el movimiento progresivo de la producción, y de los medios mecánicos empleados para obtenerla. Falsas, peligrosas, doctrinas, utopías especiosas, insidiosamente proclamadas como la inspiración de una santa filantropía; tesorería quirúrgicas invocadas en nombre de la virtud, y contrarias, sin embargo, a todo orden social, traídas por la violencia de las pasiones o la hipocrisía del crimen al campo de los hechos, vinieron en mal hora a multiplicar estos embarrados, colocando la industria nacional en una situación difícil para poner más de una vez en paga los elementos que constituyen su esencia y progreso.

De aquí las disensiones que existen entre el fabricante y el operario, cuando una misma suerte debiera estrechar sus relaciones y entusiasmos; de aquí la perturbación de los talleres y las fábricas, las desconfianzas y las quejas, la paralización de las empresas mejor combinadas y el olvido recíproco de los deberes impuestos a la vez por los sentimientos más caros a la humanidad, por la índole de la producción industrial, por las tradiciones y las costumbres, y aquella benevolencia generosa que, heredada de nuestros mayores ha constituido el patrimonio de los que, unidos por un mismo destino, consagran sus fuerzas a cumplirla en beneficio del individuo y de la sociedad entera.

A evitar estos riesgos, harto frecuentes por desgracia, y a menudo provocado por el espíritu de subversión y de intrigas; a poner en armonía las mismas intereses del fabricante y el obrero; a fundar en su unión nuevas garantías de seguridad y reposo para los pueblos, de orden y concierto para los establecimientos industriales, de moralidad y bienestar para las familias, de progreso y mejora para el trabajo, se dirigen esencialmente las prescripciones del proyecto de ley ahora sometido por el Ministro que suscribe a la deliberación de las Cortes, producto de la experiencia y de muy acuciosos deseos, exigidos por una necesidad, tanto más urgente, cuanto son más vastos e importantes los intereses sociales a cuya estabilidad y desarrollo se consagra, ordena y reúne las disposiciones legadas esparcidas en nuestros C6
digan, para promover los talleres y las fábricas; y al darle la unidad y enlace, da qué hasta ahora carecían, los hacen más inteligibles y aplicables, y los pone en armonía con los principios que aseguran la propiedad y el trabajo. Por ventura, al lado mismo de las prescripciones legales aparecerán - también algunas veces otras que, por decirlo así, menos elementales, pudieran - considerarse como reglamentarias si la observación y la dificultad de las circunstancias y la fuerza irresistible de los acontecimientos y de las ideas no hubiesen ya desviado toda su importancia y el estrecho enlace que, identificándola con la disposición legal, hicieren burla en ella, así como facilita su ejecución combatiendo las resistencias nacidas frecuentemente de la inteligencia viciosa, dada por el error o el crimen a las intenciones del legislador.

Por fortuna para conciliar la estabilidad y el orden y los intereses - del propietario y del obrero con la independencia y el progreso de la industria, no es menester el Gobierno reglamentos minuciosos, que, reconociendo las tramas jurídicas y las cavilaciones del fisco, acabarían por destruirlos; tampoco necesita una intervención opresora que desaliente al genio y cuente sus inspiraciones y ponga coto a sus expresiones. Bastará proclamar el principio de la libertad industrial y ponerla a cubierto de sus misas amos: bastará respetar los contratos establecidos entre el fabricante y el operario, con arreglo al derecho común, procurando sólo que en la manera de cumplirlos no destruyan la organización industrial, y lleven la perturbación y el escándalo al seno de las familias y de la sociedad que los sustenta y protege.

Ninguna traba impone al operario; ninguna obligación penosa, ninguna garantía de su conducta que le ligue y embarace en el desempeño de sus obligaciones. No: la tradición y el recuerdo de las honradas costumbres de sus mayores, aquella buena fe que ha convertido siempre la dependencia en un vínculo de amor y confianza, que hizo de la gratitud un deber y un consuelo, - que transformó nuestros talleres en una familia de hermanos, la enseñaron mejor que los receptos y las restricciones el respeto a las leyes, el reconocimiento a los beneficios recibidos, el amor al trabajo, las virtudes de la moral que sanctifica los contratos, y la paz de la familia que triunfa del infortunio mismo.
Si el proyecto de ley impone una condición sola al que ha de ser recibido en los establecimientos industriales, esta condición es precisamente un beneficio reclamado por la humanidad, un homenaje tributado a la dignidad de nuestra especie. No podrá consentirse nunca que la niña desvaliada y enseñorosa, al someterse a un trabajo prematuro y continuo, debilita su físico, enerva su inteligencia, pierda apartada del hogar desolado los tiernos afectos de la familia, para consumirse en un artefacto, condensado sin remedio y sin placer a la impotencia y los dolores de una vejez anticipada. Este mismo interés por el hombre, exige a los establecimientos fabricas condiciones higiénicas, luz, ventilación, orden y propiedad en todo; precauciones para evitar peligros y estragos causados por los grandes procedimientos y la fuerza de poderosas motrices. No era menos necesario prevenir aquellas reprobadísimas combinaciones de un interés mal entendido para servir las utilidades del trabajador, y arrancarle el fruto legítimo de sus sudores. A procurarle una justa protección se dirigen algunas de las disposiciones del proyecto de ley.

Pero tan cumplidas seguridad suponen de parte del favorecido la exacta observancia de la disciplina y de las condiciones a que se ha sometido libremente al ingresar en los establecimientos industriales; suponen en éstos un orden que ni puede ni debe alterarse; suponen, en fin, la corrección de aquellos excesos que, convirtiendo los talleres y las fábricas en exigencias y quejas inmovilizadas, alteran y suspenden sus trabajos, perturban el público sosiego y paralizan, cuando no destruyen, las empresas industriales mejor organizadas. En aquí otro objeto importante no olvidado en el proyecto de ley que nos ocupa.

Inútiles serían estas precauciones, y no se concebiría tampoco la existencia de la industria, su desarrollo progresivo y su fuerza creadora, si, abandonando al individuo a sus propios esfuerzos se le negase el derecho de asociación. Inherente a la naturaleza misma del hombre, indispensable a su perfección y mejora, germen fecundo de grandes empresas, es una de las más preciosas conquistas de la civilización moderna. Las leyes lo asisten; la opinión pública lo ha proclamado desde bien temprano, y nadie le contradice jamás entre nosotros, reconociendo en su existencia la vida de la industria y el móvil más activo de su progreso. Pero este derecho, como otros, esn
de la naturaleza, no es, no puede ser absoluto; tiene que sufrir aquellas restricciones que el bienestar de la sociedad demanda, y sin las cuales se convertiría en un instrumento de opresión y de ruina. Así es como la ley autoriza las asociaciones establecidas con un objeto laudable, concordante —útiles, y cuyos fines y tendencias pueden públicamente confesarse. Más para apreciar su bondad y darle una existencia legal, precisa que la administración examine su espíritu y sus límites, sus medios de acción y sus tendencias; porque de otra manera, incompatibles con muchos intereses ya creados, exclusivas y exigentes, oculta bajo falsas apariencias sus verdaderas intenciones, erra preponderantes y turbadoras, es ciego instrumento de los conspiradores, con la existencia de la industria comprometieron también la de la sociedad entera y no sería la libertad sino la licencia a un móvil de sus expresas.

Pero el hombre industrial, el operario que le presta su inteligencia y su trabajo sin aspirar a esa asociación misteriosa y escondida a la vigilancia, a toda publicidad, a todo límite, encuentra un vasto campo a sus proyectos en las que tienen por objeto el socorro mutuo y la beneficencia pública y privada, el alivio y mejora de las clases productoras, la prosperidad de los diversos ramos industriales. No hay en esto ni excepciones ni privilegios: la ley pone el beneficio y la recompensa al alcance de todas las clases, de todas las condiciones. Hace más: garantiza la existencia de las sociedades; aísla la moralidad, que constituye su crédito, evita y castiga los cómputos manejos y las dilapiaciones, que al alejarla de su instituto las conducen a su ruina. Para dar nuevo precio a estas ventajas, el proyecto de ley prescribe reglas sencillas y siempre compatibles con la independencia de la asociación para asegurar su fondo para que sean invertidos conforme a sus fines; para que la confianza de las interesadas no sea burlada por la ignorancia o mala fe de los que obtuvieron su sufragio. De aquí la disposición tutelar de que los Bancos públicos o las casas de reconocido mérito en el comercio sean los depositarios de los fondos sociales. Ojalá que una dolorosa experiencia nunca hubiese hecho de todo punto necesaria esta medida! Ojalá que ella sola bastase para conservar en el seno de las sociedades industriales el orden y regularidad que constituye su crédito!
Pero son harto complicados y extensos sus intereses, harto comunes sus vicisitudes, harto sujetos al error sus cálculos y especulaciones, para que entre los mismos asociados no nacen las quejas y la desconfianza, los compromisos y conflictos que conviene terminar en su origen de una manera expedita y justa. Tal es el objeto del jurado de probistas elegidos entre los directores y los operarios de las manufacturas, encargados en las cuestiones de hecho de averiguar con sus fallos a las partes disidentes, y de imponer las penas en que hubiesen incurrido por las faltas cometidas y consignadas en la ley. — La creación de este jurado, depositario de la confianza de los asociados, será siempre autorizada por un Real decreto.

Al ofrecer al Gobierno estas seguridad a la inteligencia y laboriosidad del operario, siempre objeto de sus deseos, no pierde ni un momento de vista los medios de mejorarlo su condición y de asegurarle con el bienestar de su familia y los consuelos y las honrosas tradiciones del hogar doméstico, la enseñanza profesional que fálica y mejore su trabajo, y la educación moral que dé mayorprecio a sus sacrificios, perfeccionar su razón, ilustrar su conciencia, hacerle todavía más digno de las simpatías que excita y de la felicidad que aspira. Se aquí un grato deber de la administración pública, y uno de sus más arduos deseos.

Si a tan benéficas disposiciones se alagan por una parte la inspección de la autoridad superior administrativa en cada provincia, y por otra parte la vigilancia constante pero insensiblemente del Gobierno, en aquellos grandes centros de la producción, donde el desarrollo de la industria aglomera a los operarios, agita las pasiones y abre campo a los disturbios; ni la industria podrá tomar la reproducción de los excesos lamentables que la cubrieron de dudo, ni la sociedad quedará de nuevo expuesta a las consenciones que tan dolorosas y profundamente la agitaron. Será entonces una variedad el libre — ejercicio de la industria, la impotencia de sus perturbadores, triunfo de — los buenos principios, y el aprobio y la ruina de los que, al tributarlos un sentido respeto, pretenden sustituirlos con variadas y criminales utopías.

Tales son las bases y el espíritu del proyecto de ley que el Ministro de Fomento tiene la honra de someter a las deliberaciones de las Cortes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y completamente autorizado por S.M.
PROYECTO DE LEY SOBRE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

Del ejercicio y policía de la industria manufacturera.

Artículo 1º. Todos los españoles o extranjeros pueden ejercer libremente la industria manufacturera sin necesidad de acreditar previamente su aptitud pericial.

Para que gocen de este derecho las sociedades colectivas y las por acciones, deberán hallarse constituidas con arreglo a las leyes mercantiles.

Art. 2º. Son libres:

1º El uso de máquinas, utensilios, aparatos, herramientas y procedimientos mecánicos o químicos para la obtención de efectos industriales, salvo los derechos que confieren los privilegios de invención e introducción, las disposiciones relativas a establecimientos inóspitos, insalubres, o peligrosos, y las leyes penales o de policía y de orden público que aseguren la fidelidad de las transacciones.

2º Los contratos sobre prestación de servicios y otras, sin que autoridad, corporación o persona extranjera pueda intervenir en la tasa del salario o cantidad del servicio, ni en las condiciones de tiempo, medida, destajo o cualquiera otra denominación con que sea conocida la prestación de obras o servicios, salvo las limitaciones expresadas en esta ley.

Art. 3º. El contrato de prestación de servicios puede estipularse por día, semana, mes o año, sin que en ningún caso exceda de este tiempo.

Exceptúense los contratos que se otorguen con sobrestantes, contramaestres, mayordomes u otros contratos análogos que lleven consigo dirección o vigilancia de otros trabajadores, o que tengan sueldo y obligaciones estipuladas en escritura pública.

Art. 4º. En talleres o establecimientos donde se ocupen más de veinte personas otorgarán estos sus contratos por escrito, sin cuyo requisito no tendrá fuerza civil de obligar.
Habrá al efecto libros talonarios en que se expresen todas las condiciones generales del contrato y se llenen las especiales o variables, quedando en su reciprocidad garantía de las partes contratantes el libro de talones en poder del dueño del establecimiento y la cédula cortada de dicho libro en el del dependiente.

Art. 5º Los interesados podrán además llevar guaridanos en que se anote la parte de obra hecha, cuando se debe pagar por peso, número o medida, y no se verifique el pago en el acto de la entrega.

En el mismo acto, el operario podrá comprobar la operación para cerciorarse de su exactitud y conformarse con la cantidad que deba ser satisfecha.

Art. 6º El dueño de todo establecimiento industrial está obligado a formar y tener siempre a la vista de los operarios el reglamento de orden y disciplina que deba regir dentro de la fábrica, determinado sea principalmente las horas de entrada y salida.

Si la autoridad aprueba estos reglamentos, sus infractores serán castigados con arreglo al art. 494 del Código penal, y además podrán ser despedidos del taller.

Art. 7º Sólo en establecimientos donde se ocupen más de veinte se permitirá la admisión de niños o niñas que hayan cumplido ocho años, debiendo trabajar unicamente por la mañana o por la tarde para que les quede tiempo de dedicarse a su instrucción.

Los jóvenes de ambos sexos mayores de doce años y que no pasen de dieciocho, sólo podrán trabajar diez horas diarias entre las seis de la mañana y las seis de la tarde.

Art. 8º Los que entraren o permanezcan en un establecimiento industrial sin licencia previa de su dueño o encargado a pretexto de hermandad, manto pio, cofradía, asociación u otro motivo semejante, sufrirán el castigo señalado en el art. 494 del Código penal.

Art. 9º Se declaran comprendidos en el art. 461 del Código Penal:

1º. Los que colectivamente abandonen el trabajo sin motivo.
2º. Los operarios que impidan a otros de su clase concurrir al trabajo.
3º. Los que impusieren cultos, prohibiciones o mandatos a los dueños,
encargados de los establecimientos industriales o a los obreros, con el fin de impedir el trabajo.

Art. 10°. Se declaran comprendidos en el art. 164 del Código penal a los que accidentalmente causen daño en la persona o bienes de los dueños o encargados de los establecimientos industriales.

Art. 11°. Se declaran comprendidos en el art. 483 del Código penal a los operarios o dependientes que dentro del establecimiento faltaren al respeto debido a sus superiores.

Art. 12°. Los establecimientos industriales tendrán las condiciones de capacidad y salubridad que se fijen por el reglamento de ejecución de esta ley, o que se hallen determinadas por los generales de policía.

Art. 13°. Si por infracción de los reglamentos, o por imprudencia o falta de prevención, ocurriese algún daño material al operario o dependiente, los gastos de su curación, así como los salarios que le hubieren correspondido en los días que no haya podido trabajar, será de cargo del dueño del establecimiento, y tendrá que indemnizarle cuando el daño le inutilice perpetuamente — para el trabajo; todo eso sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal.

De las asociaciones.

Art. 14°. Toda sociedad de fabricantes u operarios, o las que se formen de unos y otros, cualquiera que sea su objeto, nombre y organización, deberán obtener previamente la autorización del Gobierno.

Art. 15°. Las sociedades de fabricantes u operarios se constituirán — con suscripción a las prescripciones generales del derecho y disposiciones vigentes sobre asociaciones, o con arreglo a las leyes mercantiles, según su objeto; y si éste fuese el de socorrerse mutuamente en casos de enfermedad, viudas, orfandad, vejez o falta de trabajo, cuando la falta no sea causada por la voluntad o coalición de los obreros, se organizarán además conforme a las disposiciones siguientes:

1.°. Hasta que las asociaciones de socorro mutuo hayan obtenido la
autorización del Gobierno, no podrán exigirse dividendos pasivos ni cantidad alguna de los suscritores.

2°. Serán siempre locales.

3°. El número de sus socios no excederá de 500.

4°. En los estatutos de cada sociedad se fijará el máximo de los fondos que han de tener existentes.

5°. Todos los años presentarán el balance o cuenta de la recaudación e inversiones de los fondos sociales.

6°. Estos fondos se conservarán en cajas, Banco u otro establecimiento público, y donde no lo hubiere en casa de comercio que garantice el depósito.

7°. Los directores u otros mandatarios de las sociedades núm. 10—

9°. legamente autorizadas, quedan sujetos a las disposiciones del libro segundo, —
it. VIII, capítulo 14 del Código Penal.

De la jurisdicción e inspección de la industria manufacturera.

Art. 17°. Se autoriza la creación de jurados de prohombres de la in-
dustria que decidan las cuestiones de hecho y corrijan las faltas previas espe-
cialmente por esta ley.

Art. 18°. La creación de cada jurado de prohombres tendrá lugar a
instanta fundada de los interesados, instruido el oportuno expediente y en vir
ud de un Real decreto que se publicará en los diarios oficiales.

Art. 19°. El jurado se compondrá de dos, cuatro o seis individuos
—elegidos por citado entre fabricantes, empresarios o jefes de taller, y entre
los mayordomos, sobrstantes u operarios presididos por el juez de paz con vo-
eto.

Para que el jurado se halle siempre completo, habrá igual número de
vocales suplentes.

Unos y otros deberán ser vecinos del pueblo donde se establezcan estos
tribunales, haber cumplido 30 años y estar en el goce de los derechos civiles.

Art. 20. Los vocales propietarios y suplentes de los jurados de pro-
hombres, serán nombrados por el Gobierno a propuesta en torna de los gobernador-
res de provincia, y se renovarán todos los años.

Art. 21. Los jurados de prohombres conocerán siempre en juicio verbal,
del que se levantará acta, de las cuestiones periciales y de hecho que se susci-
ten entre los fabricantes o encargados de los establecimientos industriales, en
pleados en los mismos, operarios y dependientes siempre que el importe de la as-
sa litigiosa no exceda de 600 reales.

Las jurisdicciones de cada jurado se limitarán a una localidad o distrito
de dos o más pueblos, según se expresa en el Real decreto de su creación.

Art. 22º. Las decisiones serán siempre ejecutorias, a excepción de las que se refieren a la competencia del jurado, de las cuales se podrá apelar ante
la audiencia del territorio.

Art. 23º. El Gobierno podrá nombrar inspectores de la industria manufactu-
era que residen en las casas o centros industriales para vigilar el cum-
plimiento de esta ley, y llenar las instrucciones que se les prevean.

Al efecto de los inspectores podrán entrar libremente en los establecimien-
tos industriales, recorrerlos, examinar los contratos otorgados en la forma pre-
scrita por el art. 4º, y los reglamentos que rijan en cada establecimiento y sus
dependencias, reconocerlas en sus condiciones de salubridad y capacidad, y ad-
quizar cuantas noticias juzguen conducentes para el desempeño de su cometido y
la formación de la estadística industrial.

Disposiciones Generales.

Art. 24º. Los dueños de los establecimientos industriales, todos los em-
pleados, dependientes y trabajadores que se ocupan en ellos, y sean los indivi-
duos españoles o extranjeros, quedarán obligados al cumplimiento de esta ley y su
jetos a todas sus prescripciones, con renuncia implícita de todo fuero, jurisdic-
dición o excepción que intenten alegar en contrario.

Art. 25º. El Gobierno dictará el reglamento de ejecución de esta ley, — por la cual quedarán derogadas cualesquiera otras y cuantas disposiciones, orde-
nanzas, reglamentos, usos y costumbres que sean contrarios a lo mandado.

Madrid, 8 de Octubre de 1855. El Ministro de Fomento,
Manuel Alonso Martínez.
14) Real Orden de 26 de Noviembre de 1859.

El ministro de la Gobernación dice con fecha de hoy al Gobernador de esta provincia lo que sigue:

"He dado cuenta a S.M. de la comunicación de V.E. de 15 de febrero último, consultando que inteligencia de be darse a la legislación vigente sobre sociedad de soco rros mútuos. Y vista la Real orden de 28 de febrero de 1839, por la cual se determina que las sociedades que tengan un objeto puramente benéfico puedan constituirse libremente, sin más formalidad que la de quedar sujetas a la inspección de la Autoridad civil superior de la pro vincia respectiva:

Vista la Real orden de 25 de agosto de 1853, decla rando en suspenso los efectos de aquella, y disponiendo que las sociedades de socorros mútuos se sujeten a las prescripciones que por analogía le sean aplicables de la ley de Sociedades anónimas de 28 de enero de 1848 y regla mento para su ejecución:

Considerando que por más en esta última Real orden se hable de sociedades de seguros y no de socorros mútuos, no puede haber duda de que por ella se declararon en sus penso los efectos de la ya mencionada de 28 de febrero de 1839, puesto que en su contexto así se expresa terminante mente:

"..."
Considerando que por la importancia y transcendencia de esta clase de asuntos incumbe su conocimiento y resolución al Gobierno de S.M.:

Considerando que por el art. 15 de la ley vigente de Beneficencia se reserva al Gobierno la facultad de crear y suprimir establecimientos del ramo, entre los cuales se consideran comprendidas las sociedades de socorros mútuos:

Y oído el parecer de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, la Reina (G.D.G.) se ha dignado resolver:

1º. Que las instancias documentadas en solicitud de autorización para crear sociedades de socorros mútuos se elevan a S.M. por conducto de los Gobernadores de las provincias.

2º. Que estas Autoridades, antes de darle curso, cuiden de que los expedientes sobre creación de tales sociedades tengan toda la instrucción apetecible, pidiendo informes acerca de ellos a las Juntas provinciales y municipales de Beneficencia, en vez de oír a las corporaciones a que se refiere la citada Real orden de 25 de agosto de 1853:

Y 3º. Que los mismos Gobernadores remitan dichos expedientes con su dictamen a este Ministerio, para la resolución oportuna, manifestando cuánto creen necesario acerca del objeto y conveniencia de la sociedad que se trata de es
tablcer, sin omitir consideración alguna por la cual pueda
debidamente apreciarse, si las personas que aspiren a fun-
darla reúnen todas las consideraciones y garantías indis-
penables para la buena administración de los intereses so-
ciales y demás asuntos en que hayan de entender".

Y lo traslado a V.S. de Real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Gobernación, para su inteligencia y efas
tos consiguientes. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid
26 de noviembre de 1859. — El Subsecretario, Juan de Loren-
zana. — Sr. Gobernador de la provincia de ... — Es copia.—
El Subsecretario, Caños del Castillo.

15) Real Orden de 10 de Junio de 1861.

Real Orden de 10 de junio denegando la autorización
que para establecer sociedad de socorros mútuos entre la
clase fabril obrera de Barcelona han solicitado D. José —
Grané y otros (Gaceta de 14).

He dado cuenta a la Reina (Q.D.G.) del expediente —
instruido en ese Ministerio a consecuencia de la exposi-
ción elevada por D. José Grané y otros, de Barcelona, en
solicitud de autorización para establecer sociedad de soco-
rros mútuos entre la clase fabril obrera de esa ciudad; y
en su vista:
Considerando que la prohibición de establecer sociedades de este género en Barcelona data de la época en que, sujeto el antiguo Principado al régimen excepcional, creyeron oportuno las Autoridades militares dictar bando en este sentido, como medida de orden público:

Considerando que terminadas felizmente aquellas circunstancias, y restablecido el estado legal ordinario, no hay motivo alguno para que, así Barcelona como las demás provincias de Cataluña, dejen de disfrutar los beneficios de las restantes del reino:

Considerando que la creación de sociedades de socorros mútuos entre trabajadores es, no sólo utilísima bajo el punto de vista moral, sino también bajo el social y económico, con tanto más razón cuanto que las disposiciones vigentes ponen en manos de las Autoridades los medios de velar por la equitativa gestión de los intereses de los asociados, y de prevenir cualquier mal uso que de la reunión comanditaria de los mismos pudiera hacerse:

Dicho el parecer de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado y el de la Dirección general de Beneficencia, y en conformidad con ambos, la Reina nuestra Señora (C.O.G.) se ha servido resolver:

1°. Que no puede concederse la autorización general e indeterminada que pretenden Grané y demás firmantes de la
referida exposición, si bien estos tienen expedito su dere
cho, como cualesquiera otros españoles, para promover la
formación de los oportunos expedientes, a fin de que se les
permita crear sociedades de socorros mútuos.

2º. Que cuide V.E. de que la instrucción de dichos es
pedientes se ajuste, como se verifica en todas las provin
cias del reino, a lo que previene la Real orden circular
de 26 de noviembre de 1859 (Vid supra), que a seguida es

copia.

Y 3º. Que conceda V.E. a la tramitación de estos asun
tos la preferencia sobre otros de más secundario interés,
para que los trabajadores que quieran asociarse con ánimo
de socorrer mútuas y verdaderas necesidades, sufran la me
nor dilación posible en el logro de su legítimo deseo.

De Real orden lo comunico a V.E. para los efectos
 correspondientes. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid,
10 de Junio de 1861.— Posada Herrera.— Sr. Gobernador de
la provincia de Barcelona.

16) Proyecto de ley de sociedades públicas de 29 de enero de
enero de 1866, presentado por Posada Herrera. (Preámbulo).

"El derecho de asociarse para realizar los diferen-
tes fines de la vida, aunque no se haya escrito en la Cons-
titución del Estado, es tan natural en el hombre, que en —
todos los tiempos lo ha ejercitado para disminuir su debili-
dad propia con el auxilio de las fuerzas de los demás. —
La asociación, en sus diferentes formas, y aplicada a los
variados intereses particulares y públicos, es el elemento
más eficaz de cuantos han contribuido al desenvolvimiento
moral y político de los pueblos de Europa. La historia del
derecho y las vicisitudes exteriores del principio de aso-
ciación es la historia de los cambios y transformaciones —
más íntimas en la situación económica, social y política —
de las naciones. Primero nos presentan ligas, hermandades,
cofradías y Corporaciones privilegiadas; después, Socieda-
des secretas en su organización, aunque creadas con el pro-
pósito de transformar el Gobierno de los Estados; y por úl-
timo, cuando las reformas y Constituciones nuevas dieron —
libertad a la industria y llamaron a los pueblos a interve-
nir en los negocios generales, nos ofrece en todas partes
una firme tendencia a realizar por medio de la asociación
el progreso individual y público a que aspiran los indivi-
duos y las naciones".

...
1) **Dictamen del Ayuntamiento de Barcelona.**

Después de varias protestas de que el ánimo de todos era la conservación del orden público y de la tranquilidad, expresaron que no podían menos de hacer presente que algunos dueños de fábricas, y no todos, pues que varias desaprobaban a discreción alto de las piezas, sino que reducían en tales términos el salario de la mano de obra, que el jornal diario de un buen trabajador era al de cinco a siete reales, con lo que no era posible mantenerse, al paso que algunos fabricantes hacían en poco tiempo fortunas colosales.

2) **Resolución antiintervencionista del Ayuntamiento de Barcelona.**

El Ayuntamiento aprobó una alocución en que se afirmaba que en los convenios particulares, en las transacciones de los amos con los dependientes, en las discordias mismas consiguientes a estos tratos fundados en beneficio recíproco de unos con otros, no debe iniciarse la autoridad como no sea para hacer respetar las leyes y las obligaciones una vez contraídas... El patrimonio individual, la integridad en los convenios son condiciones sagradas que deben acatar los obligados como la autoridad misma que ha de velar por su conservación y garantías. Allí donde están las leyes y los tratos convencionales erigidos bajo la buena fe, la autoridad no puede hacer otra cosa que enmudecer y hacer cumplir.
3) Gestión de los patrones catalanes junto a Espartaro.

Entre las pruebas de estagestión existe la carta dirigida por el Presidente de la Comisión de Fábricas, Manuel Cortina, al ministro de la Gobernación (reproducida por G. Grace en su Historiadel Fomento Nacional), en la que se dice:

"...el acuerdo de la Regencia provisional que se dirige a cortar los males que experimentan estas fábricas con la llamada Sociedad de jornaleros, calmó la agitación de esta Comisión..." Y, luego, dirigiéndose a Espartaro: "...Con tan halagüeñas confianzas nuncadudó esta Comisión de la buena acogida que debió hallar ante V.E. la exposición que el Sr. Don José Manso, en nombre de los fabricantes de esta ciudad, se dignó dirigir a la Regencia provisional del reino para cortar los males que amenazan a estas fábricas con la organización de la llamada Sociedad de jornaleros...".

4) Defensa de la Sociedad de Tejedores publicado en el Diario DE Barcelona 28-12-1841.

"Algunos días hace que se difunde la voz por esta ciudad de que el Gobierno ha decretado la disolución de las sociedades de socorros mutuos. Si así fuese, no podemos alcanzar qué motivos puede alegar el Gobierno para ello, a no ser porque a su tiempo no le hagamos responsable ante la nación de la espantosa miseria en que nos tiene sumergidos, o con el fin de
poder llevar a cabo con más seguridad el tratado de comercio con Inglaterra con que tanto tiempo nos amenaza... Nuestra Asociación no necesita la aprobación ni reprobación de nadie; con los derechos que nos conceden la naturaleza y la ley tenemos bastante, y los que digan lo contrario son nuestros perturbadores."

5) **Exposición de la Sociedad de Tejedores al Alcalde de Barcelona (7 de Enero 1.842).**

"V. A. se persuadirá de que no es fácil darles (a los tejedores) una razón convincente de no ser ilegal la orden de disolución... No es posible disuadirlas de que dicha medida... podría considerarse como un abuso de poder de que los exponentes están muy distantes de poder influir en V.A... Quizás sea de sus ordenanzas lo que pueda ser contrario a las leyes; castíguese cualquier extravío de su instituto benéfico; pero príncipe un acto legítimo y no prohibido por la ley por temor de que se abuse del mismo, no estaria en la dignidad del Gobierno.

6) **Exposición al Alcalde de Barcelona pidiendo préstamo para fábrica.**

El gran número de brazos que van quedando sin ocupación pone en grave conflicto a la indicada Sociedad, o sea, a los
encargada de dirigirla. Todos sus esfuerzos y deseos y todos los medios de que pueden disponer, aun sobrecargando a los asociados con un dividendo semanal superior a sus fuerzas, no bastarán para proporcionar alimento a tantos infelices que lo reclaman. Estos piden pan y trabajo y nada hay más justo que esto: es preciso dárselo o habrá de consentirse que imploren por las calles la pública piedad.

7) Artículo de Figuerola en el diario de Barcelona defendiendo el librecambismo.

No se puede tolerar que se les declare a ellos (a los fabricantes) en estado de sitio y se ejerza sobre ellos una presión tan inútil como la que en otros casos ha pasado sobre los infelices trabajadores. El derecho de éstos es sin duda procurar obtener el mayor salario posible. El derecho de los fabricantes es el de reducir los gastos de producción; ley eterna a que está sujeta toda la producción humana; y en el debate que se establece para la contratación de servicios de los operarios, sólo la libertad de admitir o rechazar las condiciones por una u otra parte es la regla única a que los hombres pueden someterse. Intervenir oficiosamente la autoridad para dictar condiciones de producción, vejar, oprimir o atenuar una u otra de las partes contratantes, es alterar abusivamente el precio de las cosas o constituir una sociedad comunista en que la autoridad interviene en todo y paratodo, en que la actividad individual muere, la industria retrograda y los que un no sento creyeronse favorecidos tardan muy poco a ser las primeras víctimas de la inacción y desaliento de los que antes les ocupaban."
8) Interpelación de Figuerola en las Cortes el 19 de Mayo de 1.855.

El Sr. Figuerola: Señores, en muy breves palabras hace algunos días indiqué que deseaba hacer una interpelación al Gobierno de S. M. sobre el estado de la provincia de Barcelona. No expliqué esta indicación, como estaba en mi derecho sin embargo, tan breves palabras bastaron para que el Sr. Ministro de la Gobernación calificase de grave esta cuestión. No salió de mis labios esta palabra, salió de los autorizados labios de un individuo que forma parte del Gobierno; y en verdad lo es, aunque aquí en la corte, no se alcance todavía la extensión de las dificultades que producen las cuestiones industriales...

Sobre tres cuestiones llamaré la atención del Gobierno de S. M. Primera, sobre una orden de prohibición de determinadas máquinas de hilar, dictada por el general Larrocha; segunda, sobre cierto bando dictado por el señor D. Melchor Ordoñez, gobernador de la provincia de Barcelona, fijando tasa los salarios; y tercera, sobre las cuestiones que nacen del estado de asociación oculta, secreta, de varias clases de obreros de aquella provincia.

Necesario es que las Cortes se sirvan prestarme atención para que oigan un bando dictado por el general Larrocha, que ha sido el escándalo de toda Europa. Décia así esta autoridad en Julio pasado: (Ver Anexo II)...

El Sr. Luxán dijo que se honró mucho (y es muy honroso para S. S. el proclamarlo) que la primera orden que firmó
al entrar en el Ministerio fué la revocación de esa órden del Sr. Larrocha.

Yo fío, no solo en la lealtad del Ministro que desde este puesto elevado habla, sino como persona particular, yo fío en la indicación que hizo S.S.; pero debo decir que la órden revocando la del general Larrocha no la ha visto en la Gaceta ni en documento alguno oficial, y lo que es peor, no la ha visto publicarse en las provincias de Cataluña; y es tal la consecuencia de no haberse publicado la órden, que la víspera del día en que el Sr. Ministro de Fomento hizo esta explicación satisfactoria á las Cortes, ha recibido correspondencia de Barcelona muy numerosa, no de fabricantes, sino de otras personas muy interesadas en el sostenimiento de las instituciones y del régimen actual, en que me manifiestan que en Villanueva, uno de los delegados de los tejedores, un tal Masseras, dijo; que estando prohibidas esas máquinas, estaban fuera de la ley los fabricantes que las usaran; y decir esto cuando han sido asesinados algunos fabricantes; cuando algunas fábricas han sido quemadas, y cuando las máquinas han sido destruidas, la calificación es terrible...

He dicho que en la provincia de Barcelona se ha puesto tasa á los salarios. Y en verdad, señores, que solo pronunciar esta frase, aun las personas más ajenas á los estudios económicos saben que la contratación de los servicios humanos
las obligaciones de dar y de hacer son libres y correlative, y no debe ser objeto de intervención de parte de la autoridad, de la misma manera que el que compra y vende una cosa, compra o vende los efectos ó resultados del trabajo. Se alquila el trabajo, como dice muy bien el señor Moyano; se alquila de la misma manera que cualquiera otra cosa que pueda ser objeto de contratación humana.

Yo comprendo que pueda imponerse tasa al trabajo, al alquiler de cualquiera cosa, en determinadas formas de Gobierno: yo comprendo que en el absolutismo de Felipe II (y repetidas pruebas nos da la Novísima Recopilación) se pusiera tasa al trabajo, que se determinara el color de los vestidos, el número de hilos de las telas, los platos que debía haber en una mesa; y en fin, se dictaran toda clase de leyes santuarias. Comprendo también que en el sistema comunista haya tasa para el trabajo, y se determine el color de los vestidos y las forma de las habitaciones; todo eso es fácil de comprender, porque el absolutismo y el comunismo tienen muchos puntos de contacto, matando ambos la libertad individual. Pero —en un régimen liberal imponer tasa al trabajo—, sería el mayor de los absurdos solo el pensarlo.

Sin embargo, se ha realizado durante el mando de los —hombre que han ejercido su poderío en los once años pasados. D. Melchor Odóñez, de desgraciada recordación, en 23 de Junio
de 53 dio esa disposición, imponiendo tasa al trabajo para los tejidos mecánicos......

Puede suceder, fijando tasa, que un trabajador que está sin trabajo quiera ofrecer por un salario menor el servicio que puede prestar a un fabricante, y no se le puede obligar a que no trabaje; así como si un fabricante quiere dar a un trabajador salario más alto que el fijado por la autoridad, puede hacerlo......

Comprendo la asociación para las obras de beneficencia; para la asistencia de los ancianos, inválidos del trabajo; para los huérfanos de la industria; para los que no tienen ocupación por no tener suficiente fuerza en sus brazos para dirigir una máquina, puesto que, las máquinas hacen que no sea el hombre esclavo del trabajo, sino director de él.

Comprendo la asociación bajo este concepto y en punto muy avanzado para determinadas cosas. Comprendo la asociación de los obreros para sostener dentro de justos límites el precio de la mano de obra, pero libremente. La comprimento para tener más libertad de contratación con el fabricante o empresario de la industria. Pero no comprendo la asociación de los obreros para aumentar su jornal coartando la libertad de los fabricantes. Por no haberse formado idea de la asociación, se han prohibido y formándose las secretas cuyo resultado ha sido, afiliarse a ellas hombres mal entrenados, vago y hasta asesinos; y debe decirlo así, porque en estos días precisa-
mente está bajo la jurisdicción de los tribunales, el jefe de la asociación de ilícitos. No diré yo cuál sea su grado de culpabilidad, ni cuál pena merezca. Pero debo decir, que pesa sobre él una acusación criminal de las más graves, en cuanto se le acusa de jefe de incenciarios y asesinos. Pues bien: si la asociación hubiera sido justa, si hubiese sido pública, ¿no hubiera tenido jefes de otra clase diferente de la del que se trata? Otras industrias y clases tienen y ha tenido otros hombres notables por ingenio y por su buena conducta. El Gobierno de S.M. los ha conocido aquí, y podría tratar con ellos como personas muy razonables.

Por esa asociación secreta se ha intimado a las masas de trabajadores honrados. Los menos trabajadores, los vagos, aquellos que por sus malas cualidades son los primeros despedidos de los talleres, son los que han dirigido esas asociaciones, porque eran los que más necesitaban de ellas para imponer a los trabajadores honrados que son los que en último resultado han venido a sufragar la vagancia de los malvados. Debo decirlo así, aunque en la actualidad me consta que están haciendo alarde del mejor espíritu, y al efecto han publicado alusiones para asegurar la tranquilidad, a infundir la confianza que por desgracia ha desaparecido. Pero por más esfuerzos que hagan, yo esa confianza no la tendré mientras veas al pie de las alusiones, en que se trata de infundirla, nombres que no pueden inspirar confianza porque han escrito co-
coguçicadas en los cuales se lee lo siguiente. "Es una má-
quina infernal la selfactina que debería arder con sus due-
ños."

Esto se ha escrito en Barcelona pocos días después de
la revolución de Julio; esa revolución hubiera sido con jue-
to motivo de expansión legítima para aquella ciudad oprimi-
da, si no la hubieran entristecido los incendiarios y asesi-
nos que la amenazaban, al mismo tiempo en que se daba apoyo a los
generales de Vicálvaro. Pues bien; por más que se diga que -
son amantes de la tranquilidad de Barcelona, personas que fir-
maron junto con Barceló en 2 de Agosto de 1854 esos escritos
en que se decía que las máquinas selfactinas eran infernales
y debían arder, y con ellas los fabricantes. Simplemente decían
precisamente cuando ya habían ardido las máquinas, y dentro
habían sido asesinados los fabricantes, ¿podrán inspirarnos
certidumbre tales firmas? De ninguna manera. Yo deseo, pues,
que el Gobierno de S.M. tienda una mirada protectora a esa
ciudad, y débamos decirle, señores, que, aparte de las cuestio-
nes primeras que creo resueltas, se ocupa de las resoluciones
de la última. Permita si cabe y si está en su opinión, la as-
sociación de los trabajadores, para sostener la, tasa del sa-
lorio, pero libremente, sin abusos ni coacciones de alguna
clase, y con la intervención de la autoridad, que es la en-
cargada de velar por el cumplimiento de las leyes........
9) Escrito de la Comisión de la clase obrera de Cataluña, explicando sus gestiones cerca de Espartero.

"A la clase obrera de Cataluña. Queridos compañeros: ha llegado el caso de deciros el estado en que se hallan atendidas nuestras justas y razonables pretensiones; se ha nombrado una comisión de entre nosotros que ha salido para Madrid con el fin de hacer comprender al Gobierno, y con él, al siempre querido de nosotros querido duque de la Victoria, la necesidad de la presta constitución de un jurado que imparcialmente, y compuesto de individuos de conocimientos por parte de los operarios y de los fabricantes, arreglándose a las instrucciones que ambas clases le suministran, diriman nuestras diferencias; lleva también el objeto de hacer ver al mismo Gobierno la utilidad y la necesidad de fijar el jornal a 15 horas de trabajo; y, por último, la comisión persuadirá al Gobierno de la conveniencia de la libre asociación que en todos los tiempos reclama el obrero, por ser el único medio que puede conducir a toda la clase a alcanzar una paz octaviana en sus diferencias; ahora bien, en nombre de la misma y por su bien, os suplicamos con el mayor fervor y deseo, con el fin de que nuestras conocidas y justísimas quejas sean conciliadas, por brillar en ellas el lume de la libertad, orden, libre asociación y regulación del trabajo, desterrando como lo hacemos, todo desorden, anarquía, coacción, carlismo; en una palabra, todo acto que se incline a contradecir el Gobierno de Espartero que juramos defender a todo trance, obligándonos a presentar a la autoridad todo promovedor de desórdenes o propagador de ideas no liberales, pues que estas, y no otras, son las que caben en el ánimo de la clase obrera, así como a aquellos que, usurpando el honroso título de obreros, se dedican a pi-

aje..."
10) Impugnación del Proyecto de Ley de Alonso Martínez de 8-X-1855, por parte de Juan Aldea y Joaquín Molar, delegados de las sociedades obreras catalanas.

a) Respecto a la limitación impuesta a las asociaciones.

"En este proyecto... se limita mucho la libertad de las asociaciones, tanto que se nos deja a merced de los fabricantes. ¿En qué se habrá fundado el autor del proyecto? ¿Dónde están los motivos para despojar al hombre del derecho de asociarse? ¿En que se fundará el artículo que, limita las asociaciones a 500 individuos? ¿Si se fundará en la última paralización del trabajo y en la fuerza de su número? Más la causa de esta paralización, lo dejó ya probado, no fue otra que la imprudencia de las autoridades militares..... ¿Considera el Gobierno las masas obreras como enigmas? Ha dicho, señores, que en 1841 o 42 la Asociación de Tejedores contaba de 6 a 7 mil asociados, y, ni en aquella época ni en tiempo de los moderados (y a buen seguro que eran asustadizos) se ha inten- tado limitar su número, Precisamente ahora que las más numerosas cuentan de 1,000 a 2,000 asociados, ¿se les ha de cerrar en un círculo de hierro? ¿Dónde está la causa de estos temores?" 

El breve relato de Vicente Vives (que parece seguir a Reventós) no se ajusta a la realidad de los hechos. "Esparteño —dice— procuró tranquilizar a los espíritus con un telegrama (6 de julio) de términos ambiguos y con la promesa de presentar a las Cortes un proyecto de ley sobre ejercicio,
policía, asociaciones e inspección de la industria. Estas intenciones se vinieron abajo cuando... las grandes señores castellanos decidieron terminar con Espartero y derribaron el régimen progresista en Julio de 1856..." (Cataluña en el siglo XIX, p. 244). Como hemos podido ver, las "intenciones" de Espartero —presentar un proyecto de ley a las Cortes— no "se vinieron abajo". Cristalizaron en octubre, pero el proyecto no fue en modo alguno del agrado de los elementos obreros.

b) Respecto a la prohibición de los contratos colectivos.

"...El contrato individual es el desorden y la anarquía introducidos en los precios de la mano de obra... Se me dirá que el fabricante, si quiere rebajarle el precio, tiene el obrero la libertad de negarse a trabajar en sus talleres. Más ¿qué ha de hacer entonces el obrero? ¿No ves que está asociado con la miseria, y si abandona el trabajo está condenado a morir de hambre? Asociado el fabricante con su capital, resistirá el obrero, y éste tendrá que sucumbir, no a la rebaja —primera sino a tantas como aquel proponga. Pasará así de la condición de jornalero a la desclavo..."

c) Respecto a la composición de los jurados mixtos.

"Si entra (en ello) algún obrero, será sin duda porque la autoridad se compadece de nosotros; y se atrae a asegurar que, nombrados por el gobierno, ninguno de nosotros ha de aceptar el cargo por no querer ser verdugo de sus infortu-
nados compañeros... ¿Por qué no se ha de establecer que se componga el jurado la mitad de dueños de taller, y la otra mitad de obreros, nombrados unos y otros por sus respectivas clases? ¿Queréis nada más regular, sino que los que hayan de desempeñar estos cargos merezcan la confianza de los que hayan de sujetarse a su juicio?".

11) Protesta contra la represión de Zapatero (en el mismo documento anterior)

En un apéndice al nº 19 de El Eco de la Clase Obrera —(16 de diciembre de 1855) leemos el siguiente texto: "Hace dos o tres meses, amenazadas en su existencia las más de las sociedades catalanas, recorrieron los obreros de Barcelona las calles al grito de asociación o muerte. Enviaron comisionados a esta Corte. Expusieron en una sentida manifestación sus motivos de queja. Obtuvieron del duc de la Victoria la seguridad de que serían respetados sus derechos. ¿Qué efecto han producido ahora estas promesas? Zapatero continua de capitán general en Cataluña, los directores de asociaciones y hasta simples operarios están, si no presos, extrañados de todas las provincias industriales del reino. España el hálito de la calumnia las más puras frentes, sigue la policía como una sombra al más honrado proletario. La espada sella constantemente los labios del obrero."
12) **Manifiesto de los hiladores catalanes (15 y 26 de junio de 1856) y comentario de Pi y Margall (1 de julio de 1856).**

"Paso a la comisión esta respuesta que no esperaba, puesto que nunca pude creer que el representante en Barcelona de una forma de gobierno que legisla sobre las libertades y que restringe aún la de asociación, se negase, si no a patrocinar una clase, al menos a intervenir en uno desacuerdo que por su carácter puede ser un manantial de nuevas calamidades públicas." (15 de junio).

"Ellos (los fabricantes) son los que con sus exigencias han abierto nuestros ojos y nos han obligado a buscar la causa de nuestros males; y de raciocinio en raciocinio hemos llegado a comprender que nuestros males cesarán cuando las Cortes se mantengan por nuestra causa, y las Cortes estarán a favor nuestro y en favor de la justicia al mismo tiempo cuando nosotros nombramos diputados." (26 de junio).

El comentario de Pi y Margall se publicó en La Razón del 1º de julio de 1856: "Estas grandes masas de obreros, preocupados hasta aquí exclusivamente por la cuestión del trabajo, se creían que podían servir de instrumento a cualquier partido que se ofreciese a apoyarlas en sus más o menos justas pretensiones. Su adhesión de hoy a los principios democráticos traba y confunde a nuestros enemigos. Saludemosle desde hoy a este nuevo ejército, confiemosle desde hoy —nuestra bandera"
13) **Petición de libertad de asociación presentada por Nicolás Álvarez Rivero, en nombre de 15.000 obreros de Barcelona, en 1862.**

"Pedimos la libertad de asociación para luchar con el capital, sí; pero en lucha noble y leal; para oponer a la exigencia del capital otros capitales; para oponer a la riqueza hereditaria o adquirida el capital del ahorro. La industria, esa rica y floreciente industria, orgullo de nuestra patria y de España, ha creado necesidades, ha cambiado los principios económicos de los últimos tiempos, y hoy que, por fortuna, terminaron las discordias sangrientas; hoy, que todos los partidos políticos luchan sólo en el campo de la persuasión, ya que no en el del derecho, hora es que se de plaza a nuestras quejas, manifestadas pacíficamente; que se atienda al hombre que con el sudor de su rostro ayuda poderosamente a levantar esos palacios industriales, emporio de riqueza y naciente orgullo de nuestra quebrantada patria."

14) **Discurso de Moret, en apoyo de su enmienda al proyecto de contestación al discurso de la Corona en 1862, pidiendo libertad de asociación para los obreros.**

"Aquí, señores, donde son permitidas toda clase de asociaciones para la alta ciencia, para las bellas artes, pa
ra el capital, no está permitido al pueblo reunirse para asun-
tos políticos y para asuntos industriales! Pues bien: si no-
queremos exponernos a una enérgica protesta, es preciso que-
nos adelantemos a dar una solución a lo presente, no sea que-
las clases que están alejadas del poder levanten un día la —
voz en demanda de sus intereses y derechos".
FUENTES. ANEXO II. (CAP. II).

1) Decretos del Rey Nuestro Señor Fernando VII. Tomo VIII, 1825, p. 434 a 436.

2) CARRERA, J., "La evolución de las ideas y las luchas sociales". Barcelona, 1940, p. 136. Hemos manejado la colección de decretos, año 1839, y no hemos encontrado esta disposición que recogemos de Carrera.

3) CARRERA, J., op. cit., p. 140. Igualmente hemos consultado la colección de decretos del año 1840, sin encontrar la disposición que recogemos de Carrera.

4) Colección de Decretos ...1841, p. 190.

5) CARRERA, J., op. cit., pp. 142-143. Hemos consultado el tomo III del año 1842 y no aparece citado.

6) Citado en "Historia del movimiento obrero español" de NUÑEZ DE ARENAS y TUÑÓN DE LARA, pp. 69-70.


9) En la interpelación formulada por el diputado Figuerola en el Congreso sobre el estado de la provincia de Barcelona, el 19 de mayo de 1859. Diario de Sesiones. nº 158, p. 3298.
11) NUÑEZ DE ARENAS y TUAÑA DE LARA, op. cit., p. 74.
12) Idem, p. 75.
13) Diario de Sesiones. Apéndice I al n.º 214, Sesión de 8 de octubre de 1855. Tomo V.
14) Boletín General de la Revista ..., año 1859, pp. 651-652.
16) ZAMCADA, P., "Derecho corporativo español", pp. 79-80. Ese proyecto de ley no pasó a ser discutido en el Congreso, tan sólo lo fue en el Senado.
FUENTES. ANEXO III. (CAP. II).

1) CARRERA, J.: op. cit., p. 137.

2) Idem, pp. 139-140.

3) MUÑOZ DE ARENAS y TUGÓN DE LARA, op. cit., p. 60


6) Idem, p. 144.

7) Idem, p. 254.

8) Diario de Sesiones, Sesión de 19 de mayo de 1855, nº 158, pp. 3298 a 3301.

9) MUÑOZ DE ARENAS y TUGÓN DE LARA, op. cit., p. 66.


11) SECO SERRANO, C.: op. cit., p. XXV.

12) SECO SERRANO, C.: op. cit., pp. XXV y XXVII.

13) ZANCADA, op. cit., p. 78.

14) Idem, p. 79.
ANEXOS DEL CAPÍTULO TERCERO
ANEXO I.

DISPOSICIONES DEL SEXENIO REVOLUCIONARIO:

1) Decreto-Ley de 1 de noviembre de 1868, permitiendo las reuniones públicas.

2) Decreto-Ley de 2 de noviembre de 1868, permitiendo las asociaciones y derogando los artículo 211 y 212 del Código Penal.

3) Circular de 29 de noviembre de 1868, advirtiendo que se tenga cuidado con las reuniones públicas.

4) Orden de 3 de diciembre de 1868, ordenando a los Gobernadores corregir los abusos de las asociaciones y reuniones.

5) Constitución de 5 de junio de 1869, reconociendo el derecho de asociación, artículos 17 y 19.

6) Orden de 25 de noviembre de 1869, aplicando reprimivamente los decretos del 62 y la Constitución.

7) Código Penal de 1870, artículos 198 a 201 y 556, sobre asociaciones ilícitas y caligaciones, respectivamente.

8) Circular de 16 de enero de 1872 en contra de la Internacional.

9) Ley de 24 de julio de 1873, sobre trabajo a de menores.

10) Proyecto de Constitución liberal de 19 de julio de 1873, reconociendo el derecho de asociación en el título preliminar,
artículo 19 y artículo 25.

11) Decreto de 10 de enero de 1874, disolviendo la Internacional.
ANEXO II

REPRODUCCIÓN INTEGRA O EXTRACTADA DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL PERIÓDO.

1) Decreto de 1 de noviembre de 1863, sancionando el derecho de reunión pacífica (Gaceta del 2).

Prohibir las reuniones pacíficas ha sido en todos tiempos señal distintiva de los Gobiernos despóticos. Temeosos estos de la publicidad, que dificulta y con frecuencia imposibilita los abusos, empeñaránse en contrarrestar ese derecho, cuya realización levanta y fortalece los ánimos, ilustra las inteligencias, concilia las discordias, prepara el terreno a toda clase de progresos, y es un poderoso auxiliar de la Administración en los Gobiernos liberales. Nada de ello es la publicidad, y la publicidad no existe donde no gozan los ciudadanos la facultad de reunirse para discutir sus intereses, donde á la franca y razonada expresión de las opiniones se prefiere una obediencia inerte, un silencio propio de las épocas inquisitoriales.

No es así como viven y prosperan los pueblos, ni está la menor de las causas que han influido en el malestar de España, dando lamentable origen á esa vacilación en las creencias, a ese indiferencialismo político, que iba difundiéndose á manera de contagio, y del que limpió por fin la atmósfera la explosión eléctrica del alzamiento nacional. La enseñanza que de los pasados sucesos se desprende, unida al propio y arraigado convencimiento del Gobierno, suevenla á continuar trabajando sin descanso para dejar establecidos -
sobre una base indestructible los sagrados derechos del pue
blo.

Semejante al vapor, la libertad no ofrece peligros —
sino cuando se la comprime, obligándola á estallar con des-
structora violencia: lejos, por tanto, de ser las reuniones
pacificas un elemento perturbador, contribuyen, por el con-
trario, á esclarecer la verdad, proclamar la justicia, pre-
caver discusiones y garantizar el órden, que solo es verda-
dero allí donde se respeta el derecho y se sanciona la li-
bertad sinuspícaces temores.

El Gobierno Provisional, muy distante de participar
de ellos, no se contenta con dejar consignado en un decreto
e el derecho de reunión, aspira á que ese derecho se ejercite,
y concurre con el de asociación á preparar el triunfo de —
los principios liberales, y fomentar por todos medios el —
menestar de la Nación. De esta manera es como pueden los —
pueblos contribuir á la gran obra de su regeneración políti-
ca y económica, aproximándose á realizar en lo posible el —
gobierno del país por el país.

Por estas consideraciones, usando de las facultades
que como Ministro de la Gobernación me competen, y de acuer-
do con el Gobierno Provisional, vengo en decretar los siguien-
te:

Artículo 1º. Queda sancionado el derecho de reunión
pacifico para objetos no reprobados por las leyes.

Art. 2º. Para la celebración de las reuniones públi-
cas, se dará aviso á la Autoridad local con 24 horas de antici-
paración, expresando su objeto y el sitio en que hayan de
verificarse.

Art. 3º. Las reuniones que se celebren al aire libre
quedan sujetas a las prescripciones de las Ordenanzas mu-
cipales en cuanto puedan interceptar la vía pública y ser
un obstáculo á la libre circulación.

Art. 4º. Las reuniones públicas perderán su carácter
de pacíficas y quedarán fuera de las disposiciones de este
decreto, desde el momento en que alguno ó algunos de los
ciudadanos que á ellas concurran se presenten con armas.

Art. 5º. El objeto de las reuniones públicas se en-
tenderá terminado con ellas, y sus acuerdos no podrán pro-
currir efectos posteriores de carácter periódico ni perma-
ente.

Art. 6º. Quedan derogadas todas las disposiciones ad-
ministrativas y legales que sean contrarias en todo ó en
parte al presente decreto.

Madrid 1º de noviembre de 1858.— El Ministro de la
Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta.

2) Decreto de 20 de noviembre regularizando el derecho de
asociación (Gaceta de 21).

No quedaría perfecto el cuadro de los derechos polí-
ticos, si al de celebrar reuniones dejara de agregarse el
que autoriza la libre asociación de los ciudadanos, comple-
mento necesario del de reunión, que á los resultados transi
El principio de asociación debeconstituir de hoy en adelante parte de nuestro derecho político. De todo en todo olvidado por el antiguo sistema, casi en absoluto desconocido y, por lo demás, severa y recelosamente vigilado por el régimen pseudo-constitucional en que hasta la época de la revolución hemos vivido, bien puede afirmarse que el principio de asociación carece de precedentes en la historia jurídica de nuestro país, como no quieran suponerse hijas de él aquellas antiguas y grandes asociaciones que, nacidas por un favor del Estado, fueron auxiliares poderosos si, pero también, y acaso con más frecuencia, obstáculo y peligros para el poder mismo que las creara.

Empero si el principio de asociación no es tradicional en la legislación española, es en cambio una viva creencia de nuestra generación, una de las necesidades más profundas de nuestro país y una de las reclamaciones más claras, justas y energícas de nuestra gloriosa revolución.

Hemos llegado ya, en efecto, a un tiempo en que la vida social es tan grande y tan varia, que a nadie es dado —resumirla sin manifiesto peligro de dañarla y oprimirla. El Estado tiene siempre grandes fines que llenar: a la Iglesia esperan todavía maravillosos destinos; pero ni el Estado ni la Iglesia pueden pretender, ni les sería dado en todo caso alcanzar a mantenerse en su antigua situación, es decir, como las dos únicas formas sociales, posibles y legales de la vida y de la historia. Otras necesidades han aparecido a su vez; otros movimientos sociales surgen de día en día que no pueden ser sometidos sin dolorosa violencia a la representación de las asociaciones primitivas y históricas; nuevos organismos creados por la acción espontánea de una sociedad que progresa y general de desarrollo, acuden constantemente pidiendo plaza y derecho; y el Gobierno Provisional de la Nación, que se inspira ante todo con cuidado en el génio de su país y de la re-
volución que le ha dado origen, no tiene el derecho ni la voluntad de negárselo.

La enseñanza pública, tiego fertilizador de las inteligencias que tanto interesa llevar hasta las últimas clases del pueblo; la beneficencia, destinada a prevenir y curar con su eficaz auxilio las llagas sociales, facilitando remedio a la miseria, así como la instrucción lo proporciona a la ignorancia; la caridad misma que, no obstante su carácter de virtud individual, constituye el primer elemento de la beneficencia, forma ostensible de la caridad social; todo esto es —lo que están llamadas las asociaciones libres a desenvolver— en una escala apenas conocida. Firme esperanza abriga el Gobierno de que no ha de tardar en realizarse, dando el pueblo español otra nueva prueba de su feliz aptitud para marchar por la senda del verdadero progreso. Cuando no hay libertad no existe culpa, y no la ha tenido por tanto el pueblo desde larga fecha imposibilitado de moverse fuera de la órbita que trazar convenía a Gobiernos para quines el silencio y la inmovilidad eran la expresión del malamente llamado orden público.

Que vibran en el corazón del pueblo las fibras de los sentimientos generosos; que todos los que de ellos participan se aumen para lograr lo que aislados en vano intentarían: hé ahí lo que podrá sin mucho trabajo conseguirse a merced del espíritu de asociación, y lo que el Gobierno embala ver realizado al sancionar de un modo solene ese derecho. Nadie mas urgente de su ánimo que poner a este ni a ningún otro supérfluo trabas reglamentarias. La libertad se limita y reglamenta por la libertad misma, así como todo derecho se estiende hasta donde con otro derecho tropieza.

El principio de asociación queda por consiguiente reconocido clara y solemnemente de hoy más en España. En su respeto y adhesión a esta gran base constitucional que ha ha-
cho la grandeza y la fortuna de naciones como Inglaterra y Holanda, que explica hoy la mitad de la prodigiosa vida de los Estados Unidos; en su anhelo de que este gran principio se convierta pronto en un gran hecho y una gran costumbre, el Gobierno Provisional no se permite oponerle la menor restricción; antes bien, si lo premioso del tiempo y lo complejo del trabajo no le consienten aún reformar algunos detalles de nuestros Códigos que pueden entorpecer la vida de las nuevas sociedades, ya anuncia bien distintamente que suprimida en adelante toda condición privilegiada y especial en este punto, libre será al fin y absolutamente dueña de sí misma —toda asociación, que por su objeto y por sus actos no contradiga la ley común, o sea las reglas fundamentales e inviolables de la sociedad civil.

Bien quisiera el Gobierno Provisional no haber de apartarse un solo instante de este género de consideraciones; pero por sensible que esto sea a sus sentimientos de español, necesario le parece recordar que ha habido hasta hace poco tiempo, que tal vez existen aún entre nosotros, asociaciones para quien el honor y el destino de la nacionalidad española no son apreciables, sino en tanto que no son un obstáculo a las conveniencias de potestades extranjeras; que hay corporaciones cuya inspiración y dirección reside fuera del país, y tienden por su misma naturaleza a originarse no tanto en asociaciones como en poderes; más bien en peligrosos rivales del Estado que en pacíficos y benéficos representantes de un gran fin social.

Pudiera el Gobierno Provisional negar en absoluto —a semejantes agrupaciones el derecho a la existencia. Si la —
primera condición de capacidad para goce del derecho, por lo que a los individuos toca, está en poseer la cualidad de español, por que las asociaciones, grandes individualidades, a su vez no habían de renunciar, antes de pretender el beneficio de nuestras libertades, a todo propósito que más o menos directamente pueda ser hostil a los fines generales de la sociedad española?. El respeto que profesa al principio de asociación ha impedido al Gobierno estremar hasta este punto su derecho; pero en cambio, irrespetuoso, hacia nuestros mayores le parecería no conservar las sabias precauciones que ellos tomaron para impedir el secuestro de la propiedad territorial en beneficio de una potencia extranjera; y temerario por demás, abandonar sin defensa su país y la situación política que tiene la honra de representar a la acción de aquellos, de quienes, con graves fundamentos, se presumen que no se hallan tan identificados con su país como somos a una soberanía extranjera.

Por todas estas consideraciones, en uso de las facultades que como Ministro de la Gobernación me competen, y de acuerdo con el Gobierno Provisional,

Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1°.- Quedar sancionado el derecho que a todos los ciudadanos asisten para constituir libremente asociaciones públicas.

Art. 2°.- Los asociados pondrán en conocimiento de la Autoridad local el objeto de la asociación, y los reglamentos o acuerdos por los que hayan de regirse.

Art. 3°.- Las reuniones públicas que los asociados celebren se sujetarán a lo establecido en el decreto relativo a ellas.
Art. 4º.— Se prohíbe a las asociaciones, cualquiera que sea su objeto, reconocer dependencia, ni sometarse a autoridades establecidas en país extranjero.

Art. 5º.— Las asociaciones quedan sujetas, en cuanto a la adquisición y posesión de bienes inmuebles, a lo que dispongan las leyes comunes respecto a la propiedad corporativa.

Art. 6º.— Las asociaciones que recaben y distribuyan fondos con destino a objetos de beneficencia, instrucción u otros análogos, publicarán anualmente las cuentas de su gestión, así en ingresos como en gastos.

Art. 7º.— Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a este decreto, y señaladamente los artículos 211 y 212 del Código penal.

Madrid 20 de noviembre de 1868.— El Ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta.

3) Circular de 29 de noviembre, previniendo a los Gobernadores de provincia que están a la mira de las reuniones pacíficas, con el solo propósito de hacer respetar el libre ejercicio de este precioso derecho (Gaceta de 1 de diciembre).

De algunos días a esta parte viene el Gobierno recibiendo noticias oficiales de que en poblaciones importantes — los partidarios de la reacción, apelando a su antiguo sistema de exagerar las tendencias revolucionarias para labrar el descrédito de las ideas liberales, esplotan en este sentido a — las masas menos ilustradas del pueblo, halagando y estraviando sus pasiones para hacer una guerra insidiosa y cobarde al—
partido liberal, que a costa de tantos sacrificios preparó y llevó a cabo el alzamiento nacional, y que se une en magnífico y sincero consorcio para consolidar su obra.

Síntomas inequívocos de estos manejos antirevoluciónarios son la presencia entre las masas mal llamadas republicanas que se han improvisado en localidades donde la revolución encontró muy contados partidarios en los días de peligro, de ciertos hombres despreciables, que con la misma proezas con que vendieron sus servicios personales a la policía del último Gobierno borbónico, los venden hoy a la reacción para gritar desaforados en el sentido que más puede lisonjear las pasiones de aquella parte del pueblo que, por falta de educación política, no está todavía en disposición de distinguir a sus enemigos enmascarados entre sus verdaderos defensores.

La perturbación de las reuniones pacíficas únicamente cuando han sido intentadas por ciudadanos honrados y partidarios de la forma monárquica, en uso de su libremente reconocido y sancionado por el Gobierno Provisional en un decreto reciente; el abuso de las armas dadas al pueblo para tener en constante alarma a las personas y clases que prestan su más sincero y desinteresado apoyo a la revolución; la proclamación de principios absurdos, que han sido rechazados por el buen sentido de los pueblos más libres del mundo; la propagación de noticias exageradas sobre estos mismos actos, y por último, las amenazas más o menos subidas de cobrir por la fuerza la libertad del sufragio, han sido hasta ahora los medios puestos en juego por la reacción para sostener una perturbación aparente, que si bien en el interior a nadie alarma, porque su criminal origen es conocido de todos, en el exterior,
donde por la distancia aparecen abultados los sucesos, pueden
ingender una idea en alto grado perjudicial para el crédito
del país, para el porvenir de la libertad y para la dignidad
de España.

Pero el Gobierno, que está seguro de salvar estos —
tres altísimos objetos salvando la causa de la revolución, —
está dispuesto a pasar por cima de cuantos obstáculos se opon-
gan al desarrollo de la idea que la constituye. Confía el Go-
bieno en llevar a feliz término su patriótico propósito, por-
que los nobles instintos que el pueblo español ostentó tan so-
lemnemente en los primeros días del periodo revolucionario —
cuando la reacción, acobardada y escondida, no se atrevía a —
turbar con sus hipócritas intrigas aquel sublime y majestuoso
espectáculo, le dan la seguridad de que España quiere ser libre
y libre para siempre; y también porque la lealtad de sus delega-
gados en las provincias, recientemente demostrada por actos y
protestas terminantes, convencen al gobierno de que aquellos
funcionarios han unido su suerte a la de todo el partido libe-
ral.

Más no basta esta lealtad y este patriotismo para —
que los representantes del Gobierno puedan destruir hasta en
sus más hondas raíces la planta maléfica que la reacción cul-
tiva: es menester también que conozcan el origen del mal, y —
que estén persuadidos de que dentro de las leyes tienen los —
recursos bastantes para desenmascarar y perseguir a los enemi-
gos de la libertad, sin que para ello sea preciso perturbar —
en lo más mínimo el tranquilo ejercicio de los derechos indi-
viduales.

Para alejar toda sospecha de que el Gobierno inten-
tara debilitar estas preciosas conquistas de la revolución, -
cuidó de consignar en los decretos sobre reunión y asociación
al principio de libertad, sin otra limitación que la impuesta
por las exigencias del orden material, indispensable para el
ejercicio de todos los derechos populares. Pero no basta que
el Gobierno haya querido evitar cuidadosamente la presión de
arriba, si apenas repuestos los reaccionarios de su primer -
espanto, intentan, por medio de la presión de abajo, hacer-
imposible o peligroso el derecho de reunión, halagando la —
idea de que de este modo podrá venir un día en que, con apa-
riencia de razón, intentaren privar de él al ciudadano.

Tiene V.S., Sr. Gobernador, contra este, como con-
tra los demás abusos, eficas remedio dentro de la legislación
vigente. No olvide V.S. que el derecho de reunión libre y pac-
cífica está reconocido y sancionado como uno de los derechos
políticos más importantes del ciudadano; y que a su libre —
ejercicio nadie puede oponerse sin incurrir en delitos previ-
tos y penados en el Código, que los Tribunales aplicarán con
toda la severidad debida a los culpables que V.S. deberá inme-
diatamente poner a su disposición. En este concepto se absten-
drá V.S. de intervenir en las reuniones pacíficas que se cele-
bran dentro de las condiciones del decreto de 1º del actual —
más no deberá privarse de estar a la mira de ellas, por sí o -
por medio de sus delegados, con el solo propósito de hacer res-
petar el libre ejercicio de este precioso derecho, y de impe-
dir que minorías o parcialidades turbulentas se opongan a la
manifestación tranquila de todas las opiniones, o hagan impos-
sible, como ya por desgracia ha sucedido en algún punto, la —
discusión ordenada que intente una mayoría respetable.
Para garantizar el libre ejercicio de los derechos que la revolución ha proclamado, toda la energía que V.S. — despliegue será digna de la aprobación del Gobierno, cuya resolución es en este punto inquebrantable. El Gobierno tiene el altísimo deber de evitar que la opinión se estravie por los — que, interesados en el triunfo de la reacción, se finjen partidarios de las tendencias más exageradas, o compran los malos instintos con el oro que, malamente usurpado a la Nación en otros tiempos, se comienza a derramar para quiméricos manejos antirrevolucionarios.

Dar a los habitantes honrados y liberales de esa provincia la voz de alerta contra las exageraciones de todos géneros; demostrarles que la reacción lo mismo viste su repugnante ropaje que el de la más estrechada demagogia; recordarles que durante el período en que los tres partidos liberales, fundidos hoy, han preparado el triunfo de la libertad, no pudieron llamar en su ayuda, porque no eran conocidas, a esas abultadas falanges republicanas, que sobre la base de unos cuantos honrados ciudadanos que de buena fe proclaman — este principio, acrecentan en determinadas poblaciones los partidarios del borbonismo de ambas ramas; y ofrecer, en fin, a las clases todas de la sociedad la seguridad más completa — de que el Gobierno está dispuesto a destruir con verdadero vigor cuantos obstáculos se opongan a la marcha tranquila y ordenada de las conquistas de la revolución; esta es la tarea — que V.S. debe imponer a su infatigable perseverancia.

Asegurar en todas partes y a todas costa el orden material, apelando al patriotismo de los buenos ciudadanos, — impetrando en su caso el auxilio de los Tribunales y de la — fuerza pública, es el medio más seguro de alcanzar aquel objeto. El Gobierno que ha marchado en la senda de las liberta-
des tan adelante como podían apetecer los más exigentes, tie-
ne por lo mismo derecho a garantizárselas con el orden indispen-
sable para su ejercicio, y confía en que su acción se dejará
sentir por el de la energética decisión de V.S. contra todos —
los que intenten bastardear las preciosas tendencias de la —
revolución, a mermar o perturbar en lo más mínimo los dere-
chos que el país se ha conquistado.

Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 29 de noviem-
bre de 1.868. —Sagasta.—Sr. Gobernador de la provincia de....

4) Circular de 3 de diciembre, encargando a los Go-
bernadores de provincia que vean para corregir los abusos —
que que se cometen a la sombra del derecho de reunión y de —
asociación pacíficas, no menos que del de la libre emisión del
pensamiento (Gaceta de 4).

El Gobierno Provisional de la Nación, que al conver-
tir en decretos los principios entrelazados en la gloriosa revo-
lución de setiembre y las aspiraciones formuladas por las Jun-
tas, se apresuró con geniosa solicitud a cortar las ligaduras
de la prensa y a levantar el velo cauteloso que tenía sin vi-
da los preciosísimos derechos de reunión y de asociación pací-
ficas, no ha podido ver sin profunda pena el abuso que de to-
dos ellos han comenzado hacerse en estos días. Con actos y con
sugestiones de palabra y por impreso se han dirigido ataques,
todo menos que noblesy que liberales, a ese mismo derecho de
reunión y a la seguridad personal, asedaciones más o menos —
bombadas contra el sagrado derecho de propiedad y contra la
ordenanza y la disciplina del Ejército, y malignas insinuacio-
nes para soliviantar los ánimos, encender las pasiones y con-
citar a la rebelión. Semejantes abusos son tanto más de lamen
tar, cuanto que, al romper las cadenas que tenían muda la pren
sa y postrada la Nación, la sola esperanza de ver promulgados
decretos o en leyes los derechos y libertades de que se la
venía privando con satánica fruición, la hizo mostrarse desde
luego generosa y magnánima, y así la prensa como el país mos-
traron en sus primeros pasos que sabían andar por el ancho ca
mino de la libertad. Y como quiera que un cambio tan inmotive
do del consabimiento a la precocidad y de la satisfacción al
despecho, no denuncie no solamente arreto de la pasión a que
todo Gobierno está en el deber de poner un freno, sino que re
vele bien ostensiblemente maquinaciones puníbles, obra de mi
ras bastardas y de planes tan desatentados como dignos de ca
tigo, el Gobierno, que no quiere que dé frutos venenosos sino
sazonados y saludables al árbol que la revolución ha plantado
y que él procura arraigar con diligente solicitud, se ha pro-
puesto sostener y expandar el uso de todas las libertades y de
todos los derechos sancionados; más también corregir inesora
blemente los abusos de cualquier género, que intencionada o
incaminadamente se cometen por colectividades o por personas, se
an cualesquiera su categoría y sus títulos.

Los medios y moedos de realizar un fin patriótico —
deber ser tanto más nobles y más dignos, cuanto sean más —
apreciables y más preciosos los derechos de que el afecto se
haya de hacer uso. Vale V.S. diligentemente porque sea respes
tado el derecho de reunión y de asociación pacíficas, no menos
que el de la libre emisión del pensamiento; pero cuide con no
menor diligencia de corregir los abusos que a la sombra de tan
sagrados derechos se cometen; y puesto que todo ataque a la —
legalidad constituye un verdadero delito, y tiene en el Código marcada su pena, tan luego como V.S. tenga noticia de cualquiera punible asceso en ese orden, adopte sin vacilación las medidas oportunas para corregirlo y para sujetar los delincuentes a la acción de los Tribunales de justicia.

Madrid 3 de diciembre de 1868.—Sagasta—Sr. Gobernador de la provincia de .......

5) Artículos 17 y 19 de la Constitución de 5 de Julio de 1869.

Art. 17.—Nadie podrá ser privado ningún español:
Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante.

Del derecho de reunirse pacíficamente.

Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública; y por último,

Del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y a las autoridades.

Art. 19.—A toda asociación cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma les proporcione, podrá imponérselle la pena de disolución.

La autoridad gubernativa podrá suspender la asociación que delinque, sometiéndola incontinenti los reos al juez —competente.

Toda asociación cuyo objeto o cuyos medios compromete—
tan la seguridad del Estado, podrá ser disuelta por una ley.

6) Circular de 25 de septiembre, dictando disposiciones para reprimir los abusos que se cometen en el ejercicio de los derechos de asociación y reunión (Gaceta de 26.).

Un año hace que la Nación española llevó a efecto —una revolución profunda, cuyas benéficas consecuencias, en gran de escala iniciadas, solo necesitan para desarrollarse el concurso de los pueblos y la tranquilidad del país, sin lo cual —serían completamente ineficaces los más patrióticos esfuerzos de las Cortes Constituyentes y la voluntad más decidida del —Gobierno.

El ejercicio de los derechos individuales, base fundamental de las Constituciones democráticas y elemento obligado de toda reforma liberal, no solo no ha encontrado obstáculos ninguno por parte del Gobierno, como V.S. sabe perfectamente, —sino que queriendo éste adelantarse a la más esquista suspicacia, ha procurado llevar su respeto en este punto hasta la tolerancia del abuso, en la idea de que la práctica de la libertad iría poco a poco enseñando a los ciudadanos los verdaderos límites de sus derechos, al principio siempre confusos para —los pueblos que de repente sacuden el yugo de la opresión. El Gobierno, pues, ha cumplido en esto, como en todo, su deber, —y ha obedecido la voz de su consciencia, creyendo poder apolar confiadamente a la del país y a la de sus legítimas Representantes, seguro de obtener su favorable veredicto. ¡Lástima que no todos los partidos hayan seguido la anchurosa senda de la —legalidad que tan lealmente se les franqueaba, contribuyendo —así a aumentar el prestigio de las nuevas instituciones, y a —
consolidar la libertad por primera vez practicada con toda amplitud en España.

El hecho es, sin embargo, y dolor causa al Gobierno consignarlo, que alguna fracción política, de buena fe—unas veces, con manifiesta imprudencia otras, socavando siempre el edificio constitucional y dando con sus procederes júbilo y esperanzas a los enemigos de la revolución, ha desnaturalizado el uso de los derechos individuales, valiéndose de ellos para atacar violentamente la Constitución y las leyes, para dar el grito de rebelión en su contra; para introducir el temor en el ánimo de los ciudadanos honrados, para llevar el desasosiego al interior de la familia, para perturbar la pública tranquilidad, para destruir el crédito del Estado, y para enervar, en fin, la energía gubernamental, que hoy es más que nunca necesita en bien del público desplegar.

De esto no es necesario aducir pruebas: el país lo sabe, el país lo siente, el país clamó por su pronto remedio; y el Gobierno no sería digno de su confianza si, el paso que defiende con energía el libre y legal ejercicio de los derechos políticos y civiles, no reprimiera con rigor el ejercicio ilegal que los conculca y destruye.

Los derechos de reunión y de asociación son por desgracia los de que más impunemente se ha abusado, faltando a las prescripciones de la Constitución y de las leyes, y dando ocasión a perturbaciones que enmascaran la revolución, a abusos que desprestigian la libertad y a crímenes que deshonran a los partidos en cuyo nombre se cometan.

Los artículos 17, 18 y 19 de la ley fundamental del
Estado, si bien sancionan las reuniones y asociaciones, es bajó la condición de que sean pacíficas, de que no sirvan de medio para diluir y de que no comprometan la seguridad del Estado; y los decretos de 1º y 20 de noviembre de 1868, convertidos en leyes después de publicada la Constitución, dictan también reglas cuya infracción pone a los que la cometen fuera de la legalidad.

Sin embargo, el Gobierno ha visto con sentimiento colocarse en esa situación punible las reuniones y manifestaciones que ostentan lemas contrarios a la forma de Gobierno sancionada por las Cortes Constituyentes, y ha presenciado con dolor que las asociaciones, prestando a sus individuos las fuerzas de su colectividad, les escitan por medios directos e indirectos a la rebelión, niegan la Soberanía de las Cortes Constituyentes, inflaman las masas ignorantes con predicaciones subversivas, amenazan con hechos criminales el país y ponen en peligro la seguridad del Estado.

Si un asceso de respeto a los derechos y a las formas políticas ha hecho que el Gobierno muestre una tolerancia mal comprendida y poco pagada; hoy que el término de la constitución definitiva del país se aproxima; hoy que los mal entendidos rechazan sus esfuerzos desplegando una actividad calenturienta, y preparando actos de resistencia y de agresión que no puedan en manera alguna consentirse; hoy que el crimen ha venido a coronar la triste obra de los que, insensatos o malvados, quieren ahogar la libertad en los horrores de la anarquía; hoy el Gobierno cree llegado el caso de revestirse de todas las atribuciones que le competen, de precaver sin con—
templaciones excesos de funestísimas resultados, y de reprimir con mano fuerte los que se cometan.

En su consecuencia, y una vez perdida toda esperanza de que para ciertas gentes la práctica de la libertad corrija por su propia virtud y solo por ella los grandes abusos que a su sombra se han venido cometiendo, necesario es robustecer con voluntad firme la pública tranquilidad, para lo cual —no son precisas por fortuna ni medida ninguna preventiva ni nuevas disposiciones. Los artículos 17, 18 y 19 de la ley fundamental del Estado ya citados; y los decretos de 1º y 20 de noviembre de 1868, elevados a leyes después por la voluntad soberana de las Cortes Constituyentes, dan al Gobierno medios suficientes para ocurrir por el momento a todas las necesidades. Emplee V.S., pues, con decisión y con energía estos medios, y con arreglo a las citadas disposiciones proceda inmediatamente y bajo su más estrecha responsabilidad:

1º. — A intimar a todas las asociaciones, cualquiera que sea el nombre con que se designen, cuyos asociados no hayan puesto en conocimiento de la Autoridad local su objeto y los reglamentos y acuerdos por que aquellas hayan de regirse, según dispone el art. 2º. del citado decreto de 20 de noviembre de 1868, elevado a ley por las Cortes Constituyentes en 20 de junio último, a que suspendan inmediatamente sus sesiones hasta que llenen estos requisitos. Los que a despecho de la intimación de la Autoridad continúen reuniéndose sin llenar las prescripciones anteriores serán considerados como culpables y entregados al Tribunal competente.

2º. — A reprimir con mano fuerte y por todos los medios que las leyes ponen a su alcance los excesos y atentados
que se cometan, aún en aquellas asociaciones constituidas con
las condiciones legales; no tolerando en ellas ni gritos sub-
versivos, ni ataques a la Constitución monárquica de la nación
ni amenazas a la propiedad, a la honra o a la vida de los ciu-
dadanos, ni ultrajes a la moral; y deteniendo en el acto a los
culpables para entregárselos a los tribunales, suspendiendo entre
tanto la asociación hasta que recaiga ejecutoria.

30. - A repírirmir con igual energía los excesos y atan-
tados que se cometen en las reuniones y manifestaciones, decla-
mado o protestando tumultuariamente contra la organización mo-
árquica del país acordada por las Cortes Constituyentes, o —
proclamando por medio de vivas, notas o banderas principios con-
trarios a los que la ley fundamental del Estado tiene consigna-
dos. En tales casos, la Autoridad y sus agentes detendrán en el
acto a los culpables y los someterán al Juez competente, con —
arreglo a la Constitución y a las leyes.

Y 40. - A prevenir a los Alcaldes que cuiden en los
pueblos de su residencia del puntual cumplimiento de estas ins-
trucciones, haciendo uso al efecto de todo el lla no de sus fa-
cultades, y requiriendo en caso necesario el auxilio de la fuer-
za pública.

De orden de S.A. el Regente del Reino, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, lo comunico a V.S.; previniendo-le
que sobre su puntual observancia no debe permitir la menor omi-
sión, exigiéndolo por el contrario a las Autoridades y a sus agen-
tes que en ella incurran inmediata responsabilidad en los térmi-
nos prevenidos en el art. 285 del Código penal y demás disposi-
ciones legales.
Dios guarde a V.S. muchos años, Madrid 25 de setiembre de 1869.—Sagasta— Sr. Gobernador de la provincia de .......

7) Ley provisional que aprueba el Código Penal de 1870.

"Artículo único. Se autoriza al Ministro de Gracia y Justicia para plantear como ley provisional el adjunto proyecto reformando el Código penal.

La comisión propondrá dictásen definitivo, y éste —se discutirá con preferencia a otros asuntos tan pronto como las Cortes reanuden sus sesiones—."

8) Artículos 189-202 y 229-235 del Código Penal de 1870.

Art. 189. No son reuniones o manifestaciones pacíficas:

1º. Las que se celebren con infracción de las disposiciones de policía establecidas con carácter general o permanente en el lugar en que la reunión o manifestación tenga efecto.

2º. Las reuniones al aire libre o manifestaciones políticas que se celebren de noche.

3º. Las reuniones o manifestaciones que concurra un número considerable de ciudadanos con armas de fuego, lanzas, sables, espadas y otras armas de combate.

4º. Las reuniones o manifestaciones que se celebren con el fin de cometer alguno de los delitos penados en este Código, ó las en que, estando celebrándose, se cometiese alguno de los delitos penados en el título III, libro II del mismo.
Art. 190. Los promotores y directores de cual-
quiera reunión o manifestación que se celebre sin haber
puesto por escrito en conocimiento de la Autoridad, con
veinticuatro horas de anticipación, el objeto, tiempo y lugar
de la celebración, incurrirán en la pena de arresto mayor y
multa de 125 a 1.250 pesetas.

Art. 191. Los promotores y directores de cual-
quiera reunión o manifestación comprendida en alguno de los
casos del art. 189 incurrirán en la pena de prisión correccio-
cional en sus grados mínimo y medio y multa de 125 a 1.250
pesetas.

Art. 192. En los casos de los artículos preceden-
tes, si la reunión o manifestación no hubiere llegado a ce-
lebrarse, la pena personal será la inmediatamente inferior
en grado.

Art. 193. Para la observancia de lo dispuesto en
los artículos anteriores, se reputarán como directores de
la reunión o manifestación los que, por los discursos que en
ellas pronunciaren, por los impresos que hubieren publicado
o hubieren en ellas repartido, por los lemas, banderas u otros
hechos aparecieren como inspiradores de los actos de aquellas.

Art. 194. Los meros asistentes a las reuniones o
manifestaciones comprendidas en los núms. 1.°, 2.° y primer
caso del 4.° del art. 189 serán castigados con la pena de
arresto mayor.

Art. 195. Incurrirán respectivamente en las penas
inmediatamente superiores en grado los promotores, direc-
tores o asistentes a cualquiera reunión o manifestación, si
no la disolvieren a la segunda intimación que al afecto hi-
ciern las Autoridades o sus agentes.

Art. 196. Los que concurrieren a reuniones o manifestaciones llevando armas de fuego, lanzas, espadas, sables u otras armas blancas de combate serán castigados con la pena de prisión correcional en sus grados mínimo y medio.

Art. 197. Los asistentes a reuniones o manifestaciones que durante su celebración cometeren alguno de los delitos penados en este Código incurrirán en la pena correspondiente al delito que cometeren, y podrán ser —aprehendidos en el acto por la Autoridad o sus agentes, o en su defecto por cualquiera de los demás asistentes.

Art. 198. Se reputan asociaciones ilícitas:
1ª. Las que por su objeto o circunstancia sean contrarias a la moral pública.
2ª. Las que tengan por objeto cometer alguno de los delitos penados en este Código.

Art. 199. Incurrirán en la pena de prisión correcional en sus grados mínimo y medio y multa de 125 a 1.250 pesetas:

1ª. Los fundadores, directores y presidentes de asociaciones que se establecieren y estuvieren comprendidas en alguno de los números del artículo anterior.
2ª. Los fundadores, directores y presidentes de asociaciones que se establecieren sin haber puesto en conocimiento de la Autoridad local su objeto y estatutos con ocho días de anticipación a su primera reunión, o veinticuatro horas antes de la sesión respectiva, al lugar en que hayan de celebrarse éstas, aún en el caso en que lle-
gar a cambiarse por otro el primeramente elegido.

3º. Los directores o presidentes de asociaciones que no permitieran a la Autoridad o sus agentes la entrada o la asistencia a las sesiones.

4º. Los directores o presidentes de asociaciones que no levanten la sesión a la segunda intimación que con este objeto hagan la Autoridad o sus agentes.

Art. 200. Incurrirán en la pena de arresto mayor:

1º. Los meros individuos de asociaciones comprendidas en el art. 198.

Cuando la asociación no hubiere llegado a establecerse, las penas serán represión pública y multa de — 125 a 1.250 pesetas.

2º. Los meros asociados que cometieran el delito comprendido en el núm. 3º del artículo anterior.

3º. Los meros asociados que no se retiren de la sesión a la segunda intimación que la Autoridad o sus agentes hagan para que las sesiones se suspendan.

Art. 201. Incurrirán en las penas inmediatamente superiores en grado a las respectivamente señaladas en los dos artículos anteriores los fundadores, directores, presidentes e individuos de asociaciones que vuelvan a celebrar sesión después de haber sido suspendida por la Autoridad o sus agentes, mientras que la judicial no haya dejado sin efecto la suspensión ordenada.

Art. 202. Incurrirán en la pena de prisión corrección en sus grados mínimo y medio y multa de 250 a — 2.500 pesetas los que fundaran establecimientos de enseñanza que por su objeto o circunstancias sean contrarios
a la moral pública.

Art. 229. Serán castigados con las penas de suspensión en sus grados mínimo y medio y multa de 125 a 1.250 pesetas:

19. El funcionario público que, no estando en suspensión las garantías constitucionales, prohibiere o impidiere a un ciudadano, no detenido ni preso, concurrir a cualquiera reunión o manifestación pacífica.

20. El funcionario público que en el mismo caso le impidiere o prohibiere formar parte de cualquiera asociación, a no ser alguna de las comprendidas en el art. 198 de este Código.

30. El funcionario público que en el mismo caso de los artículos anteriores prohibiere o impidiere a un ciudadano dirigir, solo o en unión con otros, peticiones a las Cortes, al Rey o a las Autoridades.

Art. 230. El funcionario público que impidiere por cualquier medio la celebración de una reunión o manifestación pacíficas de que tuviera conocimiento oficial, o la fundación de cualquiera asociación que no esté comprendida en el artículo 198 de este Código o la celebración de sus sesiones, a no ser las en que se hubiere cometido alguno de los delitos penados en el tít. III, libro II del mismo, incurrirá en la pena de suspensión en sus grados medio y máximo y multa de 250 a 2.500 pesetas.

Art. 231. Serán castigados con la pena de suspensión en su grado máximo a inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo y multa de 250 a 2.500 pesetas.
18. El funcionario público que ordenare la disolución de alguna reunión o manifestación pacífica.

20. El funcionario público que ordenare la suspensión de cualquiera asociación no comprendida en el art. 198 de este Código.

Art. 232. El funcionario público que no pusiere en conocimiento de la Autoridad judicial, en las veinticuatro horas siguientes al hecho, la suspensión de una asociación ilegítima o la de la sesión de cualquiera otra asociación que hubiere acordado y las causas que hayan motivado la suspensión en sus grados medio y máximo y multa de 250 a 2,500 pesetas.

Art. 233. Incurrirán en las mismas penas el funcionario público que ordenare la clausura o disolución de cualquier establecimiento privado de enseñanza, a no ser por motivos razonablemente suficientes de higiene o moralidad, y al que no pusiere en conocimiento de la Autoridad judicial dicha clausura o disolución en las veinticuatro horas siguientes de haber sido llevada a efecto.

Art. 234. Incurrirá en la pena de destierro en sus grados mínimo y medio el funcionario público que, sin haber intimado dos veces consecutivas la disolución de cualquiera reunión o manifestación o la suspensión de las sesiones de una asociación, empleare la fuerza para disolverla o suspenderla, a no ser en el caso de que hubiere - precedido agresión violenta por parte de los reunidos, manifestantes o asociados.

Si del empleo de la fuerza hubieren resultado le-
sionad leves a alguno d a algunos de los concurrentes, la pena será la de destierro en sus grados medio y máximo y la misma multa.

Si las lesiones fueren graves, la pena será la de confinamiento en sus grados mínimo y medio y multa de 500 a 5.000 pesetas.

Si hubiere resultado muerte, la pena será la de confinamiento en su grado máximo a relegación temporal y multa de 1.250 a 12.500 pesetas.

Art. 235. El funcionario público que, una vez disuelta cualquiera reunión, manifestación, o suspendida cualquiera asociación o su sesión, se negare a poner en conocimiento de la Autoridad judicial que se lo reclama- re las causas que hubieren motivado la disolución o sus- pensión, será castigado con la pena de inhabilitación abs- oluta temporal y la multa de 250 a 2.500 pesetas.

9) Art. 556 Código Penal de 1870.

Art. 556. Los que se coligaren con el fin de en- carecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo o - regular sus condiciones, serán castigados, siempre que la coligación hubiere comenzado a ejecutarse, con la pena de arresto mayor.

Esta pena se impondrá en su grado máximo a los jefes y promotores de la coligación y a los que para a- segurar su éxito emplearen violencias o amenazas, a no ser que por ellas merecieren mayor pena.

10) Circular de 23 de Noviembre, expedida por la Fiscalía del Tribunal Supremo, acerca del derecho de aso- ciación y de las huelgas.
Tienen los funcionarios del Ministerio fiscal la obligación de promover la formación de causas criminales, por delitos o faltas, cuando tengan conocimiento de su perpetración.

Todo español, según la Constitución del Estado, tiene el derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública.

Conviene mucho tener siempre presente estos dos preceptos.

Las Constituciones y las leyes establecen o declaran los derechos; los Tribunales de justicia, por sus sentencias, mantienen a los ciudadanos en el uso de estos derechos o dicen que no pueden ejercitarse.

Si se constituye una asociación con fines contrarios a la moral pública, o cuyos individuos delincan por los medios que la misma les proporciona, los asociados no podrán continuar siendo sus creadores; pero es necesario que lo digan antes a los Tribunales de justicia en sentencia definitiva sobre causa formada de oficio o a instancia de un funcionario del Ministerio fiscal.

Establecen las escuelas políticas con variedad notable diferencia entre la sociedad y el Estado, negando o dando a este las facultades que concede o niega a aquella.

El Ministerio fiscal que carece de autoridad para resolver estas cuestiones, tiene competencia para formar su criterio sobre esta materia, y le formará en muy pocas palabras.

El hombre no puede vivir sin estar asociado: es sociedad la reunión, la colectividad de todos los individuos que forman una familia; es sociedad la de los que viven en —
una misma casa; es sociedad la de los que habitan en una misma parroquia; es sociedad la de aquellos que están domiciliados en un mismo municipio: forman sociedad los comprendidos en una misma provincia; y es la gran sociedad —la que forman los individuos de una misma nación.

Esta última sociedad puede considerarse, aunque las otras también en menor escala, como una gran compañía de seguros mútuos, cuyo objeto y fin en la de la nación es mantener y defender los derechos de cada uno de los asociados contra las invasiones de cada uno de los demás.

El Estado, a quien la sociedad encomienda esta —defensa y protección, es el gerente de la gran compañía de seguros, es la Junta directiva de la sociedad.

Tal es para este Ministerio la diferencia entre la sociedad y el Estado.

Y como el hombre, ser físico y a la vez ser inteligente, tiene derechos que la naturaleza le da, y sin cuyo ejercicio no podría vivir físicamente: y como la inteligencia de su ser moral le presenta el horizonte de la perfección de su espíritu, horizonte que no puede recorrer sin guía y sin acompañamiento........ por eso los derechos naturales, que no da la sociedad, de que no puede privar la sociedad, que no puede limitar la sociedad, el Estado gerente y director de la gran compañía debe mantener y proteger; y si otra cosa hace es tiránico y opresor; va contra la naturaleza del hombre, tiende a destruir su ser físico, se opone a su desarrollo y perfección intelectual.

Otros son los derechos individuales, más o menos en número, que tienen los ciudadanos a medida que son más
o menos liberales sus Constituciones políticas.

Si hay una asociación establecida o en propósito de serlo, cuyos fines conocidos sean contrarios a la moral pública, tienen los funcionarios del Ministerio fiscal la obligación ineludible de promover contra ella la formación de causa. Esto es muy fácil de decir y facilísimo de comprender; pero las dificultades empiezan al tratar de definir lo que se entiende por moral pública para poder luego con acierto y con justicia calificar una asociación dada de contraria a la moral pública por su objeto o por sus fines.

Tantos hombres definiendo la moral pública, tantas definiciones esencialmente diversas: por manera, que de una entidad realmente existente ha venido a ser la moral pública una abstracción ininteligible, incomprehensible, inapreciable.

Si podemos los funcionarios del Ministerio fiscal, aparte de nuestro cargo, mezclarnos en esta discusión filosófica: si decimos, que desconociendo al mecanismo de este fenómeno, conocemos, porque lo sentimos, el fenómeno de la existencia de la moral pública, como sentimos el de la moral particular; y que en la conciencia de todos los hombres rectos y de cabal juicio está escrito el Código de la moral —privada y de la moral pública —... diremos una verdad incontrastable y que pone término a cuestiones tan estériles, como peligrosas.

La única materia de las causas criminales son los delitos y las faltas; y solamente son faltas o delitos las omisiones o los hechos así calificados en el Código penal. Esta doctrina indica ya cuál debe ser la moral pública en el ejercicio de nuestro ministerio.
Los representantes de la acción pública cerca de los Tribunales de justicia deben, siempre con celo y diligencia, pero siempre también desapasionadamente, pedir la formación de causa por los hechos y omisiones que sean en el Código faltas o delitos; y sin misericordia, pero sin ira, pedir también las penas de la ley contra sus autores.

Si una asociación se forma o trata de formarse, si se celebra una reunión con el fin de cometer alguno de los delitos penados en el Código, está reunión no es pacífica, y los que toman parte en ella deben ser procesados y penados, probado el delito; y si aquella asociación por su objeto y circunstancia incurre en la sanción del art. 198, los que la formen serán reos de delito y contra ellos deberá promoverse la formación de causa.

Para el Ministerio fiscal, es contrario a la moral pública todo lo que por el Código penal está calificado de faltas o de delito; ni más ni menos; Los hechos delitos o faltas están prohibidos y penados por la ley; los hechos que la ley no califica de faltas o delitos, podrán no ser morales —ni en el concepto público, ni en el concepto privado; pero así y todo no pueden ser materia de proceso criminal.

La moral pública para los Fiscales consiste en que los ciudadanos se abstengan de hacer lo que la ley penal prohíbe, en que hagan lo que están obligados a hacer, y por su omisión en su caso se harían reos de delito; y es para ellos contrario a la moral pública lo que los ciudadanos hacen produciendo por sus hechos delitos o faltas comprendidos en el Código penal.

Saber respetar prácticamente los derechos natura-
les del hombre, los que la sociedad reconoce y establece para el ciudadano, y los que le conceden la Constitución y las leyes: y hermanar con ese respeto la persecución sin trégua de los delitos y de los delincuentes, de manera que ninguno delito y autor conocido quede impune, y que al mismo tiempo no sufran detrimento alguno los derechos legítimos y naturales del hombre, es el gran trabajo y el gran deber de nuestro ministerio.

Que los obreros de una fábrica de curtidos, por ejemplo, se reúnan y se asocien para tratar de mejorar su condición; que uno de ellos diga a los demás: "Nosotros ponemos en la fábrica un trabajo que vale por sus productos veinte reales al día, y recibidos solamente doce: salimos perjudicados en ocho reales diarios, y beneficiados injusta o inequitativamente el dueño de la fábrica; o se nos dá el jornal de cinco pesetas que ganamos, o no trabajamos más en ella". Y si los reunidos aplauden esta manifestación y la ponen en conocimiento del fabricante, y éste mantiene el jornal de los doce reales que los obreros no quieren recibir y se constituyen en huelga; todo esto se hace por el uno y por los otros con perfecto derecho; estos, no queriendo dar su trabajo por menor precio del que a su parecer merece, y el fabricante negándose a dar a su capital menor interés del que hasta entonces le producía, y que quiere que continúe produciéndolo.

Todavía si los obreros pasan este límite, y asociados establecen con fondos propios o ajenos una fábrica de la misma especie, y por ello sufren perjuicios el fabricante, de este caso no hay responsabilidad a cargo de los que antes fueron sus obreros. Esto es en general, es decir, com-
prendiendo a los de todas las clases, no pueden configurarse con el fin de encarecer abusivamente el precio del trabajo; no pueden sin faltar a la ley y sin hacerse mercedores de pena, regular abusivamente las condiciones del trabajo; pero propietarios del trabajo, dueños del trabajo, señores del capital trabajo, tienen el derecho de hacer valer por los medios legales el interés de este capital.

Si cuatro son los capitales que de ordinario concurren a la formación de los productos fabriles, a saber: el capital dinero, propiedad del fabricante o puesto por él aunque sea ajeno; el capital edificio-fábrica; el capital inteligencia, propiedad del director industrial; y el capital trabajo, propiedad de los obreros; si estos cuatro capitales valen respectivamente cada uno de ellos tanto como cada uno de los demás; si estos capitales reunidos producen el 40 por 100; si este beneficio se distribuye dando al capital dinero el 10 por 100, al edificio-fábrica, al 15 a la inteligencia directiva industrial, que dura poco porque acaba con el hombre, y el tres y medio solamente al capital trabajo resultando un sobrante no distribuido de cinco y medio por ciento de los capitales acumulados, esto, que en lo equitativo sería interés del último capital, capital trabajo, va a parar a manos del fabricante que recibe por este sistema quince y medio por ciento por interés de un capital igual al de los obreros, a quienes se da únicamente el tres y medio por ciento.

Y como todos los hombres cuando meditan sobre sus intereses, examinan una por una todas las circunstancias, todas las causas, que pueden contribuir a aumentarlos o disminuirlos, los obreros, que ven por los resultados de la fá
tricación la prosperidad siempre creciente de los fabricantes
sin que ellos sientan mejora en su condición, llega a creer, -
con acertado o con erróneo cálculo, que la gran fortuna del
fabricante se forma de las porciones de jornal de cada uno de
los obreros que debiendo recibir, por ejemplo, por su trabajo
cuatro pesetas al día, recibe dos y media solamente: y su pri-
mera resolución es la de pedir al fabricante el que ellos cre-
en el completo de su jornal: siendo de ordinario la segunda -
procurarse los medica, sin faltar a la ley, de hacer fuerte -
al capital trabajo para que el capital dinero no se le impon-
gan.

Y si esto proyectan, y si para esto se reúnen; si -
no ejecutan hecho alguno que contituya falta o delito, no hay
motivo para procesamiento criminal; no le hay para considerar
como ilícita la asociación, mucho menos le hay para tener por
delincuentes a los asociados con estos objetos.

¿Hay en España una asociación, veinte asociaciones
formadas con este o parecidos propósitos, sea el que sea el -
nombre que se den, y que en ninguna de ellas exista como fin
u objeto contrariar a la moral pública, cometiendo alguno de
los delitos penados en el Código?. Pues esa asociación, esas
veinte asociaciones son lícitas: los asociados a ellas usan -
de derechos que la Constitución y las leyes tienen estableci-
dos y en la forma que deben hacer uso de ellos.

Es conforme con la moral pública, en la acepción ju-
rídica de estas palabras, lo que no está prohibido; es contra-
rio a la moral pública también, en la acepción jurídica de es-
tas palabras, lo que está prohibido por las leyes penales.

Nada de abstracciones filosóficas en esta materia -
para el Ministerio fiscal; hechos determinados, hechos concretos, hechos u omisiones que las leyes penales hayan calificado de faltas o de delitos, esos son los que deben y sus autores perseguirse judicialmente.

Y como son delitos o faltas los hechos u omisiones así calificados en el Código, la acción u omisión no penada —ni es falta ni es delito; el que hizo, el que dejó de hacer— en este caso, no es delicuente.

Las asociaciones que ni en su objeto, ni en sus circunstancias sean contrarias a esta moral pública judicial, no cometen falta o delito penado por la ley, son lícitas; su objeto y sus circunstancias, sus fines y sus propósitos que no contrarían a la moral pública judicial, no ofrecen motivo justo para ser procesadas. Perseguir con celo y diligencia, pero sin pasión siempre a los delincuentes; vigilar por el cumplimiento de las leyes, que tanto defienden a la sociedad y al Estado en sus derechos y en su poder, como a los hombres en los que le dio la naturaleza y a los ciudadanos en los que la Constitución y las leyes les conceden; no preocuparse por afeciones políticas de ningún partido, de ninguna escuela; formar su consciencia en el molde de su deber legal, y por último, en estas circunstancias y en todas las que sobrevengan, por difíciles y angustiosas que sean, desempeñar los cargos con la prudencia, pero sin miedo, con valor, pero sin temeridad y sin tomar en cuenta para nada ni por nada la suerte que a cada uno de nosotros le reserva la adversidad o la fortuna.... es nuestro destino en la sociedad y debemos cumplirle como buenos y como leales.

Sirvase V.S. dar conocimiento de esta circular a los funcionarios del Ministerio fiscal en esta Audiencia y darme...
oportunamente aviso de haberla recibido. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 23 de Noviembre de 1.871.—Sr. Fiscal de la Audiencia de ......

11) Circular de 16 de Enero, dando instrucciones a los Gobernadores acerca del orden público, de la Internacional, las huelgas y el filibusterismo (Gaceta de 17.).

Correspondiendo a la Autoridad que V.S. ejerce en esa provincia la interpretación directa de las ideas y el inmediato desarrollo ejecutivo de los propósitos del Gobierno en el orden político de sus funciones, desde el momento en que en las esferas del poder se produzca una modificación cualquiera, por más que esta no implique variación alguna esencial ni accidental en el modo de ser gubernativo del país, parece, sin embargo indispensable que los inmediatos delegados de su Autoridad suprema conozcan y comprendan cuál es la tendencia de aquellas ideas y el carácter de aquellos propósitos, en cuyo favor se invoca y se espera su más activa y decidida cooperación.........

Al calor de los principios proclamados por la Revolución de Setiembre, y al amparo de los derechos consignados en las instituciones por las mismas creadas, vino a pedir ostensiblemente para su existencia ante subrepticia, carta de naturaleza làgala entre nosotros llamada Asociación internacional de trabajadores. Esta secta comunista, verdadera conspiración social contra todo lo existente, que proclamándose a sí misma como la más absoluta negación de Dios y del Estado, de la propiedad y de la familia, pretende elevar a la categoría de principios político-sociales teorías que en toda sociedad organizada no pueden considerarse de otra maner
ra que como la utopía filosófica del crimen; que declarando –paladinamente la siniestra resolución de atacar por su base los fundamentos de las sociedades modernas, quiere volver a poner de nuevo en tela de juicio todos los peligrosos problemas que la vida de la humanidad, por ser el aserto práctico de su propia existencia, ha venido resolviendo lenta, penosa y experimentalmente con el largo tránscurso de los siglos; –cubriéndose hoy a la sombra del árbol de nuestras libertades, intenta abusivamente lograr por el derecho de asociación, consignado en nuestro Código fundamental, la legitimidad de un organismo que le permita dar principio de ejecución a sus propósitos de trastorno universal. En hora buena que la simple –proclamation de estos principios y la mera enunciación de estos intentos, mientras se mantengan dentro de ciertos límites y formas, no puedan llegar a ser penales por las leyes; pero una vez proclamados los primeros, y hecha la pública confesión de los segundos, el hecho de asociarse y organizarse para llevarlos a cabo constituye indudablemente un acto punible, que –por ser para fines lícitos de la actividad humana y compatibles con la moral pública, no caben ya bajo el amparo de aquel derecho. Conoce bien V.E. a este propósito las brillantes y prolongadas discusiones en que la Cámara popular de nuestro país, atrayéndose la atención y las respetuosas simpatías de todo el mundo civilizado, claramente significadas en su favor, se ocupó del juicio de esta peligrosa asociación y de definir el sentido interpretativo con que aquel precepto de nuestro Código –debió serle aplicado. Conocidas deben serle también las terminantes declaraciones hechas entonces por el Gobierno que a la sazón regía los destinos de la patria, y la solemne votación –en que fueron admitidas y sancionadas.
Si los sucesos políticos de otro orden que por entonces tuvieron lugar impidieron que estas declaraciones alcanzasen la forma concreta de una ley, el Gobierno de hoy, que las acepta por entero, que las considera en toda la fuerza virtual de tales, porque no puede concebir que actos tan trascendentales deban quedar en el vacío, y que en todo caso hará que la reciban con arreglo al art. 19 de la Constitución del Estado, no vacila en señalarlas desde luego a V.S. como la regla de su proceder gubernativo para que la que debe conceptuar como ilícita asociación.

Considero, pues, V.S. a La Internacional como fuera de la Constitución del Estado, y dentro del Código penal, por hallarse comprendida en su art. 198 y los demás con él concordantes, y por todo lo que declaradamente encierra de atentatorio a la integridad y seguridad de la patria y ofensivo a la moral pública en sus denegaciones del Estado, de la propiedad y de la familia, impidiendo, en su consecuencia, reasentándose en lo que a la órbita de su autoridad corresponda, y hasta por medio de la fuerza en los casos procedentes, todo acto público que en cualquiera forma de manifestaciones tienda a establecer entre nosotros su criminal organización, deteniendo y entregando inmediatamente sus perpetradores a la acción de los Tribunales. Espera, sin embargo, el Gobierno de S. M. que V.S., acatando por otra parte cuanto es debido al libre ejercicio del derecho de asociación para todos los fines lícitos de la actividad humana, sabrá respetar, fomentar y hasta proteger, si necesario fuere, aquellas sociedades existentes o que se formaren en la provincia de su mando, ya fueron cooperativas o de cualquier otro género, cuyo propósito sea el de mejorar la suerte de las clases trabajadoras o el de armonizar dentro de las leyes los intereses, distintos —quizás, pero nunca opuestos, de los fabricantes y de los ope-
rarísimos. De la existencia de estas sociedades, que deberá V.S. tener bajo su amparo cuando lo necesitaren y siempre bajo su más esquisita vigilancia, dará V.S. cuenta al Gobierno, haciéndole conocer y sujetando a su examen, como está repetidamente prevenido, su objeto y los reglamentos de su constitución, sin cuyo requisito no pueden considerarse como lícitas; y tanto —cuyo deberá ser el examen con que V.S. las atienda y las — auxilie, así deberá ser también el cuidado con que las estudie en sus funciones, utilizando al efecto las atribuciones de que le reviste el art. 199 del Código penal, a fin de que tan pronto como adquiera la evidencia de que, aún afectando formas y propósitos legales están afiliadas y sin secciones o sucursales de la Internacional, proceda a su inmediata suspensión, aplicándolas el mismo criterio con que aquella ha sido juzgada.

Confía asimismo al Gobierno en que V.S. sabrá aplicar y practicar los buenos principios de la escuela liberal —en la apreciación gubernativa del hecho social designado modernamente con el nombre de huelgas. La prestación y aceptación del trabajo personal, mediante un estipendio determinado y variable, obedecen, como todos los demás elementos económicos de la producción, del cambio y del consumo a la constante ley de la oferta y de la demanda, único regulador que dentro siempre de la libertad, y creciendo por la aplicación de su criterio, puede dirigir este género de conflictos. Tan libre es el obrero, ya individual o ya colectivamente, para negar su trabajo o para exigir por el mayor o menor precio, como el propietario, el fabricante o el empresario para aceptarle o rehusarle al uno o al otro tipo. Pero para que la ley natural antes indicada produzca espontáneamente todos sus bene-

102
ficos resultados, es necesario que por nada ni por nadie se pueda el libre curso de sus elementos; y en este solo caso se puede intervenir de la autoridad que V.S. reviste, se hace tan legítima como indispensable para proteger la libertad de todos, y restablecerlos y ampararlos en el pleno ejercicio de sus derechos.

Así, pues, y cuando quiera que por medio de presiones tumultuarias o de cualquiera otro género de actos violentos que impliquen la amenaza, la intimidad o el cohecho, se trate de coartar el ánimo, ya de los empresarios o fabricantes, ya de los obreros mismos, procure V.S. que la intervención de su autoridad sea siempre pronta y tan rápida y energica cuanto lo exigiere el carácter e importancia de los casos; y para cuando se constare el de la existencia de alguna confabulación o coercitiva, que por más que haya sido expresamente revelada en hechos conminatorios, pase sobre la libre voluntad de los unos o de los otros, recuerde V.S. el texto y espíritu de los artículos 556 y 557 del Código penal; y procebiendo a su tenor, rompa gubernativamente todo género de trabas y entregue a sus autores a la acción de la justicia. Cualquiera otro linaje de intervención imperativa de parte de la autoridad de V.S., ya declinará en beneficio de los capitalistas o fabricantes, o ya en el de los obreros, caería dentro de los sistemas taxativos condenados por el hoy criterio universalmente aceptado de la libertad. Pero si donde quiera que se produjese uno de estos hoy frecuentes conflictos, interponiendo V.S. sus buenos oficios, bien por el prestigio de su persona y autoridad, bien por la eficacia de sus consejos, dulcificando las exigencias y armonizando los intereses de todos, intentará atraerlos a una común concordia y
a evitar la pérdida del precioso capital del tiempo, cuando —
quiera que por estos medios lo alcance, habré mereci-
do bien de S.M., y la aprobación y el aplauso de su Gobierno.
Tal es el criterio con que este espera que V.S. ha de proce-
der por lo que respecta a la primera de las cuestiones indi-
cadas.........

De orden de S.M., y de acuerdo con el Consejo de —
Ministros, lo digo a V.S. para su inteligencia y cumplimien-
to. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 16 de Enero de —
1872. — Segasta. — Sr. Gobernador de la provincia de ..........

12) Proyecto de Constitución federal de la Repúbli-
ca española.

TÍTULO PRELIMINAR

Toda persona encuentra asegurados en la República,
sin que ninguna poder tenga facultades para cohibirlos, ni —
ley ninguna autoridad para menzearlos, todos los derechos na-
turales.

1º El derecho a la vida, y a la seguridad, y a la
dignidad de la vida.

2º El derecho al libre ejercicio de su pensamiento
y a la libre expresión de su consciencia.

3º El derecho a la difusión de sus ideas por medio
de la enseñanza.

4º El derecho de reunión y de asociación pacíficas.

5º La libertad del trabajo, de la industria, del co-
mercio interior, del crédito.

6º El derecho de propiedad, sin facultad de vincu-
lación ni amortización.

7º La igualdad ante la ley.

8º El derecho a ser jurado y a ser juzgado por los jurados; el derecho a la defensa libérrima en juicio; el derecho, en caso de caer en culpa o delito, a la corrección y a la purificación por medio de la pena.

Estos derechos son anteriores y superiores a toda legislación positiva.

Art. 19. Tampoco podrá ser privado ningún español...

Del derecho de reunirse y asociarse pacíficamente - para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública.

Art. 21. No se establecerá ni por las leyes ni por las autoridades, disposición alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este título.

Tampoco podrán establecerse, la censura, el depósito, ni el editor responsable para los periódicos.

Art. 22. Los delitos que se cometan con ocasión del ejercicio de los derechos expresados en este título, serán penados por los tribunales, con arreglo a las leyes comunes y - deberán ser denunciados por las autoridades gubernativas, sin perjuicio de los que procedan de oficio o en virtud de la acción pública o fiscal.

Art. 24. Las reuniones al aire libre y las manifestaciones serán de día y nunca han de obstruir la vía pública ni celebrarse alrededor de los Ayuntamientos, Cortes del Estado o Cortes de la Federación.
Art. 25. Nadie impedirá, suspenderá ni disolverá en ninguna asociación, cuyos estatutos sean conocidos oficialmente, y cuyos individuos no contraigan obligaciones clandestinas.

13) Contraproyecto de Constitución federal de la República Española, presentado por los Sres. Mag. Quintero y Gala.

TÍTULO PRELIMINAR

DERECHOS Y PRINCIPIOS

Derechos naturales de la personalidad humana.

Artículo 1º. La Nación española reconoce a cualquier persona que viva en territorio español como naturales e imprescriptibles todos sus derechos al íntegro desenvolvimiento de sus facultades físicas, intelectuales y morales, y por consiguiente, le declara los siguientes derechos personales y sociales:

Derechos personales

A la vida
A la libertad de la persona y su seguridad.
A la eficacia e inviolabilidad del domicilio.
A la libertad de cultos.
A la emisión del pensamiento e inviolabilidad de la correspondencia.
A la instrucción.
A la libertad de enseñanza.
A la petición, acción popular, denuncia y querella.
Al de locomoción, vocación y libertad de trabajo en
bien del individuo y de la sociedad.

Al de propiedad de los rendimientos del trabajo, —
pero sin facultad de amortizarla.

**Derechos sociales**

Al de reunión y manifestación pacíficas.

Al de asociación para los fines de la vida humana.

A las ventajas establecidas, o que se establecieron
por las leyes, en igualdad con los demás seres sociales.

Al de igualdad de condiciones para recibir los be-
neficios de la instrucción y de la educación elementales.

Al de proporcionalidad con los haberes en la dis-
tribución de las cargas públicas votadas legalmente.

Al de participación en el gobierno de la sociedad
por medio del sufragio.

A hacer y ejecutar cuanto no trajere perjuicios a
la sociedad y sus individuos.

**Naturaleza de estos derechos**

Art. 2°. Estos derechos pertenecen con igualdad a
todas las personas, cualquiera que sea la diferencia entre
sus fuerzas físicas, intelectuales y morales.

Se derivan de la naturaleza humana y de la necesi-
dad del desarrollo de cada ser.

Son, por tanto, anteriores y superiores a toda le-
gislación; no tienen para cada uno más límite que el de su
armonización con los derechos de los demás, y jamás prescri-
ben.
Art. 50. Si todavía alguien infringe los derechos naturales de la personalidad humana con violencia tal que no consenten tiempo o recurso para impetrar y obtener los auxilios y garantías de la ley, y no halla otro medio de impedir el atentado que rechazarlo por medio de la fuerza, el individuo o la colectividad que detuvieren al agresor injusto, o resistieren la violencia a los derechos de la personalidad humana, no podrán ser castigados, ni arrestados, ni molestados en modo alguno por su resistencia a tan trascendentales infracciones.

Art. 47. Cada cual, nacional o extranjero, es libre de elegir su profesión, aprenderla donde quiera y ejercerla donde estime conveniente.

Sólo una ley cantonal puede prohibir o reglamentar alguna industria, profesión o cultivo, por razones de salud o interés general.

El Gobierno federal puede conceder personalidad jurídica, sin perjudicar la que pertenezca a cualquiera de los asociados, a todas las empresas de utilidad pública, como las de farro-sarriles, canalizaciones, etc., e imponerles tarifas y reglamentar la explotación.

No hay obligación de agremiarse con otros para ejercer una industria.

Las personas de carrera que no se sujeten a reglamentación, cuando exista, como los maestros sin título, farmacéuticos sin patente, médicos sin revalidar, etc., o bien los simples trabajadores, como cocheros de alquiler, mandaderos en los muelles y estaciones, etc., no tienen derecho a reclamar ante los tribunales el pago de sus honorarios.
El Estado no se abroga ningún monopolio industrial ni comercial. Puede conservarse los servicios que se declaren de conveniencia nacional, como correos, telégrafos, semáforos, enseñanza, etc., pero sin que su acción se extienda a prohibirlos a las particulares.

No habrá estancos.

Las relaciones entre obreros y patronos, la edad y las horas de trabajo, son objeto de leyes revisables cada cinco años.

Nadie puede obligar sus servicios personales ni contratarse sino temporalmente y con objeto determinado.

Art. 53. Nadie impedirá, suspenderá, ni disolverá, las reuniones y manifestaciones pacíficas.

Las reuniones serán de día y si se verifican al aire libre; nunca han de obstruir la vía pública, y no han de celebrarse alrededor de las casas de los Ayuntamientos, Asambleas cantonales, ni Cortes de la Federación.

Ninguna reunión puede abrogarse al título o representación del pueblo.

La fuerza no se reúne sino por el mandato de sus jefes.

En nula toda resolución de una autoridad, ante un motín o sublevación.

En los tumultos, la fuerza pública no hará uso de las armas contra actos punibles, sino después de tres estimaciones a toque de tambor o de corneta, para que los amotinados se dispersen.

Art. 54. Nadie impedirá, suspenderá ni disolverá
las asociaciones, cuyos estatutos se conozcan oficialmente, cuyos jefes no sean autoridad en el extranjero ni agentes desconocidos, y cuyos individuos no contraigan obligaciones clandestinas.

14) **Proyecto de Constitución federal de la República española, del señor Suñer y Capdevila.**

El Diputado que suscribe pide a las Cortes que se sirvan admitir la siguiente adición al séptimo párrafo del título preliminar de la Constitución:

"...pero como para ejercerlos con fruto son necesarias ciertas condiciones de saber y bienestar, el Estado, o los cantones, o los municipios, auxiliarán en cuanto puedan a los ignorantes, dándoles ciencia, a los menesterosos, dándoles trabajo."

Palacio de las Cortes 13 de Agosto de 1873.—Francisco Suñer y Capdevila.

15) ** Decreto de 10 de Enero, disolviendo todas las reuniones y sociedades políticas en que se conspire contra la seguridad pública (Gaceta de 11.)**

El Gobierno de la República ha anunciado ya que su principal propósito es asegurar el orden y mantener en pie los fundamentos de la sociedad española, minada hasta hoy por predicciones disolventes y locas teorías. Resultó a no ceder en el camino emprendido por ningún género de consideraciones ni ante dificultades de ninguna especie, se cree en el deber de extirpar de raíz todo germen de trastornos, persiguiendo hasta en su más disimulados y recónditos abrigos a los perturbadores de la tranquilidad pública y a toda socie-
dad que, como la llamada Internacional, atente contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales. En su consecuencia el Poder Ejecutivo de la República ha tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 19. — Quedan disueltas desde la publicación de este decreto todas las reuniones y sociedades políticas — en las que de palabra y obra se conspira contra la seguridad pública, contra los altos y sagrados intereses de la patria, contra la integridad del território español y contra el poder constituido.

Art. 20. Todas las Autoridades quedan encargadas bajo su más estrecha responsabilidad y dentro de sus atribuciones respectivas del cumplimiento rápido y fiable de este decreto.


16) Proposición de información parlamentaria sobre el estado de la clase obrera (12 de julio de 1869).

"Los que suscriben piden á las Cortes tengan á bien decretar una información parlamentaria sobre el estado material, intelectual y moral de las clases trabajadoras, agrícolas como industriales, nombrando al efecto una comisión de su seno que durante el interregno parlamentario adquiera todos los documentos, datos y noticias necesarios para presentar en la próxima legislatura un informe —
que sirva de base para que las Cortes acuerden cuanto pueda conducir á elevar la condición social de esas clases, mejorando su suerte por los medios directos ó indirectos que están en las atribuciones de las Cortes.

Palacio de las Cortes 9 de julio de 1869.— Fernandino Carrido.— Juan Tutsau.— Pablo Alsina.— Francisco Javier Moya.— Federico Gonis.— J. M. Carracon.— Macías Acosta."

17) Proposición de información parlamentaria sobre el estado de la clase obrera (17 de julio de 1871).

"Atendida la importancia y extensión de los trámites bajos de las comisiones nombradas para llevar á cabo informaciones parlamentarias acerca de las sociedades mercantiles y del estado de las clases obreras, pedimos al Congreso se sirva declarar que pueden continuar sus gestiones oficiales durante el tiempo que por suspensión ó terminación de la legislatura presente permanezcan cerradas las Cortes.

Palacio del Congreso 17 de julio de 1871.— F. de Jove y Mévia.— Narciso Martínez Izquierdo.— Ignacio Rojo Arias.— G. Rodríguez.— Baldomero Lestau.— Antonio Garijo Lara.— V. Gonzalez."

18) Proposición de información parlamentaria sobre el estado de la clase obrera (21 de mayo de 1872).

"Los Diputados que suscriben piden al Congreso tenga a bien acordar el nombramiento de una comisión de 21
Expididos de su seno, para que continúe la información parlamentaria decretada por unanimidad por las Cortes Constituyentes, y en la legislatura pasada, y cuyo objeto es estudiar el estado moral, intelectual y material de las clases trabajadoras, así agrícolas como industriales, presentando después al Congreso un informe que sirva de base para acordar cuanto pueda contribuir a elevar la condición social de estas clases, mejorando su suerte dentro del círculo de sus atribuciones.

Palacio del Congreso, 16 de mayo de 1872; Joaquín Mª Sanromá.—Cipriano Segundo Montesino.—José Cristóbal Sorní.—El Conde de Torroba.—Juan Moreno Bermejía.—Juan Fabra y Floret.—José Emilio de Santos.

19) Proposición de información parlamentaria sobre el estado de la clase obrera (1 de octubre de 1872).

"Los Diputados que suscriben tienen la honra de proponer al Congreso la continuación de las informaciones parlamentarias que dejaron pendientes los Congresos anteriores; una acerca del estado de las clases obreras y médico de mejorarlo, y otra sobre el de las sociedades mercantiles.

Palacio de Congreso 30 de septiembre de 1872; Plácido de Jove y Mévia.—Miguel Morayta.—Marqués de Sardoal.—Francisco Pi y Margall.—Florencio Payola.—Luis Vidart.—Juan García San Miguel.
20, a) Proposición de ley, del Sr. Pascual y Casas, declarando exceptuadas de la contribución industrial las sociedades cooperativas que se establezcan.

AL CONGRESO.

Siendo la cooperación uno de los remedios económicos para coadyuvar a la emancipación de las clases obreras y jornaleras, así como a la mejora inmediata de su condición social, los infrascritos Diputados suplican al Congreso se sirva aprobar la siguiente

PROPOSICIÓN DE LEY

Artículo 1°. Se considerarán exceptuadas, para los efectos de la contribución industrial, todas las asociaciones cooperativas de consumo, crédito y producción que se establecieran por obreros y jornaleros industriales y agrícolas en la Nación española.

Art. 2º. Para gozar de este beneficio bastará la presentación de sus estatutos en el Gobierno civil correspondiente.


20, b) Proposición de ley, del Sr. Cisa, declarando exentas de toda contribución industrial a las sociedades cooperativas, durante el término de diez años a contar desde su instalación.
AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Ha dicho un famoso escritor que nada puede hacerse sin trabajo y sin economía, y que con ello todo es posible. Este principio inconsciente debe tenerlo muy en cuenta el legislador, favoreciendo cuanto desarrolle el trabajo y favorezca la economía, para la resolución de los distintos problemas sociales pendientes.

La cooperación crea indudablemente hábitos de uno y otra, que es preciso fomentar, si al Estado toca, como a una institución de derecho que es, velar por las costumbres públicas, que sufren considerablemente por la penuria de los condenados......

PROPOSICIÓN DE LEY

Artículo único. Se declara exentas de toda contribución industrial que se imponga por el municipio la província o la Nación, a las sociedades cooperativas de consumo, producción o de crédito, durante el término de diez años, a contar desde su instalación.

20. c) Proposición de ley, del Sr. Pascual y Casas, declarando exentas de contribución durante cinco años, a contar desde su instalación, a las sociedades cooperativas de consumo, producción o crédito.

Teniendo en consideración el carácter a índole de las asociaciones cooperativas, los infrascritos Diputados tienen el honor de someter al Congreso la siguiente

PROPOSICIÓN DE LEY

Artículo Único. Se declaran exentas de toda contribución industrial que se imponga por el municipio, la provincia o la Nación, a las sociedades cooperativas de consumo, producción o de crédito, durante el término de cinco años, a contar desde su instalación.


21) Proposición de ley, del Sr. Becerra, sobre mejora de las condiciones morales de las clases obreras.

La revolución de Setiembre, llamando a la vida pública al proletariado con la proclamación del sufragio universal, ha hecho notoria la necesidad de atender con urgencia a la mejora de las condiciones morales de las clases necesitadas.
A esta fin se dirige el proyecto de ley que sigue, cuyos princi-
pios han sido ya admitidos por la legislación inglesa, por
la francesa y belga, y por la de los pueblos más adelantados
y cultos.

Se enlaza el punto con grandes cuestiones sobre la ins-
trucción popular; pero el bien no es dado resolverlas directa-
mente y de plano en este proyecto, se consignan en sus artícu-
los disposiciones que tienden indirectamente a fomentarla y
difundirla.

Por último, la estadística y la higiene de las clases po-
bres exigen imperiosamente que se combatan de raíz por el Es-
tado males que afectan al interés social, del que es el Esta-
do por ley y naturaleza principal guardador.

Fundados en estas consideraciones, los Diputados que sus-
ciben tienen la honra de presentar al Congreso la siguiente

PROPOSICIÓN DE LEY

Artículo 1º. Los niños y niñas menores de 11 años no po-
drán ser admitidos para trabajar en ninguna fábrica o taller
que tenga motores hidráulicos o de vapor.

Art. 2º. El trabajo diario de los jóvenes de ambos sexos,
mayores de 11 años y menores de 15, no excederá de ocho horas
en fábricas, talleres u obradores, de cualquiera clase que
 sean, siempre que acrediten con un certificado expedido por

176
un profesor de escuela pública o particular que asistan a su enseñanza.

Art. 3º. Los jóvenes menores de 15 años que no asistan a escuelas públicas o particulares, podrán trabajar diez horas diarias; pero no tendrán sus padres, tutores o curadores acción civil para reclamar de los fabricantes o maestros aumento de salario por este exceso, aunque se hubiere pactado.

Art. 4º. Se prohibirá el trabajo de noche a los jóvenes de ambos sexos menores de 15 años, en fábricas, talleres u obra-
dores de cualquiera clase que sean.

Art. 5º. Quedará exento del pago de una anualidad de la cuota de subsidio industrial que le correspondiera, el fabricante que probara, mediante exámenes públicos presididos por un delegado de la autoridad, que ha mantenido durante dos años en sus talleres escuela de primeras letras o profesionales con aplicación a la industria a que se consagra, y a la cual hayan asistido por lo menos 50 alumnos por término medio.

Art. 6º. Los alcaldes de barrio y los tenientes de alcalde quedarán encargados del cumplimiento de esta ley, y les corresponderá:

A. Vigilar y visitar las fábricas y talleres comprendidos en los artículos anteriores.

B. Atender a las quejas y reclamaciones que se produzcan por infracciones de ley.

C. Corregir con imposición de una multa de 10 a 100 pesetas las infracciones que cometan los dueños o maestros de fá-

127
bricas o talleres.

Corregir, de 100 a 500 pesetas, a los mismos en caso de reincidencia, publicando los nombre de los reincidentes en el diario de la localidad.

D. Remitir anualmente a la municipalidad los tenientes de alcaldes una Memoria sobre los defectos advertidos en el cumplimiento de la ley en el orden social y económico.


22) Ley decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes, regularizando el trabajo de las talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos.

Las Cortes Constituyentes, en uso de su soberanía, decretan y sancionan la siguiente.

LEY

Artículo 1°. Los niños y las niñas menores de 10 años no serán admitidos al trabajo en ninguna fábrica, taller, fundición o mina.

Art. 2°. No excederá de cinco horas cada día, en cualquier estación del año, el trabajo de los niños menores de 13, ni el de las niñas menores de 14.
Art. 3º. Tampoco excederá de ocho horas el trabajo de los jóvenes de 13 a 15 años, ni el de las jóvenes de 14 a 17.

Art. 4º. No trabajará noche los jóvenes menores de 15 años, ni las jóvenes menores de 17, en los establecimientos en que se empleen motores hidráulicos o de vapor. Para los efectos de esta ley, la noche empieza a contarse desde las ocho y media.

Art. 5º. Los establecimientos de que habla el artículo 1º, situados a más de cuatro kilómetros de lugar poblado, y en los cuales se hallen trabajando permanentemente más de 80 obreros y obreras mayores de 17 años, tendrán obligación de sostener un establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán indemnizados por el Estado. En él pueden ingresar los trabajadores adultos y sus hijos menores de 9 años.

Es obligatoria la asistencia a esta escuela durante tres horas por lo menos para todos los niños comprendidos entre los 9 y los 13 años y para todas las niñas de 9 a 14.

Art. 6º. También están obligados estos establecimientos a tener un botiquín y a celebrar contratos de asistencia con un médico-cirujano, cuyo punto de residencia no exceda de diez kilómetros, para atender a los accidentes desgraciados que por efecto del trabajo puedan ocurrir.
Art. 7º. La falta de cumplimiento a cualquiera de las disposiciones anteriores serán castigadas con una multa de 125 a 1,250 pesetas.

Art. 8º. Jurados mixtos de obreros, fabricantes, maestros de escuela y médicos, bajo la presidencia del juez municipal, cuidarán de la observancia de esta ley y de su reglamento, en la forma que en él se determine, sin perjuicio de la inspección que a las autoridades y ministerio fiscal compete en nombre del Estado.

Art. 9º. Promulgada esta ley, no se construirá ninguno de los establecimientos de que habla el art. 1º, sin que los planes se hayan previamente sometido al examen de un jurado mixto, y hayan obtenido la aprobación de éste, respecto solo a las precauciones indispensables de higiene y seguridad de los obreros.

Art. 10. En todos los establecimientos mencionados en el art. 1º se fijará la presente ley y los reglamentos que de ella se deriven.

Art. 11. El Ministro de Fomento queda encargado de la ejecución de la presente ley.

Artículo transitorio. Interin se establecen los jurados mismos, corresponde a los jueces municipales la inmediata inspección de los establecimientos industriales objeto de esta ley.
Lo tendrá entendido el Poder ejecutivo para su impresión, publicación y cumplimiento.


23. a) Proposición de ley, del Sr. Alasina, estableciendo — un juzgado de producción entre fabricantes y jornaleros.

A LAS CORTES

Son conocidas de todos las que siguen atentamente los sucesos de Europa las luchas que a cada paso ocurren entre el capital y el trabajo. Toman generalmente la forma de huelgas; y el paso que retardan la marcha de la producción y el desarrollo de la riqueza, agradan la triste condición de los mismos jornaleros que apelan a ese medio como un arma de guerra. Si la huelga se prolonga, no es además razon que degenera en desorden y produzca, por lo menos, sobre todo en los grandes centros fabriles, bonda y general alarma.

Hemos creído, no sólo necesario, sino también urgente, tener coto a tan grave mal; y nos hemos fijado en una constitución que existe ya desde mucho tiempo en otros países, y si no ha dado aún todos los resultados que eran de esperar que ha sido, a nuestro modo de ver, porque no ha estado nunca —
asentada sobre sus naturales bases. Nos referimos a los jurados mixtos de jornaleros y maestros que funcionan en Francia desde 1866, aunque no siempre con la organización que hoy tienen. Se trató de establecerlos en España ya el año 1855; y se les había establecido, a no dudarlo, si no se hubiese involucrado la cuestión con temas de no menos grave trascendencia, y no hubiese venido la reacción de 1856 a detener los nobles propósitos de las Cortes Constituyentes de aquella época.

No todas las bases del proyecto de ley que entonces se presentó nos han parecido con todo admisibles. Dada la organización democrática que hoy va tomando el país, y extendida la naturaleza y el fin de la institución misma, hemos creído indispensable fundar los jurados mixtos sobre la base de la elección por sufragio universal y la de igualdad más perfecta. Sólo así podrán esos jurados, tal es nuestra opinión, tener para todos los que hayan de someterse a sus fallos una autoridad irrecusable.

Hemos considerado, por otra parte, de todo punto necesario extender las atribuciones de esos jurados a todas las diferencias que puedan surgir entre jornaleros y maestros o fabricantes sobre las múltiples y variadas condiciones de la prestación o arrendamiento de obras y de servicios. De otro modo no llenarían los jurados su principal fin, que es el de evitar las huelgas y sustituir las vías
de derecho a las de hecho.

Partiendo de estas bases, tenemos el honor de someter a las Cortes lo siguiente

PROPOSICION DE LEY

Capítulo I

De los jurados.

Art. 1º. Se establecerá un jurado de prohombres en toda industria donde lo soliciten 10 jornaleros y dos maestros o fabricantes.

Art. 2º. El alcalde de la localidad, al recibir estas solicitudes, convocará separadamente, para dentro de un término que no exceda de 15 días, a los jornaleros y a los maestros o fabricantes de aquella industria que sean mayores de edad con arreglo a las leyes.

Art. 3º. Los jornaleros por su parte, y los maestros o fabricantes por la suya, elegirán a pluralidad de votos, bajo la presidencia del alcalde, 12 individuos de su respectiva clase, que sean también mayores de edad y que sepan leer y escribir.

Art. 4º. Ocho días después se reunirán de nuevo los jornaleros, bajo la misma presidencia, y elegirán de entre los candidatos designados por los fabricantes o maestros suplentes tres jurados y tres suplentes. Los astros o fabricantes a su vez, se reunirán aquel mismo día o el siguientes.
te y designarán otros tantos jurados y suplentes de entre los candidatos designados por los jornaleros.

Art. 5º. Verificada esta doble elección, convocará el alcalde a los jurados elegidos y les dará posesión de su cargo. Los jurados procederán desde luego a la elección de dos presidentes, uno de cada clase, que presidirán las sesiones del tribunal alternativamente. El voto del presidente será decisivo en caso de empate.

Art. 8º. Estos jurados se renovarán todos los años por terceras partes. La suerte designará en los dos primeros años los jurados salientes.

Capítulo II

De las atribuciones de los jurados

Art. 7º. Los jurados conocerán de todas las cuestiones civiles relativas a la prestación de servicios o arrendamiento de obras que surjan entre jornaleros o fabricantes.

Art. 8º Decidirán sin apelación:

1º De las que versen sobre aumento o reducción de jornales, salarios y precio de los servicios o destajo.

2º De las que versen sobre la forma y épocas de pago de los servicios u obras.

3º De las que versen sobre modificaciones en las tarifas aceptadas por los jornaleros y los maestros o fabricantes.
49. De las que versen sobre pago del precio de los servicios o cobro de éstos, siempre que su cuantía no exceda para cada uno de los demandantes de 200 pesetas.

Art. 99. De su fallo en todas las demás cuestiones cabrá apelación para ante la Audiencia del territorio, —que procederá como en la segunda instancia de los juicios ejecutivos.

Art. 10. En la primera instancia todos los procedimientos serán gratuitos, como gratuito es el cargo de juzgado.

Art. 11. Podrán además los jurados imponer multas que no excedan de 100 pesetas:

1º. A los jornaleros o maestros o fabricantes que infrinjan sus fallos.

2º. A aquellos de sus mismos compañeros que, habiendo aceptado el cargo, dejaren de llenar las funciones inherentes a su ejercicio.

El producto de unas y otras multas estará destinado —a cubrir los gastos de los jurados que las hayan impuesto.

Artículo Transitorio

Un reglamento general determinará la manera de ser —y de proceder de estos jurados. En tanto que no sea publicado, procederán los jurados con arreglo al art. 331 de la
ley de Enjuiciamiento civil, al bien sin necesidad de dictar su sentencia ante escribano.

Palacio de las Córtes 18 de Abril de 1870. Pablo Alcina.— F. Pi y Margall.— Juan Tutau.— Pedro Mata.— Antonio Róxas Fontanals.— Santiago Soler.— Mariano Rius.

23, b) Proposición de ley del Sr. Cisa y Cisa, sobre establecimiento de Jurados mixtos de fabricantes y obreros.

AL CONGRESO

Ya por las Córtes Constituyentes fue tomada en consideración una proposición de ley, igual a la que tengo la honra de presentar al Congreso, a fin de que con la mayor premura se le dé seña elevada a ley del Estado. Y lo hace así el Diputado que suscribe, cuando no duda que el Congreso en su ilustración y recto criterio reconocerá que por ella podrá evitarse esa seria y lamentable perturbación que aílla los distritos manufactureros, ocasionando serios conflictos, desgracias sin cuento, y hasta crímenes que podrán evitarse con la instalación del Jurado que se pide en la presente proposición de ley, y delegación de poderes al alcalde presidente para que tenga la fuerza suficiente a ejecutar sus acuerdos.

La sociedad en el orden civil se rige por medio de leyes que tienen por objeto cortar las desasías de los —
unos en contra de los otros, y hasta en el orden moral —
tiene sus leyes que tienden a restringir ciertas accio-
nes que podrían ser repugnantes a los demás.

No se ha pensado todavía en legislar sobre la cues-
tión social, que aparte de la política, es la que ofrece
más campo a las diversas controversias que quizás están —
llamadas en su día a modificar el actual orden de cosas.

El Diputado que suscribe no pretende prejuzgar cues-
tión alguna, y solo se ciñe a evitar por medio de lo pre-
rente proposición de ley las demasías de los unos y las —
exigencias de los otros, los continuados pasos y la per-
turbación que existe hoy en varios puntos de nuestras po-
blaciones importantes; y en tal concepto, tiene la honra —
de suplicar al Congreso se dé declarará urgente, para
que luego de ser tomada en consideración, El Poder Ejecu-
tivo la eleve a ley del Estado; y no duda que, reconocida
su importancia, se digne aprobar la siguiente

PROPOSICION DE LEY

Art. 1°. Se establecerá desde luego de ser aprobada
y sancionada esta proposición de ley, en cada localidad —
que pase de 150 vecinos y que existan talleres industriales
un Jurado mixto de fabricantes y obreros, del cual se
rá presidente el alcalde de la localidad.

Art. 2°. Dicho Jurado se reunirá tantas cuantas ve—
ces sea monaster, en la casa capitular del pueblo, y resolverse por mayoría de votos toda cuestión que se suscite entre fabricantes y obreros, y sus acuerdos los hará efectivos el presidente del mismo, al cual se delega la autoridad necesaria para dicho objeto.

Palacio del Congreso 5 de Noviembre de 1872. — Pedro Cisa y Cisa.

23, c) Proyecto de ley, presentado por el Sr. Ministro de Fomento, creando jurados mixtos para dirimir las diferencias que puedan surgir entre propietarios y obreros.

A LAS CORTES

La profunda crisis que la sociedad atraviesa en los presentes tiempos, ha determinado graves perturbaciones — en el orden económic o, poniendo en pugna los distintos elementos y fuerzas que a la producción de la riqueza contribuyen, y dando lugar a que se estimen como irreconciliables enemigos los que, ora con el esfuerzo de su brazo, ora con el de su inteligencia, ora, en fin, mediante el empleo de un capital que representa la acumulación de anterior trabajo, concurren de consuno a crear la riqueza transformando a impulsos de la industria los productos naturales, convirtiendo en dójil instrumento del espíritu la fuerza ciega de la naturaleza y lanzando con vigoroso impulso a la sociedad por los anchos derroteros del progreso, debido en nuestro siglo, principalmente, a los adelan-
también maravillosas de la industria.

Accidentes históricos, errores de escuela, preocupaciones políticas, y perturbaciones, causas de varia índole, en suma, han podido, acaso, acrecentar los odios entre el capital y el trabajo; han envenenado las pasiones y han traído, como es lógico es ineludible resultado, collisiones lamentables y dolorosas luchas, tan funestas para el bienestar de las clases trabajadoras como dañosas —para el cumplimiento del fin económico, no menos esencial que los restantes fines que en unión con él constituyen —el total destino asignado a la especie humana por la ley misma de su naturaleza.

No es maravilla, por tanto, que los pensadores como los políticos hayan procurado poner eficaz remedio a mal tan grave, apurando para ello todos los recursos posibles y apelando, lo mismo a los sanos consejos de la razón práctica, que a las peligrosas sugestiones de la utopía. Diversas y aun contradictorias han sido las soluciones que más tan temido problema han propuesto las diferentes escuelas; no pocas han pecado de excesivo exclusivismo, cayendo con frecuencia, ora en un anárquico individualismo que rompe todo lazo social y confía los humanos destinos a las sugestiones, no siempre acertadas ni justas, del interés individual, ora en un socialismo absorvente, que suprimiendo uno de los términos del problema, resucita en —

129
nuestros tiempos la guerra de clases a sacrifica los beneficios de la libertad y las necesidades más íntimas de la vida moral, en aras de los apetitos materiales y de las más desenfrenadas pasiones. Estraviado el pensamiento por tales caminos, no ha podido ser la concordia el punto de estos esfuerzos, ni la resolución racional de las crisis sociales el resultado de estos trabajos.

A que males semejantes no hallen fácil remedio, contribuye, a no dudarlo, la carencia de instituciones dotadas de fuerza y autoridad bastantes para mediar entre capitalistas y obreros y dirimir las cuestiones que entre ellos se suscitan, dando de esta suerte la paz y armonía necesarias a las que, contra todo pensamiento de odio y toda sugestión pasionada, deben considerarse como colaboradores y copartícipes en una obra común de que unos y otras son indispensables factores, y no como irresolubles enemigos. Este aspecto de la cuestión ha sido reconocido por los políticos, a que se debe la idea de los juredos mistos, institución que ha de ser paliativo eficaz, ya que no decisivo remedio, de las perturbaciones que la lucha entre capital y trabajo engendra, y que será además el germen de la fundamental institución que rija en su día el orden jurídico económico, a la manera que el Estado gobierna el orden jurídico, la Universidad el orden científico, y la Iglesia el orden religioso.
Respondiendo a esta necesidad de los tiempos, y cediendo de buen grado a los clamores de la opinión unánime, que demanda reformas sociales que, sin destruir las bases en que el edificio social descansa, ni lastimar derechos adquiridos, ni quitar las vestas violentamente respectables tradiciones, faciliten a las clases trabajadoras los medios necesarios para mejorar su condición y elevar el nivel de su bienestar moral y material, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Poder ejecutivo, tiene el honor de presentar a las Cortes Constituyentes el adjunto.

PROYECTO DE LEY.

Art. 1º. Para definir equitativamente y amistosamente las diferencias que puedan surgir entre propietarios, empresarios o fabricantes, y colonos, braceros u obreros, se instaurarán jurados mixtos en todas las localidades donde la Diputación provincial respectiva lo acuerde, bien espontáneamente, bien a instancia de cualquiera interesado. La designación en este último caso habrá de ser fundada y se insertará en los periódicos oficiales.

Art. 2º. El jurado se instaurará con arreglo a las siguientes bases:

1º. Habrá un jurado por cada industria.
2º. Serán electores para constituirlo todos los que...
en la localidad toman parte en la industria respectiva, — en concepto de capitalistas u obreros y están en el goce de sus derechos civiles y políticos.

38. Son elegibles todos los ciudadanos, cuales-quiera que sean su profesión y vecindad, que estén también — en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

48. Los electores se dividirán en dos grupos: uno de obreros y otro de capitalistas.

58. Los electores de cada grupo elegirán cuatro juzgados: dos, pertenecientes a la condición de capitalistas, y dos a la de obreros.

68. La elección será directa y el voto público.

78. El jurado elegido funcionará durante un año, re

novándose por mitad en cada uno.

88. Los ocho elegidos para constituir el jurado, —

nombrarán de fuera de su seno un presidente, si no logra-

sen ponerse de acuerdo, lo elegirá el ayuntamiento de la

localidad.

98. El ayuntamiento, también por sí o por medio de

sus alcaldes o concejales, preparará las elecciones, las pre

sidirá y proclamará a los candidatos.

108. Si la elección y constitución del jurado se fal-

tase a alguna de las bases expresadas, podrá entablarla —

por cualquiera de los interesados o por el ministerio pú-

blico recurso de nulidad, que sustanciará y decidirá el —
tribunal colegiado del partido o del territorio.

Art. 3º. El jurado mixto es el único tribunal competente para resolver las cuestiones civiles que ocurran entre capitalistas y obreros con motivo del cumplimiento de los contratos que hayan celebrado libremente entre sí, siendo en estos asuntos su fallo inapelable y ejecutivo.

Art. 4º. Todos los capitalistas y obreros que hayan solicitado su inclusión en las listas electorales para la formación del jurado, quedan obligados a someter al mismo todas cuantas diferencias ocurran entre ellos acerca del salario, horas de trabajo, forma de esta, etc., y acatar lo que el jurado acuerde.

Art. 5º. Así como los capitalistas como los obreros que no hayan intervenido en la formación del jurado, podrán, sin embargo, solicitar la intervención de éste en su caso, entendiéndose que cuando lo verifiquen se consideran sometidos a su jurisdicción, y por lo tanto obligados a aceptar y cumplir los acuerdos del jurado.

Art. 6º. Cada jurado nombrará dos individuos de su seno, para que asistan en su representación al Congreso que se ha de reunir en Madrid el día 15 de octubre de cada año, con el fin de dar cuenta del resultado obtenido durante el año por esta institución, y de proponer cuanto dichos representantes estimen conducente al desarrollo y organización de la industria.

Madrid 14 de agosto de 1873. El Ministro de Fomento, José Fernando González.
ANEXO III

1) Moción de censura al Gobierno de Losant (22 de Mayo de 1871)

Pedimos al Congreso se sirva declarar y hacer presente al Gobierno, a los efectos oportunos, que ha visto con profundo disgusto la conducta del señor Gobernador de Barcelona, violando los artículos constitucionales que autorizan a los ciudadanos para reunirse y asociarse.


Señores Diputados, el clamor en Barcelona contra esta autoridad es continuo y incesante. Había allí un gobernador, al Sr. Corcuera, que autorizó bajo su firma las reuniones en todos los ámbitos de Barcelona; pero fué luego el Sr. D. Bernardo Iglesias, y dijo que como aquellas reuniones no habían sido autorizadas por él, las disolvía. Hubo más: varios ciudadanos se presentaron ante este gobernador dándole aviso de que iban a proceder a una reunión, señalando en el calico que le dirigieron el local y la hora de la reunión. El gobernador dio el permiso, pero cuando encontró reunidos a los ciudadanos, mandó disolver la reunión bajo el pretexto de que los que habían ido a pedirle licencia eran tres y otorgó su consentimiento en la creencia de que solo ellos serían los que habían de reunirse.

Este gobernador está usando además de un derecho que nadie ha pedido concederle, ni menos reconocerle, el de prescripción; derecho que ha ejercido contra tres franceses establecidos en Barcelona hace bastantes años, fundándose para ello en rumores destituidos de todo fundamento, de que trataban de crear una asociación internacional que tenía por objeto pervertir por completo la sociedad. Estos tres ciudadanos franceses han sido presos, conducidos a las cárcel, y por último, extranjados del país. ¿Puede el Congreso tolerar semejantes atentados…
Señores Diputados, el general Gaminde lo puede alí todo; el general Gaminde con el batallón que tiene a sueldo al mando de un apóstata del partido republicano, está comiendo actos incalificables...

En las últimas elecciones, este batallón se ocupó en hacer que en un distrito se ganaran las elecciones; este batallón se constituyó por secciones en varios colegios, y en uno que está en la calle más alta de San Pedro, 30 de sus individuos sacaron sus puñales, embistieron a los republicanos y hirieron a algunos de ellos. Este batallón consiguió su objetivo ganando la elección en aquel distrito; pero cuando el candidato elegido supo que había obtenido mayoría, no quiso presentar unas actas que estaban teñidas en sangre, y no ha querido venir al Congreso. Yo debo hacerle esa justicia a pesar de que es monárquico...

En Barcelona, Sres. Diputados, en todas épocas hasta en las más ominosas de González Brabo y de Narváez, siempre, absolutamente siempre, en una o en otra forma, hemos usado el derecho de reunión y de asociación. ¿Qué sucederá si ahora les cohibís esos derechos? ¿Qué sucederá en tantos tenores como se abrigan respecto de las resoluciones que toman las sociedades obreras, si les impedia discutir con libertad y oir todas las opiniones? ¿Qué sucederá? Que ciertas opiniones se harán lugar en los subterráneos, y no tendrán el correctivo de la libre discusión, y de ese modo, si algún día vienen tormentas, la sangre que se vierta caerá gota a gota sobre vosotros. Y en Barcelona, señores, se ha querido hacer el tó con la existencia de la asociación Internacional, que no parece sino que quiere comerse a los niños y otras cosas por el estilo; aquí se elena mucho contra el socialismo y el
comunismo, y se dice que con eso viene el cataclismo, la ban
carrota, el desquiciamiento; y, Sres. Diputados, si allí los
obreros tenemos ideas erróneas respecto de la organización
social, nosotros no excluimos a nadie, sino que llamamos a
los hombres de ciencia para que vengan a ilustrarnos; y si
teneis fe, si tenéis fuerza en vuestras teorías, allí no
venceréis, porque no les guía la injusticia a los obreros de
Barcelona, sino por el contrario les anima un grande espiri-
tu de justicia. Todo eso que se dice de robos y de incendios,
y de cataclismos que pueden venir, no necesita ser refuta-
ción de mi parte, porque los hechos son más elocuentes que lo
que yo pudiera decir. Con efecto, allí se han sucedido divers-
as revoluciones, y allí nunca se ha robado en esas ocasiones
ni por valor de un céntimo. Y es más; allí quienes han defen-
dido la propiedad, la seguridad individual y la familia, han
sido los obreros que no tenían pan, porque se habían cerrado
los talleres en que trabajaban; sin embargo, a pesar de eso,
a pesar de que no tenían con qué alimentarse, estaban con el
fusil al hombro guardando la propiedad ajena. Yo pregunto,se-
ñores, si después de todo esto no es hacerles un insulto a
esos obreros al decir que quieren la destrucción de la fami-
lia, de la propiedad y de la sociedad. Podremos tener ideas
erróneas; pero que sea una verdad el derecho de reunión sin
inguna clase de hipocresía, y discutiremos libremente, como
días atrás lo hicieron en San Isidro, á donde concurrem á un
economista distinguido que se sienta en estos escaños; él po-
drá decir y atestiguar si había ó no tolerancia en las reu-
niones de los obreros. Había, señores, la tolerancia que mu-
chas veces en este Congreso no existe...
Respuesta del Ministro de la Gobernación (Segesta).

Barcelona 22. - 2, 10. - Madrid 22 Mayo. - 2, 21.-
Gobernador, Ministro Gobernación.- Tengo la satisfacción de saludar a V.E. desde la gran fábrica de los Sres. Batilo hermanos, que hoy a vuelto a abrirse al trabajo después de tres meses de paralización. Este fausto acontecimiento, tan anhelado por la culta Barcelona, es de la más ventajosa transcendencia para el crédito industrial de España, para el bienestar de las clases obreras, y para el robustecimiento del orden público.- El nuevo director de la fábrica envía a V.E., a nombre de sus dependencias, la expresión de su afecto y -respeto.- El alcalde primero y yo saludamos a V.E. con el mayor cariño.

 Esto sería la más cumplida contestación al violento discurso con que el Sr. Lostau quiso de distraer al Congreso, calumniando, permitame S.E. que se lo diga, a las autoridades de Barcelona...

Después de dicho esto, ¿cómo yo defender a las autoridades de Barcelona? Yo creo que rebajaría á aquellas autoridades si las defendiera de los ataques inconvenientes que el Sr. Lostau se ha servido aquí dirigirles...

Señores, todo lo que ha hecho el gobernador civil de Barcelona respecto al derecho de reunión es haber suspendido y castigado reuniones hostiles, con carácter alarmante, que tenían por objeto impedir a honrados trabajadores que asistieran a los talleres para atender a sus familias...

Las autoridades civiles de Barcelona han disuelto, ó mejor dicho, no han permitido asociaciones que tenían por objeto promover directamente las huelgas seduciendo a algunos obreros menos sensatos ó más dados a la holganza por medio de
dádivas, y amenazando a otros...

S. S. no debe amenazar constantemente al Gobierno con eso de que los obreros de Cataluña, si el Gobierno se españa en oprimirlos, que se levantarán en armas, porque han dado siempre pruebas de levantarse; y yo le puedo decir a S. S. que muchos de los que se han levantado en Barcelona no lo han hecho nunca cuando había algún Gobierno en España de los que se llamaban liberales, sino al contrario, cuando mandaban los Gobiernos liberales: es decir, que se han sublevado siempre esos obreros contra la libertad, pero casi nunca contra la reacción...

Aunque yo sé bien que la Internacional, como S. S. ha dicho, no se comió los niños crudos, ni mucho menos; bueno es que yo diga algo de la Internacional a propósito de los tres franceses cuya expulsión lamenta tanto S. S. Ya ve su señora que al hablar de la Internacional, no me asusta, como no me ha asustado acir a S. S. que era individuo de la Internacional; pero bueno es que sepamos lo que pretende la Internacional aquí, aunque sea muy ligeramente, porque no es esta la ocasión de entrar en una discusión de la Internacional; ya llegarán su día, y entonces veremos qué es lo que debe hacerse con la Internacional.

Señores, hace algún tiempo que hay en España ciertas gentes de sociedades que tienen por objeto el trabajo constante de la clase obrero en aquellas de nuestras provincias en que más desarrollada está la industria; pero de algún tiempo a esta parte estos agentes han recibido un poderoso auxilio, un auxilio mayor que todos los que antes tenían. Mientras han estado solos y aislados en sus trabajos, estos agentes, que S. S. debe conocer bien en la parte en que resi-
side, han adelantado poco o nada en sus trabajos; pero ayuda-
dos ya por unos cuantos emisarios, representantes de esa aso-
ciación a que S.S. pertenece, la Internacional, que han atravesado las fronteras y que se han repartido por todo el terri-
torio español, ya van adelantando algo más en sus trabajos,
y estos emisarios que pasan ya de 300, según las noticias —
que el Gobierno tiene por las autoridades del interior y por
sus representantes en el exterior, esos emisarios que visitan
todos los disfrazos, que usan de todos los trajes, menos de
aquel que les corresponde por su posición y por su estado;
que usan de nombres desconocidos, menos de aquel que les es
propio; que se dedican a todos los trabajos, que contribuyen
todas las industrias, menos a aquellas que son suyas propias
y peculiares, esos emisarios han empezado ya a trabajar en —
España.

Su trabajo consiste en suscitar en las masas obrer-
as elementos de desorden, en promover huer
gas, en seducir y
corrromper con dádivas a aquellos obreros menos expertos, o —
más dados, o más impuestos a la holganza; en amenazar direc-
ta o indirectamente a aquellos otros trabajadores honrados que
no quieren buscar su sustento más que por el camino de la vir-
tud y del trabajo, y en trabajar constantemente con esa clase
obrera ofreciéndola un proveer de bienvenida imposible de
realizar, excitando así los sentimientos de esa clase obrera,
preparándola para el desorden y procurando de este modo la —
perturbación social. Este mal va ya apareciendo en muchos pun-
tos de España; pero donde la enfermedad se ha presentado con
alguna más gravedad es en las provincias catalanas, y muy es-
pecialmente en Barcelona.
Concluyo, para ser breve, diciendo al Sr. Lostau que puesto que S.S. tiene influencia con los obreros, porque según mis noticias S.S. es también un obrero, y muy diestro y muy hábil por cierto, debo aprovechar su influencia mejor de lo que la aprovecha actualmente: yo conozco que S.S. lo hará con buena intención, pero créame S.S.: la suerte del obrero en España y en el extranjero no está en la asociación la Internacional; otras asociaciones hay a las cuales podría S.S. contribuir con sus influencias y con su talento; otras asociaciones hay que podrían dar más frutos para el pobre trabajador, cuya suerte nos interesa a todos, cuya suerte interesa a la Patria: porque en la tranquilidad, en el sueño y en el bienestar de los trabajadores es trian también la tranquilidad, el asueto y el bienestar del país: aunque no fuera por un interés de humanidad, aunque fuera por el interés que todo hombre honrado debe tener en mejorar la suerte de sus prójimos, por un interés de conveniencia, por un interés de egoísmo, estamos todos interesados en mejorar la suerte de la clase obrera. Pues bien, Sr. Lostau; créame S.S., no es por ahí por donde ha de venir la felicidad del obrero de España, no es obedeciendo a las sugestiones de esos extranjeros, de origen desconocido: que vienen aquí con un objeto desconocido y con miras que el Sr. Lostau mismo ignora, como ha de venir la felicidad del obrero; otro rumbo muy distinto hay que tomar si se quiere llegar a este fin: tome S.S. ese rumbo, opúnsatelo en cuanto le sea posible al pensamiento de la Internacional, y no se hará S.S. instrumento, como otros muchos pobres obreros, de un pensamiento que, lejos de ser un pensamiento generoso, noble y grande para el
obrero, es un pensamiento que tiende a hacer al obrero esclavo, que tiende a hacerle instrumento de fines que nada tienen que ver con la suerte del trabajo ni con la suerte del obrero...

2) Pregunta de Jové y Hevia (22 de Mayo 1871)

Como una satisfacción al mundo civilizado, desearía que el Sr. Ministro de la Gobernación declarase, si en ello — no hay inconveniente para el servicio público, las determinaciones que el Gobierno piensa tomar con los autores de los tristísimos sucesos que han tenido lugar últimamente en París, en el caso de que se refugien en territorio español; y desde luego doy las gracias a S.S. si como creo me da una contestación, a fin de no tener que pedir después la palabra con este objeto.....

RESPUESTA DE SAGASTA

Los criminales sucesos ocurridos en París fuera de la política, y sus autores no deben considerarse como hombres políticos; los que tratan de buscar en España un refugio como emigrados políticos, no lo conseguirán; que España, resuelta, como está, a cobijar bajo su manto a todos aquellos que por opiniones o luchas políticas vengan a buscar asilo a este país, está también decidida a no admitir en su seno a los que son verdaderos criminales. El Gobierno español, pues, está dispuesto a considerar como criminales, no como hombres políticos, a todos los que hayan tomado parte en los execrables atentados cometidos en París, y a entregarlos a las autoridades francesas tan pronto como soliciten su extradición con arreglo a los tratados internacionales.
Pregunta de Castelar (29 mayo 1871)

Señores Diputados, voy a dirigir una pregunta al Sr. Ministro de Estado, y me recomiendo a la benevolencia del Sr. Presidente y de la Cámara, a fin de que me permitan fundamentar esta pregunta. Todos sabemos y todos deplore las desgracias de una gran e illustre nación vecina, y nadie puede depolarlas tanto como nosotros, que tan castigados hemos sido por nuestras discordias interiores, por el azote de la guerra civil y extranjera. En estas luchas hay desgraciados, y estos desgraciados se acogen al pabellón de las naciones vecinas y amigas; se acogen a la sombra de la hospitalidad internacional. Yo no he creído ni por un momento que Ministros venidos de la emigración y del destierro a ocupar ese puesto, hayan de olvidar lo que deben al refugio obtenido en naciones amigas, ni la análoga suerte que hoy sufren otros tenidos, otros desgraciados.

Pero ciertas palabras que me han parecido poco meditadas, y ciertos hechos que se atribuyen a un consul nuestro en el extranjero, obigamese a preguntar al señor Ministro de Estado si está dispuesto a ofrecer el hospitalario suelo de la Nación española a los emigrados políticos; y en cuanto a los criminales comunes que pudieran en nuestro suelo refugiarse, si está dispuesto a que se cumplan con ellos las leyes y los trámites que los tratados internacionales tienen establecidos para la extradición...
La pregunta del Sr. Castelar, Sres. Diputados, lleva en sí misma contenida la respuesta del Gobierno, - No obstante, yo le agradecero mucho a S.S. que me haya ofrecido esta ocasión de expresar aquí de la manera más viva y nérica el sentimiento de indignación con que el Gobierno español ha sabido los crímenes, los horrores - crímenes que han manchado las calles de París, manchando la causa que sostenía los desdichados que de ellos se han hecho autores. Yo creo, Sres. Diputados, que no interpreto con estas palabras solamente la opinión del Gobierno español, sino que creo interpretar fielmente la opinión de la mayoría, la opinión de la Cámara, la opinión del país......

Y dicho esto señores, ¿que ha de agregar para dar respuesta a las preguntas que ha tenido a bien dirigirme el Sr. Castelar?......

El Gobierno atenderá a las reclamaciones del Gobierno francés debidamente hechas, puesto que para esto el Gobierno español tiene su ley, que es el tratado, y al tratado vigente se atenderá;........

3) Proposición de Pefueltas (30 de mayo de 1871)

Los Diputados que suscriben tienen la honra de someter a la aprobación del Congreso la proposición siguiente:

El Congreso ha oído con satisfacción las energicas propuestas del Gobierno contra los horribles atentados cometidos por la Comuna de París, y se asocia al -
sentimiento de indignación que despierta en todas las conciencias la conducta de aquellos criminales que han violado las leyes de la humanidad.


4) Extracto de un número de "La Federación", citado por Sagasta (3 de Junio de 1871).

Desde que la civilización, en su creciente progreso, proclamó la soberanía de la razón humana, ¡¡¡YA —NO HAY DOGMAS!!!.

Las instituciones, llamadas a juicio como autómatas del gran crimen social, perecerán si no comparecen ante el tribunal de la razón a demostrar la justicia de sus fundamentos.

La Asociación Internacional de los trabajadores, que aspira a constituir un nuevo orden económico sobre la base de la igualdad, NIEGA la justicia de aquellas instituciones que mantienen el monopolio en la explotación de las fuerzas productoras. Contra la Internacional, los conservadores y su prensa no tienen otras armas que la difamación y la calumnia. Insultar no es convencer. Por lo tanto RETAMOS a la prensa conservadora de todos los partidos a que sostenga en razonada discusión sus principios, probando la justicia del orden social que reina, para lo cual NEGAMOS LA JUSTICIA DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL DE —

— 150 —
LA TIERRA Y DE LOS GRANDES INSTRUMENTOS DEL TRABAJO....

Respuesta de Pascual y Casas

Ningún lazo tengo con La Federación ni con la Internacional, a la que creo se está dando demasiada importancia; pero en mi concepto, lo que haga la Internacional y escriba La Federación, mientras lo haga a la luz del día, no puede ser objeto de censura. ¿Qué resulta en ese párrafo que ha leído el Sr. Ministro de la Gobernación? Que se expresa una idea, la cual puede ser errónea, pero por equivocación que sea, el hecho es que se somete a discusión y se busca adalides que la combatan.

Sí todo se hiciera en esa forma, a todos los problemas sociales se sometieran a la luz de la discusión, no estaríamos como estamos. Acaso tenga ocasión de decir otro día más extensamente mi parecer acerca de este asunto, limitándome por ahora a llamar la atención de la Cámara sobre el hecho de que un Ministro de una Monarquía que se llama democrática, venga a negar la libertad del error.

5) Enmienda de Pascual y Casas de Proyecto de contestación al discurso de la Corona. (6 de junio de 1871)

Pedímos al Congreso se sirva aprobar la siguiente adición al párrafo tercero del dictamen de contestación al discurso de la Corona:

O la revolución de Setiembre carece de todo sentido, o es preciso que el Gobierno, que cree representarla,
se ocupe de mejorar la condición moral y material de — nuestros proletariado, ya estableciendo instituciones que tiendan a lograr fin tan eminentemente justo, ya estableciendo el jurado mixto para rirrimir huelgas, ya creando colonias agrícolas, ya fomentando el establecimiento de asociaciones cooperativas, mientras la filosofía y el derecho resuelvan los árduos problemas sociales que parten del campo de la academia y trascienden a la vida política.

Palacio del Congreso 29 de Mayo de 1871. – Eusebio Pascual y Casas. – Juan Domingo Ocón. – Miguel Morayín. – José Penuelli y Solis. – Luis Blanc. – Víctor Pruneda. – Miguel Molinero.

Discurso en apoyo

Pues ¿de qué se trata aquí, Sres. Diputados? – Se trata de una de las consecuencias, de la más importante de las consecuencias de la revolución de Setiembre, de aquella que yo considero marca de una manera más gráfica su verdadero carácter, toda vez que mediante a ella se ha realizado el paso del cuarto estado, o sea del proletariado, a la vida pública......

Hay una escuela, Sres. Diputados, que inspirándose en propósitos puramente individualistas, que son resultado de ciertas enseñanzas, ha sostenido que los individuos deben hacerlo todo por sí, y que el Gobierno no debe hacer nada.......

Hay otra escuela que cree que no interesa ni en
poco ni en mucho a las clases menesterosas las cuestiones políticas que predica en todas formas y en todos tonos la abstención completa, al apartamiento de las luchas políticas y del estudio de las cuestiones políticas a esas clases.

Yo no pertenezco ni a una ni a otra escuela: yo entiendo que ambos puntos de vista son puntos de vista parciales que no pueden tomarse para resolver con acierto, con completo acierto, las cuestiones gravísimas - que hoy agitan al mundo.

Hay algunos Sres. Diputados que creen que estas cuestiones extensamente indicadas y tratadas en el Parlamento son peligrosas, porque al momento creen ver en ellas lo que se ha dado en llamar socialismo, y motejan de socialista y escarnecen como tal, llamándole enemigo de la sociedad y de las instituciones actuales a todo aquel que - las profesa y las defiende.....

6) Enmienda de Lostau de proyecto de contestación al discurso de la Corona. (12 de junio de 1871)

Los Diputados que suscriben proponen al Congreso la siguiente adición al párrafo cuarto del proyecto de contestación al discurso de la Corona:

"La revolución de Setiembre, al dejar consignados en el Código fundamental los principios democráticos, incompatibles por más de un concepto con el remate dado al edificio revolucionario, ha olvidado garantir debidamente su ejercicio, dejando por consiguiente a las clases obre-
ras, las más numerosas de la sociedad, sujetas como antes al yugo de todos los monopolios e injusticias político-sociales que la han mantenido en penosa servidumbre.

El Congreso, que comprende la necesidad de que la injusticia concluya, no puede menos de expresar su ardiente deseo de ver desaparecer los obstáculos hereditarios, irreflexiblemente proclamados, que encerrando en su naturaleza la permanencia y el privilegio, contribuyen a agravar las injusticias sociales, que son el terrible escucho, que únicamente pueden producir terribles confusiones y tremendas catástrofes, que empañan el bello horizonte del progreso humano.


Discurso en apoyo

Considerad a Cataluña; mirad los grandes centros de producción donde se reúnen los trabajadores; descorred un poco el velo que cubre sus miserias, y lo mismo en Cataluña que en todas partes, veréis en el fondo cosa desconocedora; allí encontraréis confundidos en los talleres niños y niñas de corta edad, que no han recibido instrucción ninguna, que hacen un trabajo superior a sus fuerzas, que respiran una atmósfera corruptora que mina su constitución física, y que a los 20 años están desmadrados como en-
Si se compara su pasado con su presente, encontraremos que es poco lo que se ha cambiado en favor del trabajadores al estado de cosas antiguo; que son pequeñas las ventajas que en favor de esas clases se han obtenido en las diversas revoluciones del mundo moderno. Hoy, cuando parecía que la libertad de discusión y de asociación deben margen a una reforma conveniente, viene el Sr. Ministro de la Gobernación a decirnos que no permitirá que ciertas cosas se discutan. Así, el trabajador está encerrado en un círculo de hierro y la está vedado usar hasta de los mismos derechos garantizados por la Constitución, y de cuyos derechos debe usar y no tiene más remedio que hacerlo, siquiera para oponerse a las continuas invasiones del capital; que apelando a un sistema que le produce muchas veces malísimos resultados, que debe emplearse con mucho talento, con mucho cálculo, con mucha organización, porque de otra manera es un arma que hiere más al trabajador que al fabricante; hablo de huelgas que tanto han alarmado a las clases conservadoras.—Pero aun esta débil arma que le queda al trabajador está —coartada en su uso hasta el punto de no poder de ella hacer uso. Las demás clases tienen libertad para tratar de sus negocios y tomar las disposiciones que asu mayor prosperidad
conduzcan, aunque esas disposiciones puedan producir crisis más o menos grandes; pero el trabajador, aunque ve en la Constitución escritos los derechos de reunión y asociación libres, no puede usarles.

Cuando después de la revolución y gracias al ponteante esfuerzo de todos los pueblos de España, se proclamó la libertad de asociación y reunión en todas partes, los que desconocíamos los resortes de la vida política, los que no conocíamos de la política si no la parte exterior que habíamos aprendido en los periódicos y en algún libro que habíamos leído, robando el tiempo al sueño, adquirimos gran esperanza, tuvimos gran fe en esa revolución, abrigamos gran confianza y casi tuvimos idolatría por los hombres que la habían hecho. Pero hoy en Barcelona, gracias a una autoridad que no quiero calificar, por que sus mismos actos la califican, han desaparecido todas aquellas grandes asociaciones de obreros que habían llegado a fundar un Ateneo en el cual más de 2,000 obreros se instruían por la noche.

Nosotros, señores, sabemos que aislados no podemos hacer nada; que aislados somos vencidos, nuestros esfuerzos están en el número, en la cohesión de este número; por eso nosotros, después de haber combatido algunos puntos que más de cerca nos tocaban y quería distaban de nuestra manera de ser, intentamos fundar una asociación grande que diera es-
ta fuerza, esta cohesión a los obreros de todos los países, porque nosotros concebimos fácilmente que los obreros como las demás clases sociales son solidarias, por más que haya estas líneas divisorias que se llaman fronteras, y que yo condeno, por más que existan todavía, porque las considera un signo de barbarismo en las sociedades modernas: nosotros queremos traspasarlas y federar los oficios de nación a nación, para que sus luchas con el capital no fueran infructuosas.

Yo explicaré al Congreso la manera como son infructuosas estas luchas por el capital, y lo explicaré únicamente para poner a la faz de España toda y del Congreso lo - que significa esta grande asociación tan calumniada por el Sr. Ministro de la Gobernación en España, y por muchos individuos de la mayoría.

No comprendo como podia compaginar el Sr. Ministro de la Gobernación la libertad de reunión, la libertad de asociación con estas palabras tremabundas y furibundas que han producido ya su efecto en Barcelona. (El Sr. Ministro de la Gobernación: Se alegro) S.S. se alegrará; no lo extraño. Yo veo que es consecuente con sus hechos y sus aspiraciones; yo conozco la doctrina de S.S., y veo que es consecuente - con ella; en lo único que S.S. y sus amigos son inconsecuentes es en llamar a democratas sin querer practicar la democracia.
¿Cuando ha sido inconsecuente S.S.? ¿No conserva las tradiciones de su partido, que el año 40 el 43 apababa a los republicanos, y el año 54 al 56 los llevaba a la deportación, y entre ellos al invicto Terradas, que murió en ellas?

Pero no comprendo cómo podrá compaginarla la conducta de S.S. y de sus amigos con otra conducta muy diferente, conducta a la cual debo rendir desde aquí, por más que sea mi adversario político, un tributo de justicia; porque en vez de perseguir a los obreros, en vez de vituperarlos porque discutan aquellas cosas, en vez de eso, el Sr. D. Gabriel Rodríguez, que es a quien me refiero, acudía a las reuniones de los obreros, y allí, al calor de la discusión, desvanecía los errores que en su concepto existían. Y, señores, en esas reuniones habidas en Madrid se ha discutido todo, incluso lo que el Sr. ministro condensa, y a la faz del país ya expuesto allí sus doctrinas la asociación internacional; el Sr. D. Gabriel Rodríguez repitió que ha compa- recido allí, y S.S. podrá atestiguar el espíritu tolerante de las reuniones de los obreros, espíritu tolerante que muchas veces no ha tenido consigo este Congreso. Porque, señores, yo no soy absolueto, yo no digo que solo yo tengo razón; yo digo que nosotros los obreros podremos estar completamente equivocados.
La cuestión social está planteada desde que el mundo existe, desde que existen las sociedades humanas; desde — aquél momento hay dos principios batallando continuamente en el seno de la misma sociedad, el principio o la tendencia comunista (permitásemos llamarlo así, sin querer dar a esta palabra ninguna intención desfavorable que pueda lastimar a los que profesan estas ideas), y el principio de la integridad del individuo, del desarrollo de la libertad individual y de la personalidad humana. Y los progresos que en todos los pueblos han ido realizándose consisten en que ha ido disminuyendo cada vez más la intervención de la comunidad; debilitándose la fuerza del principio comunista — que el Sr. Listau nos presenta ahora a nombre de la Internacional, fundando en él las reformas que creía absolutamente indispensables para el desarrollo y consolidación de los progresos modernos.

¿De dónde se deduce que las clases trabajadoras están hoy en una situación peor que la de las épocas anteriores?

Comparando el estado antiguo y el moderno de las clases trabajadoras, no cabe duda que se han realizado progresos enormes bajo todos los aspectos, ¿Y como no habían de
realizarse con la libertad que se ha conquistado? Pues qué, ¿era tan fácil hace cincuenta años que hubiese obreros como el Sr. Lostau, como el Sr. Alsina y como tantos y tantos —otros que vemos todos los días y en todas partes? ¿Había antes en la clase obrera la instrucción, el espíritu de organización que hoy tiene? ¿Sentía siquiera tan vivamente como hoy los males de que se lamenta? Pues ese mismo sentimiento es una señal indudable de su progreso.

En este folleto se contienen los reglamentos generales de la Internacional, después los reglamentos especiales de la región española (porque ya no existe la Nación española en el lenguaje de los adeptos de la Internacional); y luego los reglamentos de la sección de Madrid, a los cuales consignan su adhesión los individuos que se afilian en ella. Pues bien; en este folleto se leen los párrafos siguientes:

"Programa de aspiración.—Abolición definitiva y completa de clases sociales, refundiendo todas las que existen en una sola de productores libres.

Igualdad económica y social de los individuos de ambos sexos.

Transformación del odioso privilegio de heredar, en derecho general, a fin de que en el porvenir sea el goce
proportional a la producción de cada uno.

Transformación de la propiedad individual de la tierra, de los instrumentos de trabajo, de las máquinas, herramientas, etc., como todo otro capital, en propiedad colectiva de la sociedad entera, a fin de que no puedan ser monopolizados; no pudiéndose ser utilizados en el porvenir, más que por los trabajadores que los han de hacer directamente producir, es decir, por las asociaciones agrícolas e industriales, según lo acordado en los Congresos de obreros Internacionales de Bruselas y Basilea.

Igualdad de derecho a los medios de desarrollo, es decir, de alimentación, de educación y de instrucción a todos los grados de la ciencia de la industria y de las artes para todos los niños de ambos sexos.

Destrucción, por medio de la reducción progresiva - defunciones, de todos los Estados políticos y autoritarios actualmente existentes, reduciéndola cada vez más a simples funciones administrativas de los servicios públicos en sus países respectivos.

Destrucción de la tiranía y del despotismo bajo cualquiera forma que se presente, por lo cual no solo rechazamos toda alianza reaccionaria, sino también toda forma de Estado y toda acción, parezca más o menos evolucionaria, que no
tenga por objeto inmediato y directo el triunfo de la causa de los trabajadores contra el capital.

Destrucción del perjudicial espíritu de nacionalidad, por considerarlo contrario a la unión y a la solidaridad internacional de todos los trabajadores, por lo cual rechazamos toda acción política basada en la preocupación llamada de patriotismo y fundada en la rivalidad de las naciones.

Los medios que emplean, son los siguientes:

"Todo aquello que sin oponerse a los Estatutos generales de la asociación, pueda conducirnos más rápidamente al triunfo de la emancipación económica y social de los trabajadores."

Los medios, pues, lo comprenden todo. Presentanse - partidarios de la libertad municipal en París; de la república federal en otro parte; de los Reyes y de las Monarquías de derecho divino en otras; todo lo que pueda conducir a esa emancipación de las clases trabajadoras aquí no hay excepción ninguna.

"Todo lo que, sin crear nuevos privilegios, ni aún - para nosotros mismos, tienda más o menos rápidamente a la destrucción de los que existen, y que nos condenan a vivir considerados como simples máquinas."

158
Todo lo que más o menos directamente tienda a emancipar el trabajo de la tiranía del capital monopolizado.

Todo lo que tienda a realizar en la práctica el lema de nuestra asociación: No más deberes sin derechos; no más derechos sin deberes.

Intervención de Ibagué. (14 de Junio de 1871).

Ya que el Sr. Rodríguez ha tratado la cuestión en la esperanza de los principios; me será permitido tratarla más prácticamente y como si fuera un obrero, para que los obreros me entiendan. Porque yo soy también un obrero, y el Sr. Lestau está en una equivocación, que es común a todos los internacionalistas; está en la equivocación de creer que no hay más obrero ni más trabajador que el que trabaja materialmente, el que plancha sombreros, el que hace zapatos, elabora telas o funde hierro. Para S.S. y para los de la Internacional no es trabajador el abogado, ni el médico, ni el mecánico, ni el químico, ni el físico, ni el astrónomo; todos estos son farsantes que no hacen más que chupar al sudor del cantero, del zapatero, del tejedor o del fundidor. Tal es la teoría que la asociación a que S.S. pertenece trata de difundir por el mundo; y esa teoría es absurda y no conduciría más que a un cataclismo general.

Ellos que se dicen proletarios; proletarios los que
puedan alquilar edificios para tener grandes reuniones; —proletarios, los que tienen grandes asambleas, y pasan el tiempo en grandes sesiones; proletarios, su círculo, su casino y sus clubes, cosa que estaba vedada hasta hace poco tiempo a las personas bien acomodadas; proletarios, los que vienen aquí y están aquí, y visten como los demás, y —lo pasan como los demás; proletarios, los que pueden tener de vez en cuando el placer de darse vacaciones, y no solo de darselas ellos, sino también pagar las vacaciones que obligan a tomar a los demás; proletarios, los que pueden venir al Congreso, y estar con nosotros y discutir.

Pero el Gobierno entiende que esto solo no es bastan-
te; que ante esta nueva necesidad social, ante este enemi-
go común, que hace que las leyes sean cumplidas con rigor, es necesario al mismo tiempo procurar destruir las causas que puedan haber contribuido a difundir, tan extensamente como se han difundido, esas inseguridades económicas, o no se —como llamar las de la Internacional; es necesario procurar, que además de extirpar el resultado de esas causas por rigo-
res nuevos en las leyes, puesto que se trata de necesidades nuevas sociales, es necesario que el Gobierno procure extir-
par todas esas falsas procurando levantar la moral pública por medio de una educación sana y robusta; por medio de un sistema económico liberal, y por medio de la libertad.
7) **Enmienda de Valentín Gómez al proyecto de contestación al discurso de la Corona (14 de Junio de 1871).**

"Los Diputados que suscriben piden al Congreso que el párrafo quinto del proyecto de contestación al discurso de la Corona sea sustituido con el siguiente:

"La revolución, sacando de quicio a la sociedad española, y rompiendo con sus gloriosas tradiciones, nos llevará al espantable término a que otros deshichados pueblos de Europa han llegado, si el espíritu religioso no vuelve a animar de nuevo nuestras instituciones y nuestras costumbres."

Palacio del Congreso 29 de Mayo de 1871.— Valentín Gómez.— Dametrio Iribar.— Conde Canga Argüelles.— José María de Pereda.— Luis Echevarría.— R. Gamazo.— Crux Schoa".

8) **El Senador D. Pedro pregunta de Gobierno de Ruiz Morilla sus instituciones respecto a la Internacional. (25 de Julio de 1871).**

Pues bien, Sres. Senadores, la práctica de los derechos individuales dentro de la moral universal es conveniente a la sociedad; pero el abuso de los derechos individuales, como se ha pretendido intentar en este país, es sumamente perjudicial, y es muy dado a trastornos de gran magnitud. Me refiero, señores, a la Internacional. Yo creo que
Esa asociación, que esa reunión está fuera de la prescripción de los derechos individuales, y desearía que el Gobierno de S.M. nos diera una declaración concreta relativamente a este punto.

El Ministro de Hacienda (Ruiz Gómez) prefigura el sistema de la Restauración, (25 de Julio de 1871).

Pero lo que este Ministerio representa, según las minuciosísimas explicaciones que ha dado el Sr. Presidente del Consejo, es un deslindar de partido y tendencias, — lo cual es perfectamente constitucional, porque no se concibe el turno constitucional en el poder sin dos partidos; y si con la formación de este Ministerio se ha facilitado que turnen en el poder dos partidos perfectamente constitucionales y dinásticos, el servicio que habrá prestado este Ministerio al país no puede ser más grande.

Por fina empezar el verdadero juego del sistema representativo, que es dentro de la Constitución haya dos partidos que representen la misma cosa pero bajo diferentes formas o apariencias, cual sea de un lado la idea reformista, y del otro la idea conservadora, cooperando ambos a la verdadera práctica del régimen constitucional.
9) El gran debate sobre la Internacional (12 de Octubre a 10 de Noviembre de 1.871)

Primera interpelación de Jové y Hévia (2 de Octubre de 1.871)

Para cumplir con un penoso, urgente, y en mi concepto imprescindible deber, anunciar al Gobierno una interpelación por su culpable tolerancia con la irracional, ilegítima, inmoral y extranjera asociación que se ha dado el mentiroso nombre de Internacional de trabajadores.

Pregunta de Jové y Hévia (7 de Octubre de 1.871)

En virtud de las disposiciones constitucionales que se han leído, ¿está el Gobierno dispuesto a tomar las medidas que de ellas se deduzcan, contra la asociación mal llamada, a mi modo de ver, Internacional de trabajadores? Y muy particularmente, ¿está dispuesto a traerlos aquí la ley en virtud de la cual se debe disolver toda sociedad que atenta contra la seguridad y tranquilidad pública?

Digo esto, aunque creo que dentro de la misma Constitución hay medios de disolverla sin necesidad de esta ley; pero limite la parte principal de mi pregunta, aunque no toda, ¿si piensa o no taer esa ley que la misma Constitución indica?

¿Seguirá el Gobierno en esto la conducta del Sr. Sa-
gaste, hoy nuestro digno Presidente, que según dijo en ocasión solemne, estaba dispuesto, mientras fuera Minis-

F no permitir el establecimiento y propagación de esa asociación, ¿seguirá la conducta del Sr. Ruiz Zurri-

lla mientras fue Presidente de un Gabinete que tuvo, en mi opinión, complacencias con dicha asociación, que ha calificado de culpables?

Respuesta del Ministro de la Gobernación (Candau)

El Gobierno necesita estudiar los antecedentes de esa sociedad y conocerlos a fondo, porque mi parte, yo

yo lo confieso, no he podido formar todavía conocimiento exacto de las bases constitutivas de esa sociedad; y des-

pués que haya hecho ese estudio, podré decir al señor Jo-


vé y Méviva si considero bastantes las leyes que hoy existen para disolver esa sociedad, o si habrá necesidad de

venir con otras leyes para realizarlo.

Segunda interpelación de Jové Méviva

He pedido la palabra nuevamente para anunciar una interpelación al Gobierno sobre este asunto, si dentro de
de breva tiempo no ha tomado las medidas que en mi concepto debe adaptar, puesto que creo que no es lícito a ningún hom-
bre político no tener formada su opinión sobre este punto.

Discurso de Jové Méviva (16 de Octubre de 1.871)
Yo ruego al Gobierno que todas estas medidas en nombre del órden material, del órden moral y del órden filosófico porque no hay más que tres clases de asociaciones generales benéficas, que son la asociación familiar, la asociación nacional y la asociación religiosa; la familiar, que es el gámen de la vida; la nacional, que es su desarrollo, y la religiosa, que es su complemento; todas estas asociaciones son combatidas por esa malhadada asociación internacional...

Hay un dilema plantado entre la propiedad y el comunismo: de cualquier manera que ataque a la propiedad irá en indescendiblemente al comunismo; atacando la propiedad, atacará uno de los principios más fundamentales de la sociedad civil...

No permitiremos penetrar en el santuario de la política y los profanos: es una ley fisiológica que así como el trabajo intelectual solo se hace a expensas de las fuerzas físicas, asú el trabajo material solo se puede hacer a expensas de las fuerzas intelectuales; los que quieran abarcar ambas, no harán más que trabajos medianos; no permitamos a ciertas clases que jueguen con un fuego que pueden incendiárselas, al mismo tiempo que incendian el resto de la sociedad...

Discurso del Ministro de la Gobernación (Candau)
Yo sabía que este debate era preciso que viniera con la solemnidad que se merece, porque acababa de pasar por todas las regiones, ó casi todas las regiones agrícolas de mi país, y veía la excitación que había allí de clase á clase, y veía que esa excitación iba convirtiendo en odio el amor que debe existir entre las unas y las otras, y veía pulular por doquier ese ejem- bre de emisarios que la sociedad Internacional ha enviando á España para privarla del sentido justo y recto, del sentido maternal que siempre han tenido los obreros españoles para con sus patronos y capitalistas...

Despojad á la propiedad de su carácter individual, y decidme qué es lo que queda de la noción que tenemos de la propiedad. O la propiedad es individual, ó no existe propiedad: aquí se condensa la propiedad individu- dual, luego se condensa el derecho de propiedad. Porque esclavo, sres. Diputados: si uno solo ha de ser el propietario de todo, ñónde está el derecho de propiedad? Si el derecho es inherente á la personalidad humana, com- mo lo proclama la escuela radical y liberal, y se arrebata la propiedad para llevarla á la colectividad, ¿qué queda de derecho á la propiedad? Absolutamente nada. Por consiguiente, la asociación Internacional mis-
ga la propiedad,...

No se crea, pues, que al tomar la posición definida, energía, que se propongo tomar frente á frente de esa sociedad, es por satisfacer aspiraciones de esta ó de la otra clase social...

Discurso de Garrido (17 de Octubre de 1.871)

A mí se me figura que lejos de condenar y perseguir á la Internacional, el Gobierno, como Gobierno, tiene el deber de respetar y de proteger todas las asociaciones que formen las españoles en uso de su derecho; que sólo á los tribunales compete perseguir los actos, sea de la asociación como colectividad, ó de alguno de sus individuos, que sean criminales, y que haciéndolo así, el Gobierno hace una obra conservadora; mientras que declarando bose que se declaró aquí ayer, y amenazando con las iras de sus rayos á la Internacional, lo que hará será convertir é una numerosa y respetada clase de ciudadanos, que son hoy pacíficos, que son conservadores, en é el concepto de que ellos no se ocupan en derribar el Gobierno ni en hacer política contraria al Gobierno, sino en organizarse para mejorar si situación dentro de la ley; hará de todos estos ciudadanos, como digo unos revolucionarios terribles...

Discurso de Castalar. (13 de Octubre de 1.871)

Hay asociaciones, y no pueden ser prohibidas: que su
derecho constitucional es tan sagrado como el derecho del Rey a reinar. Pero con motivo del ejercicio de un derecho pueden cometerse crímenes o delitos. El procedimiento para castigarlos, claro está en el Código fundamental. ¿Faltan los individuos de una asociación? Pues se castiga a los individuos y se deja en paz a la colectividad. ¿Faltan por los medios que la asociación les da? Pues el único derecho legal de la autoridad política y administrativa es suspender la asociación y entregarla a los tribunales inmediatamente. Ellos deciden del tuyo y el mío, y ellos decidirán entre el poder y la libertad, entre el Gobierno y las asociaciones. ¿Son estas inmorales, proponiéndose cometer un hecho ó una serie de hechos pensados? Pues que las persiga el ministerio fiscal. ¿Son tan poderosas que con ellas no puede coexistir el Estado? Pues se traerá una ley para abolirlas. Tales son los procedimientos legales. Pero lo que no tiene nombre, lo que no puede tener explicación, Sres. Diputados, es lo largo y lo inútil de este debate, en que el Gobierno pide y obtiene por todo resultado una especie de información parlamentaria, extraña, anti-legal, sin formalidad, sin madura, impropia de nuestros deberes y de los suyos; una información que lo aclarece para proceder contra una sociedad que le atarra. ¿Es inmoral, es amenazadora? pregunta el Gobierno. Pues la destruyamos, no parece al Con-
eso ni amenazadora ni inmoral? Pues la respetaremos. Ya la creó, añade el Gobierno, perturbadora y inmoral. Mas ilustradme, Sres. Diputados, ilustradme. Y hágui una Cámara legislativa, soberana en su esfera, hoy reducida á cuerpo consultivo. Mas resignémonos: ya que el Gobierno quiere ser ilustrado, ilustraremos de buena fe al Gobierno: que harto lo necesita...

Tres razas fundamentales, decía, hay en Europa: la raza latina, la raza germano-sajona y la raza slava. La raza latina es una raza socialista, como que ha fundado todas las grandes instituciones sociales; pero es también una raza autoritaria. La raza sajona es una raza liberal pero es también una raza egoísta, sobrada amiga del hogar de la propiedad individual; y por consiguiente, una raza incapaz de clevarse á ser verdaderamente humanista.

La raza encargada de resolver el problema social, y que tiene para ello mayores aptitudes, será la slava, individualista, liberal como la raza sajona, tanto que ni siquiera tiene noción del Estado, siendo á la par de tal suerte federalista y social, que en sus municipios no existe realmente más autoridad que la autoridad de todo el mundo, ni más propiedad que la propiedad colectiva, pues la propiedad de todos para todos....

Al decir que se prohíba toda sociedad contraria á
la mora, la Constitución ha querido entender, esta es la interpretación que yo la doy, los actos inmorales condenados por el Código penal.

Discurso de Alonso Martínez (20 de Octubre de 1871)

Véase, pues, señores, cuántas y qué gravísimas limitaciones tiene el derecho de asociación por esa misma Constitución que es obra vuestra.

¿Que decía ayer el Sr. Castelar esto? Decía que el Sr. Ministro de la Gobernación y los que como él piensan interpretan mal la Constitución: que la Constitución, al hablar de la moral ha querido decir que condena los actos inmorales definidos por el Código penal, como por ejemplo los que llevará a cabo una sociedad de monaderos falsos o de ladrones. Cede, que el Sr. Castelar cree que el art. 17 de la Constitución, al negar a las españolas el derecho de asociarse para fines contrarios a la moral pública, se refiere solo a aquellas asociaciones que se forman con el objeto de ejecutar actos que el Código penal califica de delitos. Y yo digo: pues esta interpretación del Sr. Castelar es completamente inadmisible porque la rechazan con una claridad que es imposible pedirla mayor al texto de la Constitución y al Código penal, reformado también por vosotros en argumen y en consonancia con al misma Constitución. Ya habéis visto que la Constitución
Ya habéis visto que la Constitución trata en artículos diferentes de las asociaciones contrarias á la moral pública, y las asociaciones que se proponen ejecutar actos definidos por el Código penal; de las primeras trata en el artículo 17, y de las segundas enumera los diversos casos en art. 19. Pero por si se ofreciera alguna duda vamos á examinar el Código penal:

"Art. 190. Se reputan asociaciones ilícitas:

1º. Las que por su objeto ó circunstancias sean contrarias á la moral pública,

2º. Las que tengan por objeto cometer alguno de los delitos penados en este Código."

Después de este texto, ¿aquí queda de la interpretación del Sr. Castelar? S. S. lo que hace pura y simplemente es suprimir en la Constitución el art. 17 y en el Código penal en nume 1º. del Art. 190...

Pero en fin, lo primero que hay que averiguar, decís, es si la Internacional, por su objeto ó por sus objetos ó por sus circunstancias, es contraria á la moral pública, y á este propósito decís Castelar: "¿Que encontrais en la Internacional contrario á la moral? Es menester juzgar á la Internacional, no por sus periódicos oficiales, no por los manifiestos de sus principales adeptos, no por las circulares de sus jefes y directores,
sino única, pura y simplemente por los acuerdos soberanos 
ó inapelables (tales fueron las palabras que aquí pronun-
ció) de sus Congresos...

Me han de permitir que recuerde el programa de la —
sección de La Alianza de la democracia socialista en Géno-
va, cuyo Presidente es Bakounine, esclavo; programa que tie-
ne mucha importancia, porque la admisión de esta sección —
produjo una gravísima excisión en el seno del Consejo gene-
ral de Londres; es decir, en el seno de la autoridad supre-
ma de la Internacional; pero la mayoría del Consejo, una —
mayoría de treinta y tantos votos, sino recuerdo mal, ad-
mitió en el seno de la Internacional é esta asociación ——
con su programa.

¿Y que dice este programa? Ya no se trata de un perió-
dico, no se trata de un discurso, no se trata de lo que el
escritor diga en el retiro de su gabinete, ó de palabras —
más ó menos inconvenientes que salgan de improviso de la-
bios de un orador en las Asambleas; se trata de un progra-
ma completo y definido de una sección tan importante como —
e la democracia socialista del país que he citado. Dice —
asi. "Primero, La Alianza se declara atea" ....

Nuevo Discurso de Castelar (20 de Octubre de 1871)

Pero dice el Sr. Alonso Martinez: "¿Esta sociedad no
predica el ateísmo? Pues aquí está el programa de La Alian-
za: Pero ¿qué tiene que ver La Alianza con la Internacional?
La Alianza se llama democrática, y la Internacional rechaza toda idea política; la Alianza se llama ases, y la Internacional no quiere entender absolutamente en ninguna cuestión religiosa: los de la Alianza pertenecían a la Internacional como un católico que ha pertenecido a la Commune de París, — Corvillas, el cual era católico, soldado del Papa, internacionalista y de la Commune de París.

Señores: ya se sabe lo que es una asociación. Por ejemplo: el Sr. Alonso Martínez pertenecía al Colegio de abogados, comete un delito como individuo de esta asociación: ¿castigan al Colegio de abogados? Pues es lo mismo que quiere el Sr. Alonso Martínez: que porque la Alianza promulgó — allá en sus tiempos un programa, castigan a la Internacional. De suerte que el día que el Sr. Alonso Martínez sea sedicioso, castigarán al Colegio de abogados. Este es el argumento, y argumento que no tiene vuelta de hoja.

Interviene el sacerdote Martínez Izquierdo (24 de Octubre — de 1971).

Hace mucho tiempo, señoras, tengo aprendido que los socialistas, entre los cuales no cuento al Sr. Castelar, — porqué S.S. ha declarado que no es ni socialista, ni simpatiza internacionalista; que los socialistas abusan de las doctrinas católicas para hacer pasar sus teorías, y en las escuelas eclesiásticas estamos muy acostumbrados a resolver las dificultades que a nombre de los socialistas se nos pre-
sentan, tomadas de las doctrinas de los Santos Padres y de la Sagrada Escritura.

Proponiéndose sumir a la sociedad en esa igualdad absolu ta y monstruosa que les ilusiona cuando se trata de echar abajo la autoridad, emplean las sentencias de Jesus cristo, en que dice que entre los cristianos no ha de suceder lo que entre los gentiles: entre los gentiles el Rey es el primero y domina el pueblo, y entre los cristianos —el primero ha de ser el último y ese ha de estar al servicio de todos sus súbditos. Cuando atacan a la familia aducen aquel pasaje de Jesucristo en que dice que no ha venido a traer la paz, sino que ha venido a poner la espada —en la familia, a separar al esposo de la esposa, el hijo del padre, el hermano del hermano. Y últimamente, cuando atacan la propiedad, mencionan ese pasaje que nos presentó el otro día el Sr. Castelar, y todos aquellos en que parece que Jesucristo condensa la posesión de las tiquezas.

Pero notad bien Sres. Diputados; haciendo un estudio detenido de todos los pasajes de los socialistas, tomados del Evangelio en justificación de sus doctrinas, notad —bien que todos ellos predicen lo que llamaremos la perfección evangélica; aquella santidad, aquella virtud que llamamos de consuelo y no de precepto. Por lo que tanto, cometan en este caso el error de suponer que se pueden convertir en leyes todos esos conceptos. Estos pasajes indi-
can lo que hay de mejor en la doctrina y en la vida cristiana, y no solamente lo que hay de bueno en general. Pero lo mejor no puede nunca ser objeto de la Ley, porque el objeto de la Ley ha de ser absoluto, y lo mejor es siempre relativo: depende de las circunstancias, de la situación de cada uno, y así sucede que lo que para uno es mejor, para otro es simplemente bueno, y hasta bueno puede dejar de ser para alguien en virtud de sus especiales circunstancias. El objeto de la Ley ha de ser practicable para todos, y aquello que es mejor, aquello que supone una perfección especial, no es aplicable más que al individuo.

Discurso de Cánovas del Castillo (3 de Octubre de 1841)

Porque en realidad, señores y permitidme que lo diga: si no hubiera más vida que esta, sino hubiera Dios, como se dice y se proclama con tristes voces, yo no sé qué tendríamos que decir al socialismo; yo no sé con qué razón un hombre que vive esta vida transitoria le diría a otro hombre a quien también ha de tragarse la tierra, "sufrí y padecí, y lucha y muera". ¡Ah, señores! si es verdad que no hay Dios; si es verdad que no hay justicia divina; si es verdad que no hay otra vida, ¿a qué está lucha impía? Entendámonos con la Internacional y al socialismo, porque yo declaro que si no hay Dios, el derecho está de su parte. (Profunda sensación).

¿Habéis visto alguna vez, Sres. Diputados, formas más suaves, formas más blandas, formas más benignas para ir ——
disponiendo a la clase propietaria a que deje de defender su propiedad, y para que la entregue, si no a la Internacional, al proletariado moderno, considerado en su generalidad? Para el Sr. Salmerón casi era causa de asombro si — que nosotros viníframos a aconsejar que el Estado se dedicase a defender principalmente la propiedad; y casi dudaba S. S., de que nos distraíramos a sostener una tesis que tan absurda le parece.

A donde iríamos a parar, si cada vez que se presenta un insensato, tal vez un criminal, mil criminales que se dijeran representantes de la verdad, les abriéramos las puertas del Estado y de la sociedad? Por cruel que os parezca, y quizá os lo parezca mi doctrina sobre este punto, — voy a exponerla con total franqueza. No hay más forma, no hay más medio de hacer ver lo que es verdadero y lo que es justo en esta revuelta historia de la humanidad, que la lucha y el triunfo.

La propiedad no significa, después de todo, en el mundo más que el derecho de las superioridades humanas; y en — la lucha que se ha entablado entre la superioridad natural, entre la desigualdad natural, tal como Dios la creó, y la inferioridad que Dios también ha creado, en esa lucha triunfará Dios y triunfará la superioridad sobre la inferioridad.

La miseria es eterna; la verdad es que la miseria es un mal de nuestra naturaleza, lo mismo que las enfermedades
los mismos que las pasiones, lo mismo que las contrariada-
des de la vida, lo mismo que tantas otras causas físicas
y morales como atormentan nuestra naturaleza. ¿Te atreves
a remediarlas todas? Pues nosotros tampoco nos atrevemos —
a remediar la miseria pública, a remediar la pobreza; y
porque no nos atrevemos, no lo ofrecemos.

Cuando en su totalidad las clases bajas (no ya en —
su generalidad, que en su generalidad creo todavía que —
profesan las creencias religiosas); pero en fin, cuando
en su totalidad las clases bajas de esta raza latina creían
en Dios, profesaban religión, respetaban las instituciones
religiosas, tenían una cosa que poner frente de estas —
miseries humanas; tenían una cosa que colocar en medio de
los rigores de la lucha; tenían representadas por ideas y
representadas por instituciones lo que hoy representan en
los campos de batalla las hermanas de la caridad que auxi-
lian a los muertos, que recogen a los heridos, que rescatan
su sangre, que amparan todas las miserias, que consuelan
todos los dolores; pero hoy en medio de otras luchas —
qued es imposible impedir ni evitar, en medio de las luchas
de intereses que ha creado la libertad, y de las cuales —
nace la prosperidad pública, en medio de esas luchas donde
es imposible que deje de haber vendidos, que deje de haber
heridos, que deje de haber quien tenga mala fortuna, quien
repartirá alivios ni consuelos, si sistemáticamente se re-
chazan los grandes medios que ofrecen las creencias religiosas.

La propiedad, representación del principio de continuidad social; la propiedad, en que está representada el amor del padre al hijo y el amor del hijo al nieto la propiedad, que es desde el principio del mundo hasta ahora la verdadera fuente y la verdadera base de la sociedad humana; la propiedad se defenderá, como ha dicho antes, con cualquiera forma de gobierno. Con todos los que real y verdaderamente defiendan la propiedad (que será defender la sociedad humana y con ellas todas sus necesidades divinas y materiales), se creará una grande escuela, se creará un gran y verdadero partido, que aun cuando entre sí tenga divisiones profundas, como todos los partidos las tienen, estará siempre unido por un vínculo, por un fuertísimo lazo común. Y en frente de este, tarde o temprano, y por más que habléis todos ahora una misma lengua de libertad, y por más —que pretendais en un mismo tecniciismo confundiros los unos con los otros, estareis los que pretendais haber penetrado ese misterio, los que imagineis haber descubierto ese nuevo mundo de la propiedad reformada o colectiva.

Porque en la defensa de este orden social está hoy sin duda alguna la mayor legitimidad; quien alcance a defender la propiedad, a reestablecer el orden social, a dar a estas naciones latinas (y no mifiño ahora solo en España—
Aún, sino en todas ellas, y principalmente en Francia), la seguridad y la garantía de los derechos de cada uno y a libertarlas de la invasión bárbara del proletariado igno-
rente, ese tendrá aquí y en todas partes, aún cuando no-
tros nos opusiéramos, una verdadera legitimidad.

Cuando las minorías inteligentes, que serán siempre las minorías propietarias, encuentren que es imposible man-
tener en igualdad de derechos con ella a la muchedumbre; —
cuando vean que las muchedumbres se prevale de los derechos políticos que se le han dado para ejercer tiránicamente su soberanía; cuando vean convertido lo que se ha dado en nom-
bre del derecho en una fuerza brutal para violentar todos los demás derechos; cuando vean que todo lo inútil puede aspirar al triunfo con la fuerza desencadenada por los ape-
titos sensuales; cuando eso vean, buscarán donde quiera la dictadura, y la encontrarán. Tal es la historia eterna del mundo.

Tampoco lograréis, por más que los maldigais, como hace tantos años los ha maldecido el mundo, tampoco logra-
reis extirpar los Caín y los Nembrod; los tendrais siempre que la fatalidad de las cosas los haga indispensables. Los tendréis, y si no venden por la fuerza bruta, vencerán por la única fuerza irresistible; vencerán por la fuerza de la inteligencia; vencerán por la astucia; vencerán por la su-
perioridad del valor tan bien, porque como no hay superiori-

136
ridad que sea igual en el mundo, hasta en el valor hay superioridades. La del valor engendra y crea los militares, y el militarismo crea los despotas y los tiranos. Y como todo tiene su papel en el mundo, como todo puede servir a una necesidad social, lo mismo que acude la inteligencia en horas dadas a ilustrar los periodos de la libertad, a legalizar los periodos normales, lo mismo acuden —los hombres superiores de la fuerza, lo mismo acuden los vencedores, los conquistadores a la hora histórica, a la hora precisa en que hacen falta.

**Nuevo discurso de Cárcamo (6 de Noviembre de 1871)**

Siempre habrá una última grada en la escala social, un proletariado que será preciso contener por dos medios: con el de la caridad, la ilustración, los recursos morales, y, cuando esto no baste, con el de la fuerza.

Ni el deseo, ni la capacidad para el trabajo, ni la tendencia moral, nada de lo que constituye la fuerza en la sociedad y en la vida, nada se nivelará, porque estas desigualdades son, después de todo, la gran riqueza, el gran tesoro del género humano, en cuanto que son síntomas poderosos de su actividad y de su libertad. Porque los hombres son libres, porque los hombres son activos, porque la lucha es condición de la vida, porque el estancamiento mataría la vida humana, porque la vida humana y el progreso de la civilización no se conciben sin
contrastas y rozamientos y luchas; por eso es por lo que existen en todo tiempo el mal y el bien en el mundo; por eso es por lo que el principio de usurpación reside al lado del principio de justicia en la tierra; por eso es por lo que habrá siempre un Estado que se interponga entre lo injusto y lo justo.

Tengo la convicción profunda de que las desigualdades proceden de Dios, que son propias de nuestra naturaleza, y creo, supuesta esta diferencia en la actividad, en la inteligencia y hasta en la moralidad, que las minorías inteligentes gobernaran siempre al mundo, en una u otra forma. No desconfío del triunfo de esas minorías; no desconfío de su supremacía en la sociedad; así como no desconfío tampoco de que se conserve la propiedad individual, esa propiedad individual, que después de todo cuanto se ha dicho sobre sus transformaciones, viene todavía regida por el antiguo derecho romano. Creo, por el contrario, que la propiedad no perderá: no puede perder, por más que contra ella se diga.

10) Despacho del Ministro de Asuntos Exteriores Español, Benítez de Bilbao, al Ministro Plenipotenciario de España ante el Rey de Italia (Madrid, 8 de Febrero de 1872).

Un grave debate se ha sostenido en el Congreso de Diputados durante la segunda sesión de las Cortes españolas—
las. Ha sido quizas el mas importante de todos los que hayan podido tener lugar jamas en el seno de una Asamblea legislativa. Se trataba de precisar desde el punto de vista politico, es decir, eminentemente practico, la verdadera naturaleza de la "Asociacion Internacional de Trabajadores". Su poderosa y formidable organizacion y el rapido desarrollo que la misma ha tenido en pocos anos merecen atraer seriamente la atencion de todos los que se interesan en la conservacion del orden social...

Vd. habra seguido ciertamente con el mismo interés que ha despertado en todas partes esta larga y luminosa discusion, mantenida a tan alto nivel por nuestros principales oradores. No es pues necesario recordarle el punto de vista bajo el cual ha sido apreciada la cuestion por el Gobierno de Su Majestad, que obtuvo finalmente en una votacion solemnne del Parlamento una declaración favorable a sus doctrinas....

El Gobierno, apoyandose en las declaraciones de los Representantes del Pais, que han juzgado a la Internacional fuera de la Constitucion y comprendida en las previsiones del Codigo penal, está resuelto a reprimir todas sus manifestaciones y cualesquiera otros actos ostensibles capaces de turbar la tranquilidad pubbica, de la misma manera que está tambien decidido a someter a
las Cortes, si las circunstancias lo exigieran, un proyecto de ley disolvendo la citada Asociación, conforme al precepto constitucional.

El Gobierno de Su Majestad no se dirige hoy a Vd. por mediación mía con la sola finalidad de exponerles — sus ideas, ya bien conocida, sobre la Internacional... Tienen otras pretensiones. Sabiendo que Vd. se encontrará completamente identificado a él en cuanto a sus opiniones sobre este punto, confía que en el ejercicio de la alta misión que os ha sido confiada, contribuiréis eficazmente por vuestras gestiones cerca del Gobierno de Su Majestad al Rey de Italia a que sean tomadas de común acuerdo todas las medidas necesarias para llegar a un resultado satisfactorio...

Lo pués de esperar, vista la extrema gravedad de las circunstancias que todos los Estados prestaran una acogida benévola y cordial a la petición de su apoyo para la obra de defensa contra la Internacional que se haría ciertamente mucho más fácil si una de las grandes potencias se encargara de formular las bases de un acuerdo común y de una acción universal y simultánea.

Igualmente sería deseable que las Naciones que no han concluido todavía tratados de extradición con España se dispongan a estipular una Convencción o a establecer
un acuerdo especial para todo lo que se refiera a la Internacional....

11) Presunta de Grenae y Limeur (13 de Mayo de 1872).

Siento que no se halla presente el Sr. Ministro de Estado. Mi objeto es preguntar cómo es que después de la circular del Ministerio de Estado referente a la sociedad Internacional, publicada en la Gaceta, no se ha dado cuenta en España de la contestación dada en el Parlamento inglés por lord Grandville sobre la iniciativa tomada por el Ministro de Estado español para combatir la sociedad secreta la Internacional. Todos sabemos que las cualidades extraordinarias que distinguen al Sr. Ministro de Estado le habían granjeado la confianza del Conde de Bismarck hasta tal punto, que aquel eminente diplomático, encontrándose perplejo para dar solución a tan difícil problema, lo dejó a las altas cualidades.

12) Discurso de Secarr contra la República federal (13 de Agosto de 1873)

Estado federales. Solo vosotros caprichosamente pensais en ellos, en esos cantones de antiguos reinos, que no son nada, que desafían el mayor matemático a que encuentre en donde engrana esa nueva rueda que habéis inventado. ¿Vaís a unir lo que está unido? Pues os pongo el siguien-
te dilema: yo niego que estas Cortes tengan derecho para
hacer esas variantes; federación es pacto, es alianza, y
pacto y alianza significa libertad entre los contrayentes,
y lo primero es que digan los cantones si quieren o no.
Así, más lógica la minoría que vosotros, propone a las
provincias, y esto me parece más hacedero que empiecen-
por separarse para confederarse luego. Yo, sin embargo,
pregunto: ¿qué son las provincias? Una división territo-
rial muy moderna con objeto puramente administrativo; más
para separarlas y hacer de ellas Estados cantones o cómo
quieran llamarlas, y aparte de los intereses creados ya a
la sombra de dicha división, ¿la que reglas transcendentes
ha obedecido ésta? ¿Qué diferencia de razas o antagónis-
mo de intereses la han determinado? Y si volvemos por un
momento a la división que propone la mayoría, ¿quiere des-
ciñarse el Sr. Castelar por qué hay Castilla la Nueva y la
Vieja, por qué Galicia, Andalucía Alta y Baja? ¿No es lo
mismo esa combinación que otra cualquiera?....

¿Con que autoridad vais a hacer la federal? ¿Con
la autoridad de los partidos que aceptaron la revolución
de Setiembre? No. ¿Será con el partido conservador o radia-
cal? ¿No acabéis de oir mis declaraciones? ¿La habeis si-
quiera con la autoridad, con la voluntad de todo el par-
tido federal? No; la izquierda, según mis noticias, no —
vota vuestra Constitución; y si la vota, será imponiéndose condiciones, porque al fin y al cabo tiene razón. Precisamente de que el procedimiento sea más o menos posible, si ella establece los cantones y estos gozan de su libertad y de su independencia, bien pudiera hacer la federación, el pacto; pero vosotros no, porque acabais de combatirlos; y el combatirlos os habéis inutilizado para hacer lo que hoy intentais; en las barricadas gritaban: ¡Viva la República federal! pero los soldados que las atacaban supongo que no gritaban lo mismo; de lo contrario, no se comprendería la lucha.

Si todo esto es verdad; si todo esto es exacto; si lo que nos separaba no era de bastante gravedad para producir una separación profunda, yo os digo: liberales de todos los partidos, unámonos y formemos aquí una República una e indivisible. Así daremos paz a este país; paz y tranquilidad y al progreso, que bien lo he menester; y así, mal que pese a algunos, habremos cumplido con nuestro deber a nuestro paso sobre la tierra.
FUENTES. ANEXO II (CAP. III).


2) Idem, pp. 781 a 783.

3) Idem, pp. 826 a 828.

4) Idem, pp. 842 a 843.


6) Bol. de la Rev. ... nº 31, 1869, pp. 515 a 517.

7) Diario de Sesiones, año 1870, p. 8901.

8) Viada, J., "Código Penal reformado de 1870", Madrid — 1890, pp. 75 a 91 y 156 a 166. Tomo II.

9) Idem, Tomo III, p. 597.

10) Bol. de la Rev. ... año 1871, pp. 732 a 735.


12) D.5., Sesión 17 de julio de 1873, Apéndice 2º al nº 42, pp. 2 y 4.

13) D.5., Sesión 18 de julio de 1873, Apéndice 1º al nº 50, pp. 1, 2, 5 y 6.

14) D.5., Sesión de 13 de agosto de 1873, Apéndice 3º al nº 64, p. 1.
15) Bol. de la Rev. ..., n° 43, año 1874, p. 45.
16) D.S., Sesión 12 de julio de 1869, n° 124, ps. 3654 a
3657.
17) D.S., Ses. 17 julio de 1871, ps. 2777-2778.
18) D.S., Ses. 21 de mayo de 1872, n° 22, ps. 423 y 424.
19) D.S., Ses. 1 de octubre de 1872, ps. 245 a 246, n° 15.
20) a) Pascual y Casas. D.S., Ses. 21 de octubre de 1871
Apéndice 18 al n° 133.
   b) D.S., Ses. 10 de octubre de 1872, Apéndice 17 al n°
37.
   c) D.S., Ses. de 6 de noviembre de 1872, Apéndice 22
al n° 47.
21) D.S., Ses. de 11 de octubre de 1872, Apéndice 23 al
n° 37.
22) D.S., Ses. de 24 de julio de 1873, Apéndice 40 al n°
48.
23) a) D.S., Ses. de 25 de abril de 1870, Apéndice 60 al
n° 285.
   b) D.S., Ses. de 5 de noviembre de 1872, Apéndice 18
al n° 47.
   c) D.S., Ses. de 14 de agosto de 1872, Apéndice 38 al
n° 66.

185
FUENTES. ANEXO III (CAP. III).

1) Diario de Sesiones, Sesión de 22 de mayo de 1871, nº 41, ps. 994 a 1003.

2) D.S., Ses. 29 de mayo de 1871, nº 47, ps. 1255 a 1257.

3) D.S., Ses. de 30 de mayo de 1871, nº 48, p. 1281.

4) D.S., Ses. de 3 de junio de 1871, nº 52, ps. 1414 a — 1417.

5) D.S., Ses. de 6 de junio de 1871, nº 54, ps. 1468 a — 1586.

6) D.S., Ses. de 12 de junio de 1871, ps. 1586 a 1652.

7) D.S., Ses. de 14 de junio de 1871, nº 60, ps. 1652.

8) D.S., Ses. de 25 de julio de 1871, nº 74, ps.1175 a — 1181.

9) D.S., Sesiones de 2 de octubre a 10 de noviembre de 1871.

   a) Ses. de 2 de octubre de 1871, p. 2822.

   b) Ses. de 7 de octubre de 1871, p. 2909, 2910.

   c) Ses. de 15 de octubre de 1871, p. 2992.

   d) Ses. de 16 de octubre de 1871, ps. 2993 y 2995.

   e) Ses. de 17 de octubre de 1871, p. 3011.

   f) Ses. de 19 de octubre de 1871, ps. 3059, 3061 y 3070.

   g) Ses. de 20 de octubre de 1871, ps. 3079, 3080 y 3081.
h) Ses. de 28 de octubre de 1871, p. 3685.

i) Ses. de 24 de octubre de 1871, ps. 3158 a 3162.
ANEXOS DEL CAPÍTULO CUARTO
ANEXO I

Realización de disposiciones normativas del periodo.

1) Orden circular del Ministerio-Regencia a los Gobernan-
dores civiles de las provincias, fijando las reglas a —
que deben fijar su conducta en punto a reuniones y aso-
ciaciones públicas, 7 de febrero de 1875.

2) Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 17
de mayo de 1875.

3) Constitución de 30 de junio de 1876.

4) Ley de reuniones públicas de 15 de junio de 1880.

5) Ley de Asociaciones de 17 de junio de 1887.

6) Circular del Ministerio de Gobernación de 6 de abril
de 1892.

7) Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 15 de
febrero de 1896.

8) Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 17 de
noviembre de 1893.

9) Ley de 10 de julio de 1894, sobre explosivos.

10) Ley de 2 de septiembre de 1896, sobre explosivos.

11) Real Decreto de 16 de septiembre de 1896, sobre explo-
sivos.

12) Real Orden de 7 de octubre de 1896, sobre explosivos.
1) Orden circular del Ministerio-Regencia a los Gobernadores civiles de las provincias, fijando las reglas a que deben ajustar su conducta en punto a reuniones y asociaciones públicas.

El Ministerio-Regencia al inaugurar la nueva era —que es consecuencia del restablecimiento de la Monarquía constitucional y de la dinastía legítima, se propone— respetar todos los derechos políticos en cuanto sea compatible su ejercicio con el orden público y con las instituciones que forman la esencia de nuestro régimen actual. Entre esos derechos figuran el de reunión y el de asociación, que como todos son siempre limitables, y más aún en las presentes circunstancias que la Nación atraviesa, obligada a sostener lucha sin tregua contra un partido tanaz que, convencido de su impotencia, se complica —sin embargo en cubrir con ruinas y con sangre el suelo de la patria... 

Pero el Gobierno actual, sin renunciar a los medios de acción que tanto necesita y que ha encontrado vigentes, se propone regularizar todo lo posible sus facultades discrecionales hasta que, convocadas legalmente las Cortes,
puedan dictar aquellas disposiciones sábias y prudentes que, en armonía con nuestro estado presente y con las tendencias y espíritu de la época, sirvan de norma definitiva y segura al Estado y a los particulares en sus mutuas relaciones...

El Ministerio-Regencia no se guiará jamás en los actos que ejecute por móviles parciales que se avienen mal con los preceptos de la justicia y con las reglas de la equidad; ni suspenderá los derechos políticos cuando se trate de sus adversarios, y mantendrá su ejercicio —cuando se trate de sus amigos. El Rey ha declarado que quiere serlo de todos los españoles, y el Gobierno no ha de contrariar tan nobles disposiciones, inclinándose a —favor de los unos y en daño de los otros...

Estas reglas son las siguientes:

1º. — No podrá convocarse ni celebrarse ninguna reunión pública en calles, plazas y pasos, u otro lugar de uso común sin el permiso previo y por escrito del Gobernador de la provincia en las capitales y de la Autoridad local en los demás pueblos; al solicitarlo se expondrá claramente el objeto que los congregantes se propongan.

Las reuniones que se celebren sin estos requisitos
se considerarán ilícitas y serán disueltas sin demora. —
La Autoridad podrá conceder o negar el permiso, y contra
su negativa cabe recurso ante el Superior jerárquico.

29. — Las procesiones religiosas, y las reuniones —
que con el mismo carácter se celebren dentro de los tem-
plos, no estén sometidas al precepto anterior. Tampoco —
o estarán las reuniones en establecimientos autorizados
al efecto por disposición especial, ni las funciones de
los teatros y demás espectáculos públicos; respecto de
unas y otras continuarán en observancia las disposiciones
vigentes.

30. — Se considerarán públicas para el efecto de la
regla 19 las reuniones que excedan de veinte personas, —
y se celebren al aire libre, o en edificio donde no ten-
gen su domicilio habitual todas las personas que las con-
venquen.

40. — Quedan prohibidas por ahora las asociaciones
que tengan un objeto político, y las Autoridades no con-
sentarán en manera alguna la continuación de las existen-
tes, ni la constitución de otras nuevas.

50. — Las Sociedades dedicadas a objetos conocida-
mente benéficos, científicos y literarios, y los circu-
los 3 casinos de puro recreo podrán continuar, reconsi-
tuirse u organizarse de nuevo en la forma que para las reuniones se dispone en la regla 18. Las Autoridades procederán a suspender esas asociaciones desde el momento en que tengan noticias fundadas de que su verdadero carácter es el de círculos políticos, y darán cuenta al Ministerio de la Gobernación para que éste resuelva lo que estime oportuno, bien sobre su continuación ó bien sobre su disolución.

6ª.- Serán responsables de los actos punibles que se produzcan en las reuniones y asociaciones públicas, en primer término sus autores y subsidiariamente los que hayan convocado la reunión, los dueños o inquilinos de los edificios en que se celebre y los gestores o Juntas directivas de las respectivas asociaciones.

7ª.- Los Gobernadores facilitarán la continuación y reconstitución de las Sociedades actualmente existentes, con arreglo a las bases atendidas, sin suspenderlas ni molestarlas en lo más mínimo durante el breve plazo que debe emplearse en su reconstitución.

Lo que de orden del Ministerio digo a V.S. para su debido cumplimiento. Madrid 7 de Febrero de 1875.- — Romero Robledo. — Sr. Gobernador de la provincia de ....
2) Real decreto, autorizando a la prensa para plantear y discutir las cuestiones constitucionales, y declarando vigentes las anteriores disposiciones sobre reuniones, asociaciones e imprenta, en cuanto no se oponga a la ejecución del presente decreto.

Señor: Estimulado por las generosas aspiraciones que V. M. hizo públicas en su manifiesto del 18 de Diciembre, muy grato hubiese sido a su primer Gobierno responsable que la feliz exaltación de V. M. al Trono de España hubiera sido inmediatamente seguida del planteamiento del sistema parlamentario y el ejercicio de la libertad. Pero las mismas causas que hicieron tan deseada y espontánea la proclamación de V. M. eran por de pronto invencible obstáculo a sus nobles propósitos...

Si dictó medidas de represión en un circunferencia sobre reuniones y asociaciones, bien claro demostró al aplicarlas que el Gobierno, en sus funciones de tal, desconoce el nombre de amigos y enemigos...

El Gobierno de V. M. ha sentado principios tan importantes que hacen evidente cuán libre está su conducta de resistencias temerarias y sordos pueriles, y hasta —que punto comprenden todos sus individuos que no en vano pasan por una Nación los años y los sucesos, y que la...
mente en quitar su crudeza a las reformas lícitas, facil-
litar la solución de los tiempos y defender a los contem-
poráneos de las rudas alternativas a que estarían expues-
tos si en el campo político ejercieran solos su influen-
cia los fánaticos admiradores de los muertos y los cie-
gos apasionados por el bienestar de lo que aún no han —
nacido...

Las vivas simpatías que en todas las clases socie-
tes despierta la persona de V.M. presagian una feliz y —
constante inteligencia entre el pueblo y el Rey, único —
remedio a tantos infortunios....

Convalecida apemás de la pasada anarquía y presa
actualmente de dos guerras civiles, la Patria empobreci-
da y desangrada muestra sus heridas a sus hijos, Acuda—
mos todos a su remedio, que ningún sacrificio parecerá
grande si se toma por medida la extensión de sus desavan-
turas..

Madrid 18 de Mayo de 1875.— SEÑOR: a L.A.P. de —
V.M. el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro —
interino de Marina, Antonio Cánovas del Castillo.— El Má-
nistro del Estado, Alejandro de Castro.— El Ministro de
Gracia y Justicia, Francisco de Cárdenas.— El Ministro —
de la Guerra, Joaquín Jovellar.— El Ministro de Hacienda

REAL DECRETO

Atendiendo a las razones expuestas por el Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º.- Queda autorizada la prensa para plantear y discutir las cuestiones constitucionales.

Artículo 2º.- Las Autoridades concederán su permiso a los partidos legales que lo soliciten para celebrar reuniones públicas.

Artículo 3º.- Quedan vigentes las anteriores disposiciones sobre reuniones, asociaciones e imprenta, en cuanto no se opongan a la ejecución del presente decreto.

Dado en Palacio a 18 de Mayo de 1875.- ALFONSO.-
El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo...

3) Proposición de Ley, del Sr. Marqués de Cácares, sobre
asociaciones obreras, (11 de Diciembre de 1876).

La cuestión social es el problema más importante — de nuestros tiempos; no en vano ha dicho Mr. Gladstone — que el siglo XIX es el siglo del obrero. Podrán los Go- biernos cerrar los ojos ante el abismo; pero ¿esará menor el peligro porque no le vean?.

Los sucesos ocurridos en España desde 1868 demuestran dos cosas: la primera, que la necesidad de reformas que mejoren la condición de las clases trabajadoras se deja ya sentir intensamente entre todos los obreros de — los centros industriales, y aún entre algunos de los cam- pos; y la segunda, que hecha excepción de algunos excesos individuales, nuestros obreros han demostrado por lo gener- ral la sensatez y cordura que les distinguen, que les hace aptos para el amplio ejercicio del derecho de asocia- ción, y dignos del apoyo del Estado y de la cooperación de las clases que representan al capital, la propiedad.

La necesidad de la ley es evidente; para la asociaciones obreras no bastan los principios del derecho ci- vil común, ni las son aplicables las reglas del derecho mercantil. De este modo las sociedades de socorros, las cooperativas de consumo y de producción que apuntan por todas partes en Madrid, en Cataluña, en Valencia y en —
Andalucía, demostrando que ha llegado la época de su desarrollo, el bien viven bajo el amparo de la ley desde que la Constitución del 19 reconoció la libertad de asociación no derogada, están por los demás fuera del círculo del derecho, sin preceptos jurídicos que les sirvan de apoyo y de garantía...

Al Estado toca despertar su iniciativa adormecida y procurar traer a las asociaciones obreras el concurso de propietarios y capitalistas que, como socios honorarios, pueden hacer mucho bien a los obreros, haciendo mucho bien a sí mismos...

Por lo expuesto, el Senador que suscribe tiene la honra de proponer al Senado la siguiente

**PROYECTO DE LEY**

sobre asociaciones obreras

**Base 1°** El Estado reconoce personalidad jurídica a las asociaciones que se proponen mejorar la condición de las clases trabajadoras en cualquiera de las formas siguientes:

1. Sociedades de socorro mútuos:
   Para casos de enfermedad;
   De paralización involuntaria del trabajo;
De paralización colectiva y voluntaria;
De trabajo, con tal que los miembros de la sociedad se sometan a la decisión de los Jurados míster;
Para pensiones e invalidos y ancianos;
Para casos de defunciones;
Para orfanías;
De seguros de cosechas, ganados e instrumentos de trabajo;
De auxilios para cualquiera otra necesidad;
De los que viven del producto de su trabajo;

II. Sociedades cooperativas:
De consumo;
De producción;
De crédito;

III. Montes de Piedad y Cajas de Ahorro;
Para constitución de dotes a las hijas;
Compra de instrumentos de trabajo a los hijos;
Formación de pequeños capitales.

IV. Sociedades de patronato:
Para favorecer la instrucción general técnica de aprendices y adultos;
Para constituir centros de colocación a los trabajadores;
Para la construcción de habitaciones obreras.
V. Sociedades de recreo, al serlas va inherente la enseñanza de la música vocal o instrumental.

VI. Toda sociedad que se proponga por exclusiva obje-  

to mejorar la condición de los trabajadores en cualquier esfera  

de la vida.

8. Base 2. Para constituir una sociedad de las comprendidas en la base anterior basta presentar en el registro ci-  
vil del domicilio de la asociación dos ejemplares de los es-  

tatutos en papel común. El juez municipal los examinará, y  
si no hallara en ellos disposición alguna contraria a la mo-  
ral o a las leyes, inscribirá la sociedad en la sección cor-  

respondiente del registro y devolverá a los interesados uno  
de los dos ejemplares con su firma, sello y nota de haberlo  

registrado, todo en el término de 8 días.

El juez municipal denegará también la inscripción si los estatutos no contuvieren los siete primeros requisitos qu previene la base 3ª.

De la negativa del juez municipal puede apelarse al juez del partido, al president de la Audiencia y a la Di-  

rección del Registro, pos su órden en la via gubernativa, en papel de oficio y sin costas.

Base 6ª. Las sociedades obreras legalmente constituidas pueden celebrar libremente las reuniones que no lleguen a 20 socios.

Para las que excedan de este número deberán dar aviso
a la autoridad local con 24 horas de anticipación.

Si las reuniones que excedan de 20 socios son periódicas, bastará que la sociedad en los quince primeros días de cada año ponga en conocimiento de la autoridad los días en que durante el deben celebrarse.

La autoridad local podrá presenciar por sí o por medio de un delegado estas reuniones y disolverlas en el acto si en ellas se tratan asuntos ajenos al objeto de la sociedad.

La gerencia puede exigir la presencia en las reuniones de un notario que levante acta de lo que en ellas ocurra, y este acta, sin admitirse prueba en contrario, servirá para exigir la debida responsabilidad a la autoridad que indebidamente disolviera una de dichas reuniones.

Los presidentes de la reunión que consintieren que en ellas se traten asuntos ajenos al objeto de la sociedad, incurrirán en la multa de 10 a 500 pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que ellos y otros socios puedan haber incurrido.

Base 139. El Gobierno, las Diputaciones provinciales, las Juntas provinciales de agricultura, industria y comercio y los Ayuntamientos promoverán en cuanto les sea posible el
establecimiento de sociedades obreras, facilitándoles el local necesario y estimulándolas con subvenciones en cuanto lo permitan sus recursos.

Se consignará en el presupuesto la cantidad de 250,000 pesetas con cargo al Ministerio de Fomento para la concesión de estas subvenciones, cuya inversión se publicará anualmente en la Gaceta.

Los gobernadores civiles y Juntas provinciales de agricultura, industria y comercio, procurarán desde luego en el establecimiento de las asociaciones obreras más adecuadas al carácter de la localidad entre los gremios más importantes de las capitales. Al efecto se pondrán de acuerdo con los sindicatos de dichos gremios, con los obreros más aptos para el manejo de las asociaciones y con los fabricantes y capitalistas que se distingan por su espíritu benefico y se precian de aceptar el cargo de socios honorarios. Del mismo modo se pondrán de acuerdo con las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos respectivos, e invocarán su concierto para el establecimiento de dichas asociaciones.

Una vez constituidas, se abstendrán de toda ingenuidad en ellas y se limitarán a prestarles su apoyo cuando estas lo solicitemen...

Palacio del Senado 11 de diciembre de 1876. «El Marqués de Cáceres.»
4) Proposición de ley, del sr. Danvila, reproducida, sobre asociaciones internacionales (26 de abril de 1877).

A LAS CORTES

El trabajo solo puede prosperar con la paz, con el orden y con la justicia. Por eso toda coalición para alterar sus naturales condiciones se ha considerado un verdadero retroceso en el movimiento progresivo de la humanidad. Las huelgas, las coaliciones y las asociaciones nacionales en Inglaterra suministraron a los obreros ingleses la idea de convertirlas en una vasta asociación internacional. El gran certamen de la industria, realizado en Londres en 1862, reunió un gran número de operarios, que imbuidos unos por las doctrinas de Proudhon, otros por las de Marx y otros por las de Bakounine, comenzaron a discutir la forma de elevar los salarios y hacer más asequibles las huelgas voluntarias de los trabajadores. Esta discusión alarmó a los pueblos, produjo hechos lamentables y obligó a los Gobiernos prusianos a adoptar medidas de justa represión.

La Asociación Internacional había celebrado su primer Congreso en Ginebra en 1866, y ya en ella se habían señalado dos tendencias: la de los que se inspiraban en la doctrina de Proudhon, y la de los delegados comunistas de varias Naciones. A esta primera reunión asistió Karl Marx y el ruso Bakounine, que se apedallaba el "Barbaro del Norte"...
En la legislatura de 1871, un celosísmo representante del país, el Sr. Jove y Heviá, en la sesión de 2 de octubre anunció al Gobierno una interpelación por su tolerancia con la Internacional...

Acaso esta discusión y los tristísimos recuerdos de la Comuna sirvieron de estímulo al Gobierno Francesa para proponer, discutir y votar la ley de 14 de Mayo de 1872; y si esto hizo un Gobierno republicano obligado por altos deberes sociales, no ha de extrañarse que pretenda otro —tanto un Gobierno conservador, cuya principal misión es defender los intereses tutelajes de la sociedad y prevenirlos contra los que aún alarman de pertenecer a una asociación ilegal, que es un atentado constante contra la paz pública. El proyecto, que no es más que la reproducción de la ley francesa, viene a llenar un vacío en las leyes penales, —porque sin duda los legisladores no previeron que los perturbadores de todos los países pudieran unirse en nefando consorcio para procurar la suspensión del trabajo y negar la propiedad, la familia, el Estado, la religión, y todo —lo que es base indispensable del orden social.

**PROPOSICIÓN DE LEY**

sobre las asociaciones internacionales

Art. 10. Toda asociación internacional, cualquiera que sea su denominación, y especialmente la Asociación In-
ternacional de trabajadores, que tenga por objeto provocar la suspensión del trabajo, la abolición del derecho de propiedad, de la familia o de la religión, constituirá, por el solo hecho de su existencia y de sus ramificaciones en territorio español, un atentado contra la paz pública.

Art. 20. El español que después de la promulgación de la presente ley se afílié o haga acto de adhesión a la Asociación Internacional de trabajadores o a cualquier otra asociación que profese las mismas doctrinas ó tenga el mismo objeto, será castigado, según las circunstancias, con la pena de prisión corregional y una multa de 50 a 1,000 pesetas.

Artículo 3º. La pena marcada en el artículo anterior se aplicará al extranjero que en España se afílie ó haga acto de adhesión a alguna de las asociaciones a que la presente ley se refiere.

Artículo 4º. La pena personal podrá aumentarse hasta cinco años de prisión menor, y la multa a 2,000 pesetas, para todo español ó extranjero que acepte cualquier cargo en alguna de dichas asociaciones, ó que haya concurrido a su desenvolvimiento con conciencia del hecho, ya sea procurando suscripciones, adhesiones colectivas ó individuales, ya propagando sus doctrinas, estatutos ó circulares.
Art. 52. Todo el que preste o alquile a sabiendas un local para una o más reuniones de una parte o sección de las asociaciones mencionadas, será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 50 a 500 pesetas, sin perjuicio de las penas más graves a que se haya hecho acreedor, en conformidad con el Código penal, por los delitos que hayan podido cometerse con arreglo a la presente ley.

Art. 53. Todo obrere a quien se justifique que después de la publicación de la presente ley pretenga a cualquiera de las asociaciones a que la misma se refiere, quedará privado de su libertad por el plazo que la autoridad determi-ne.

Art. 74. Las disposiciones anteriores contrarias a la presente ley quedan derogadas.

Palacio de Congreso 26 de Abril de 1877.—Manuel Danvila.—J. Emilio de Santos.—Alberto de Quintana.—Ignacio J. Escobar.—F. Bosch y Labrús.—Guerraindo Vicuña.—Marqués de Casa-Ramos.

51 Ley de reuniones públicas de 15 de junio de 1880.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España.
A todos los que la presente vean y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos ha sancionado lo siguiente:

Art. 1º. El derecho de reunión pacífica que concede a los españoles el art. 13 de la Constitución puede ejercitarse por todos, sin más condición, cuando la reunión haya de ser pública, que la de dar los que la convoquen conocimiento escrito y firmado del objeto, sitio, día y hora de la reunión, veinticuatro horas antes, al Gobernador civil en las capitales de la provincia, y a la Autoridad local en las demás poblaciones.

Art. 2º. Por la reunión pública, para los efectos de esta ley, se entiende la que haya de constar de más de 20 personas, y haya de celebrarse en edificio donde no tenga su domicilio habitual los que la convoquen.

Art. 3º. Las reuniones públicas, procesiones cívicas, séquitos y cortejos de igual índole, necesitan, para celebrarse en las calles, plazas, paseos o cualquier otro lugar de tránsito, el permiso previo y por escrito de las Autoridades indicadas en el art. 1º.

Art. 4º. A toda reunión pública puede asistir la Autoridad personalmente o por medio de sus delegados. En caso de asistencia personal, ocupará el sitio de preferencia, pero sin presidir ni manifestarse en las discusiones.
Art. 5º. La Autoridad mandará suspender o disolver en el acto:

Primerº: Toda reunión pública que se celebre fuera de las condiciones de esta ley.

Segundo: Todas aquellas que, habiéndose convocado con arreglo a ella, traten de objetos no consignados en el aviso, o se verifiquen en sitio diverso del designado.

Tercero: Los que en cualquier forma embarazan el tránsito público.

Cuarto: Las definidas y enumeradas en el art. 169 del Código penal.

Y quinto: Aquellas en que se cometa o se trate de cometer cualquiera de los delitos especificados en el título 2º, libro 2º del mismo Código.

En todos estos casos, la Autoridad dará inmediatamente cuenta al Gobierno, y en los dos últimos pasará al Tribunal competente el oportuno tanto de culpa.

Art. 6º. Las reuniones a que se refiere el art. 2º, cuando se celebren por los electores de una circunscripción durante el período electoral, podrán ser suspendidas por el delegado de la Autoridad si incurren en algunos de los casos marcados en el art. 5º.

La reunión suspendida podrá verificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, si los que la convocaron lo ponen en conocimiento de la Autoridad: si hubiere lugar...
en este caso a una segunda suspensión, la reunión se entenderá definitivamente disuelta.

Art. 79. No están sujetas a las prescripciones de esta ley:

Primero: las procesiones de culto católico.

Segundo: las reuniones de este mismo culto y la de los demás tolerados, que se verifiquen en los templos o cementerios.

Tercero: las que se verifiquen las asociaciones y establecimientos autorizados, con arreglo a sus estatutos – aprobados por la Autoridad.

Cuarto: las que tengan lugar en las funciones de teatro y demás espectáculos.

Por tanto:

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que – guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio a 15 de Junio de 1880.— YO EL REY.—
El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo.
6) Proyecto de ley, presentado por el Sr. Ministro de la Gobernación, sobre el derecho de asociación de 17 de noviembre de 1861.

A LAS CORTES

La Constitución de la Monarquía consigna en el artículo 13 el derecho de asociación; y el Gobierno de S.M., resuelto a facilitar su ejercicio, ha estudiado el asunto con el interés que su importancia requiere.

Situaciones anteriores se preocuparon también del derecho de asociación; pero las doctrinas reinantes, en unas ocasiones; el recelo con que se miraba, en otras, el ejercicio de aquel derecho, y siempre las dificultades que presenta su regulación, han impedido hasta ahora el plantear miento de claras y terminadas prescripciones legales, adecuadas al estado del país, en que las ideas y convicciones son apuestas por lo general a toda medida preventiva.

... 

Tampoco son posibles los abusos de otras asociaciones que preocupan hoy a los hombres de Estado por el fin que se proponen; si este fin no es lícito, las asociaciones que lo persiguen no tendrán existencia legal, y sus afiliados caerán bajo el peso de las leyes penales existentes; por el contrario, si es lícito el fin que aparece como objeto de las sociedades, sólo serán éstas perniciosas basándose en su organización; pero aún en este caso, no podrán ocultarla largo tiempo a la acción vigilante de las autori-
dades y a la intervención eficaz de la opinión.

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1º. El derecho de asociación para los fines de la vida humana, que en el art. 13º de la Constitución reconoce a los españoles, puede ejercitarse libremente por todos.

Art. 2º. Los fundadores o iniciadoras de una asociación deberán poner en conocimiento de la autoridad gubernativa los reglamentos, estatutos o acuerdos por los que han de regirse, ocho días antes, por lo menos, de la constitución de la sociedad.

Deberá igualmente darse cuenta a la autoridad gubernativa de las modificaciones que se introduzcan en los estatutos de toda asociación.

Según que la asociación tenga carácter local, provincial o general, la autoridad gubernativa que tenga que tener conocimiento de los estatutos será el alcalde respectivo, el gobernador de la provincia o el Ministro de la Gobernación.

Art. 3º. Si pasado el plazo fijado en el artículo precedente no hubiese la autoridad gubernativa devuelto con su sello y firma uno de los ejemplares del escrito y del reglamento, estatutos o acuerdos que deben serán presentados, la asociación podrá constituirse sin necesidad de
esperar la devolución de dichos documentos, no entendiendo
dos por esto que quedan exentos de responsabilidad las –
que resultaran culpables, si los tribunales declararan –
ilícita la asociación constituida.

Art. 49. Cuando de los documentos a que se refiere
los artículos anteriores se deduzca que la asociación por
su objeto o circunstancias pueda ser de las comprendidas
en el art. 198 del Código penal, la autoridad gubernativa
remitirá inmediatamente copia certificada de dichos docu-
mentos al tribunal competente, pero sin impedir se consti-
tuya la sociedad interin no se declare ilícita por provi-
dencia o sentencia ejecutiva de dicho tribunal.

Art. 50. Las reuniones públicas que los asociados ce-
lebran se sujetarán a lo establecido en la ley de 15 de
Junio de 1800.

...  

Art. 102. La autoridad mandará suspender en el acto
toda sesión pública en que los asociados contravengan las
disposiciones de esta ley o del Código penal, pasando in-
mmediatamente al tribunal competente comunicación en que se
haga constar los hechos que hayan motivado la suspensión,
y los nombres de los asociados o concurrentes que los hu-
bieren ejecutado.

...
Artículos adicionales.

Primero. Quedan derogadas las disposiciones anteriores sobre el derecho de asociación que se opongan a la presente ley.

2°. Las asociaciones en la actualidad constituidas y que no estén autorizadas con arreglo a la legislación hasta hoy vigente, cumplirán lo dispuesto en el artículo 18 dentro del plazo de cuarenta días.

Madrid, 17 de noviembre de 1861.- Venancio González.

7) Proposición de ley, del Sr. Amoña, fijando bases para la reconstitución de los gremios, de 28 de mayo de 1862.

PROPOSICIÓN DE LEY

de bases para la reconstitución de los gremios.

Primera. Los gremios son asociaciones voluntarias de las personas que ejercen el mismo oficio o profesión, para procurar el progreso de sus respectivas industrias y auxiliarse recíprocamente en sus necesidades.

Segunda. Bajo su primer objetivo se comprende cuanto tiene relación con el fomento del trabajo humano, y en este sentido, los gremios, sujetándose a las leyes fiscales y reglas de policía, podrán:

1°. Fundar establecimientos para el uso común de los
agremiados en aquellas industrias que por su especial índole los exijan, regulando su aprovechamiento por medio de reglamentos.

2°. Establecer la enseñanza técnica de las materias relacionadas con la industria respectiva.

3°. Establecer por sí o en unión de otros gremios —instituciones de crédito—.

4°. Crear Juntas sindicales de producción y consumo, encargadas de estudiar y gestionar en cuantos asuntos tengan relación con uno u otro objeto, consideradas colectivamente, tales como las que se refieren a la importación y abaratamiento de primeras materias, exportación de productos, facilidad en la circulación de unas y otros, estadísticas, etc., etc.

5°. Repartir entre los contribuyentes del gremio los impuestos que al mismo asigna el Estado.

Tercera. Como asociaciones de carácter benéfico, los gremios podrán:

1°. Crear asilos de párvulos y escuelas de primera enseñanza para adultos.

2°. Establecer cajas de ahorro.

3°. Fundar instituciones de mutualidad encaminadas al socorro de los enfermos, huérfanos e inválidos del trabajo.

4°. Ejercer el patronato de las fundaciones benéficas
que se les encomiende, y vigilar el cumplimiento de las obras públicas que de alguna manera les afecten.

***

Decimatercera. Cuando en cualquier oficio o profesión no se constituya el gremio voluntario con arreglo a las bases anteriores, los contribuyentes del mismo lo constituirán, necesario para hoy, para los efectos del reparto del impuesto.

Palacio del Congreso 26 de Mayo de 1882.— Cirilo Amoredo.— Carlos Testor y Pascual.— Segismundo Moret.— Cristino Martos.— Antonio Martos.— Antonio Cánovas del Castillo.— Jacobo Sales.

8) Ley de Asociaciones. (30 de Junio de 1.887)

Artículo 10. El derecho de asociación que recodoca el art. 13 de la Constitución podrá ejercitarse libremente conforme á lo que se preceptúa en esta ley. En su consecuencia, que quedan sometidas á las disposiciones de la misma las asociaciones para fines religiosos, políticos científicos, artísticos, benéficos y de recreo, ó cualesquiera otros lícitos, que no tengan por único y exclusivo objeto el lucre ó la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios, las sociedades de socorros mútuos, de previsión de patrono y las cooperativas de producción de crédito ó de consumo.
Art. 20. Se exceptúan de las disposiciones de la presente ley:

1°. Las asociaciones de la religión católica autorizadas en España por el Concordato.

Las demás asociaciones religiosas se regirán por esta ley aunque debiendo acomodarse en sus actos las no católicas a los límites señalados por el art. 11 de la Constitución del Estado.

2°. Las sociedades que no siendo de las enumeradas en el art. 1°, se propongan un objeto metamente civil o comercial, en cuyo caso se regirán por las disposiciones del derecho civil del mercantil respectivamente.

3°. Los institutos o corporaciones que existan o funcionan en virtud de leyes especiales.

Art. 30. Sin perjuicio de lo que el Código penal disponga relativamente á los delitos que se cometen con ocasión del ejercicio del derecho de asociación ó por la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente para que las asociaciones se constituyan ó modifiquen el gobernador de la provincia impedirá que funcionen y que celebren reuniones los asociados poniendo los hechos en conocimiento del Juzgado de instrucción correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes á su acuerdo.
Art. 48. Los fundadores o iniciadores de una asociación ocho días por lo menos antes de constituir la presentarán al gobernador de la provincia en que haya de tener aque- lla su domicilio, dos ejemplares, firmados por los mismos de los estatutos, reglamentos, contratos ó acuerdos por los cuales haya de regirse, expresando claramente en ello la denominación y objeto de la asociación, su domicilio, la forma de su administración ó gobierno, los recursos con que cuenta ó con los que se proponga atender ó sus gastos y la aplicación que haya de darse ó los fondos ó haberes sociales caso de disolución.

Las formalidades previadas en el párrafo anterior se exigirán igualmente y deberán llenarse ante el gober- nador de la provincia en que se constituya sucursal, es- tablecimiento ó dependencia de una asociación ya forma- da.

Del mismo modo estarán obligados los fundadores, directos, presidente ó representantes de asociaciones ya constituidas y de sucursales ó dependencias de las misma ó presentar al gobernador de la provincia respectiva dos ejemplares firmados de los acuerdos que introduzcan alg- una modificación al los contratos, estatutos ó reglamen- tos sociales.

Del mismo modo estará obligado los fundadores, di- rectores, presidentes ó representantes de asociaciones
ya constituídas y de sucursales ó dependencias de las mismas, á presentar al gobernador de la provincia respectiva dos ejemplares firmados de los acuerdos que introduzcan algunas modificación en los contratos estatutos ó reglamentos sociales.

En el acto mismo de la presentación se devolverá á los interesados uno de los ejemplares con la firma del gobernador y sello del Gobierno de la provincia anotando en él la fecha en que aquella tenga lugar.

También estarán obligados los directores, presidentes ó representantes de cualquier asociación á dar cuenta dentro del plazo de ocho días de los cambios de domicilio que la asociación verifique.

En el caso de negarse la admisión de los documentos á registro, los interesados podrán levantar acta notarial de la negativa con inserción de los documentos, la cual acta surtirá los efectos de la presentación y admisión de los mismos.

Art. 5º. Trascurrido el plazo de ocho días que señala el párrafo 4 del artículo anterior, la asociación podrá constituirse ó modificarse con arreglo á los estatutos contratos, reglamentos ó acuerdos presentados, salvo lo que se dispone en el artículo siguiente.

Del acta de constitución ó de modificación deberá
entregara copia autorizada al gobernador ó gobernadoras respectivas dentro de los cinco días siguientes á la fecha en que se verifique.

Art. 69. Si los documentos presentados no reúnen las condiciones exigidas en el art. 49, el gobernador los devolverá á los interesados en el plazo de ocho días con expresión de la falta de que adolezcan no pudiendo, por consiguiente, constituirse la asociación mientras la falta no se sujete.

Cuando de los documentos presentados en cumplimiento del mismo art. 49 aparezca que la asociación debe reputarse ilícita con arreglo á las prescripciones del Código penal, el gobernador remitirá inmediatamente copia certificada de aquellos documentos al Tribunal ó Juzgado de instrucción competente, dando conocimiento de ello, dentro del plazo de ocho días que fija el párrafo anterior, á las personas que los hubieren presentado, á los directores, presidentes ó representantes de la asociación, si ésta estuviera ya constituida.

Podrá la asociación constituirse ó reanudar sus funciones, si dentro de los veinte días siguientes á la notificación del acuerdo á que se refiere el párrafo anterior no se confirme por la autoridad judicial la suspensión gubernativa. 
Art. 79. En cada Gobierno de provincia se llevará un registro especial, en el cual se tomará razón de las asociaciones que tengan domicilio o establecimiento en su territorio, á medida que se presenten las actas de constitución. Se consideran parte integrante del registro todos los documentos cuya presentación exige esta ley.

Art. 80. La exigencia legal de las asociaciones se acreditará con certificados expedidos con relación al registro los cuales no podrán negarse á los directores, presidentes ó representantes de las asociación.

Ninguna asociación podrá adoptar una denominación idéntica á la de otra ya registrada en la provincia, á tenor parecida que ambas puedan fácilmente confundirse aplicando el gobernador en este caso lo dispuesto en el párrafo 1º del art. 69.

Art. 99. Los fundadores, directores, presidentes, ó representantes de cualquier asociación darán conocimiento por escrito al gobernador civil en las capitales de provincia, y á la autoridad local en las demás poblaciones, del lugar en que la asociación haya de celebrar sus sesiones ó reuniones generales ordinarias, veinticuatro horas de la celebración de la primera.

Las reuniones generales que celebren ó promuevan
las asociaciones quedarán sujetas á lo establecido en la ley de reuniones públicas cuando se verifiquen fuera del local de la asociación ó en otros días que los designados en los estatutos ó acuerdos comunicados á la autoridad ó cuando se refieran á asuntos extraños á los fines de aquellas, ó permita la asistencia de personas que no pertenezcan á la misma.

Art. 10. Toda asociación llevará y exhibirá la autoridad, cuando éste lo exija, registro de los nombres, apellidos, profesión y domicilios de todos los asociados, con expresión de los individuos que ejerzan en ella cargo de administración, gobierno ó representación. Del nombramiento ó elección de éstos deberá darse conocimiento por escrito al gobernador de la provincia, dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar.

También llevará uno ó varios libros de contabilidad, en los cuales, bajo la responsabilidad de los que ejerzan cargos de administrativos, figurarán todos los ingresos y gastos de la asociación expresando inequivocamente la procedencia de aquellos y la inversión de éstos. Anualmente remitirá un balance general al registro de la provincia.

La falta de cumplimiento de lo prevenido en esta artículo se castigará el gobernador de la provincia con multa de 50 á 150 pesetas á cada uno de los directores ó socios que ejerzan en la asociación algún cargo de gobierno, sin
perjuicio de las responsabilidad civiles o criminales que fueran procedentes.

Art. 11. Las asociaciones que recoidan o distribuyan fondos con destino al auxilio de los asociados, ó á fines de beneficencia, instrucción o regios análogos, formalizarán semestralmente las cuentas de sus ingresos y gastos, poniéndolas en manifiestos á sus socios y entregando un ejemplar de ellas en el Gobierno de la provincia, dentro de los cinco días siguientes á su formalización.

La inobservancia de este artículo se castigará por los medios expresados en el anterior.

Art. 12. La autoridad gubernativa podrá penetrar en cualquier tiempo en el domicilio de una asociación y en el local en que celebre sus reuniones y mandará suspender en el acto toda sesión ó reunión en que se cometa ó acuerde cometer algunos de los delitos definidos en el Código penal.

El gobernador de la provincia podrá también acordar, especificando con toda claridad los fundamentos en que se apoye la suspensión de las funciones de cualquier asociación cuando de su acuerdo ó de los actos de sus individuos como socios resulten méritos bastantes para estimar que deben reputarse ilícitos ó que se han cometido delitos que deben motivar su disolución.
En todo caso, la autoridad gubernamentiva, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su acuerdo, pondrá en conocimiento del Juzgado de instrucción correspondiente, con remisión de antecedentes, los hechos que hayan motivado la suspensión de la asociación ó de sus sesiones, y los nombres de los asociados ó concurrentes que aparezcan responsables de ellos.

La suspensión gubernativa de una asociación quedará sin efecto si antes de los veinte días siguientes al acuerdo fuese confirmada por la autoridad judicial, en virtud de lo previsto en el art. 14.

Art. 13. Los términos que señala esta ley para que la autoridad gubernativa ponga en conocimiento de la judicial los acuerdos que adopte respecto de la asociaciones se entenderán ampliados con arreglo á la de enjuiciamiento criminal, en día por cada 20 kilómetros de distancia cuando la asociación no tenga su domicilio en la capital ó del tribunal competente para instruir las diligencias ó que dieren lugar los hechos que motiven el acuerdo.

Art. 14. La autoridad judicial podrá decretar la suspensión de las funciones de cualquier asociación, desde el instante en que dicta auto de procesamiento por delito que dé lugar á que se acuerde la disolución en la sentencia.

Art. 15. La autoridad judicial será la única competente para decretar la disolución de las asociaciones constitu-
das con arreglo á esta ley.

Deberá acordarla en las sentencias en que declare ilícita una asociación conforme á las disposiciones del Código penal y en las que dictó sobre delitos cometidos en cumplimiento de los acuerdos de la misma.

Podrá también decretarla en las sentencias que dicta contra los asociados por delitos cometidos por los medios que la asociación les proporciona, teniendo en cuenta en cada caso la naturaleza y circunstancias del delito, la índole de los medios empleados y la intervención que la asociación haya tenido en el empleo de dichos medios y en los hechos ejecutados.

Art. 16. Decreta por sentencia firme la disolución de una asociación, no podrá constituirse otra con la misma denominación ni con igual objeto, si este hubiere sido declarado ilícito. Si no lo hubieresido y se constituyera otra asociación con igual denominación ó objeto no podrán formar parte de ellos individuos á quines se hubiese impuesto pena en dicha sentencia.

La suspensión producirá el efecto de impedir que se constituya otra asociación con la misma denominación ó objeto de que formen parte individuos de la asociación suspendida, é incapacitará á los asociados de éste para reunirse en el local de sus sesiones, ó en otro que adoptaren para
ello, durante el tiempo que la suspensión deba subsistir.

Art. 17. De las sentencias o providencias en que se acuerde la disolución o suspensión de las funciones de una asociación, o en que ésta se deje sin efecto, dará la autoridad judicial conocimiento al gobernador de la provincia en el término de segundo día.

Art. 18. Las asociaciones quedan sujetas, en cuanto á la adquisición posesión y disposición de sus bienes, para el caso de disolución á lo que dispongan las leyes civiles respectivas á la propiedad colectiva.

Art. 19. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en cuanto se opongan á la presente ley.

Artículo adicional. Las asociaciones existentes quedan sometidas á las disposiciones de esta ley y deberán cumplir lo dispuesto en el art. 49., si ya no lo hubieren hecho anteriormente, dentro de los cuarenta días siguientes á su publicación en la Gaceta de Madrid, siendo su aplicación, si no lo verifican dentro de este plazo, lo previsto en el artí.39.

9), Circular del Ma de la Gubernación. (6 de Abril de 1.892)

No existe en nuestro país, públicamente constituida, Asociación alguna que por su título, o por fines de su fundación, pueda ser considerada de carácter anarquista, ni por ilícita fuera consentida, pues que las Asociaciones de esta naturaleza tienen el concepto legal de contrarias a la moral pública, según declaraciones del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 28 de Enero de 1.884. Las Sociedades de tal índole hallan por tanto de lleno comprensividad, por prescripción expresa de la Ley, en el art. 198, del Código penal. A esta sanción penal tratan, sin embargo de austrarse los elementos anárquicos de España, extranos algunos á las luchas de la política, y cuidadoso otros de buscar apariencias de existencias legal, mezclándose con aprisionaciones que viven al amparo del derecho común.

Organizados en esfera que no les propia, estos factores de destrucción se mueven y agitan invocando el mejoramiento de las clases obreras, propósito en ellos sólo aparente para burlar la acción de la Autoridad y la severidad de las disposiciones vigentes. Semejante confusión no debe ser en modo alguno tolerante; por lo cual importa y precisa diferenciard el de toda colectividad legal, evitando así que con lemas de protección á los proletarios intenten cometer delitos contra el orden social.
Dolorosa experiencia acréditan la contagiosa influencia que determinados actos punibles ejercen en cerebros exaltados o enfermos de individuos propensos a delinquir; en España, sin embargo, no ha llegado el contagio a tal extremo que sea aventura el aserto de que difícilmente se registrarán entre nosotros atentados como los que con energía y universal reprobación se cometen en otras partes.

El crimen reviste aquí otros caracteres, y, por lo general se perpetra o se intenta arrestando de frente al peligro, con valor digno de las buenas causas. De todas sus suertes, la previsión en materia de tan excepcional gravedad encuentra con motivo legítimo siempre justifica teniendo el Gobierno deber enexcusable de aprestarse a la defensa de los intereses sociales, más e menos gravemente amenazados y de conservar la tranquilidad y la confianza de todos los ciudadanos honrados con resoluciones severas que mantengan la seguridad de personas y haciendas.

En virtud, y para las leyes sean por todos escrupulosamente respetadas, recomiendo a V. S. con el mayor encarecimiento que tenga muy en cuenta las prevenciones siguientes:

4º. Procada V. S. á verificiar un escrupuloso examen de todas las Asociaciones constituidas en esa provincia, cualquiera que sea su objeto, y muy especialmente de las que se relacionen con las clases obreras, y resuelve la sus-
pensión de las que no estén constituidas con arreglo á la ley de Asociaciones y en los términos que establecen los artículos 42 y 43 de la misma.

28. Revisa V.S. todos los expedientes relativos á dichas Asociaciones para comprobar si se observan los preceptos legales y particularmente los comprendidos en los artículos 49, 73, 82, 93, 40 y 44 de la ley citada á imponga, en su caso, las multas que determina el último párrafo del art. 40 por la inobservación de las formalidades previstas.

30. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 42 de la misma ley disponga V. S. en los casos que lo considere conveniente, que Delegados de su Autoridad se personen oportunamente en los asambleas de las Asociaciones para inquirir si por los actos de las mismas, ó con ocasión ó bajo pretexto de su existencia, se infringe la ley ó se comete alguno de los delitos definidos en el Código penal.

40. De igual modo ha de cuidar V.S. de impedir que las Asociaciones se ocupen en objeto distinto del mercado taxativamente en sus respectivos reglamentos; y en caso de que por sus acuerdos, por sus actos ó manifestaciones hubiere motivo fundado para presumir su existencia contraria á la moral pública procesa V.S. á su inmediata suspensión en los términos y forma que establezca en el art. 42, teniendo al efecto en cuenta el concepto de la moral pública que se de-
fin a la sentencia del Tribunal Supremo, Fecha 26 de Ene-
ro de 1884, según la cual, "la Asociación fundada en la anar-
quía y el colectivismo con el propósito de emprender y sosten-
ter la lucha de trabajo contra el capital, y de los tra-
bajadores contra la burguesía, es contraria á la moral pú-
blica, pues contradice la autoridad y la propiedad industrial."

Sin perjuicio de la suspensión que habrá de dictarse
por la Autoridad judicial proceda también como medida guber-
nativa, la aplicación del art. 22 de la ley Provincial, para
corregir las faltas á la moral pública.

5°. Tan pronto como haya terminado la revisión de las
Asociaciones constituidas para conseguir que todas ellas
funcionen dentro de la legalidad existente, remita V.S. á
este Ministerio una sucinta Memoria dando á conocer detalla-
damente la realización de un servicio que debe estimar, para
estos efectos de atención preferente y grande importan-
cia.

6°. Tenga V. S. especial cuidado de que los Delegados
de su Autoridad que asistan á las reuniones públicas con
 arreglo á lo preceptuado en el art. 4° de la Ley de 45 de
Junio de 1.886, observen con gran escrupulosidad lo que
práctica el art. 5° de la misma ley, haciendo responsa-
bles de cualquier tolerancia ó debida en este punto.

Para el mejor acierto en el servicio de que se trata,
la designación de estos Delegados debe recaer en funcionarios de reconocida competencia en Derecho penal y de criterio bastante para distinguir la línea divisoria que separa lo ilícito de lo que no lo sea en los actos de la reunión.

79. Dada la naturaleza de la policía gubernativa y su mercado carácter justicia preventiva en el ejercicio de muchas de sus funciones, mantenga V.S. en esta materia perfecto acuerdo con la Autoridad judicial y recurra al Ministerio fiscal siempre que las circunstancias lo aconsejen, para aunados los esfuerzos de todos, sea el resultado tan satisfactorio como se pretende para la tranquilidad pública.

88. Cuanto á las manifestaciones públicas, acto que se deriva del derecho de reunión, observo V.S. la práctica de cuantas disposiciones están prevenidas en la circular de este Ministerio fecha 22 de Abril de 1891.

98. Encarezco á V.S. también la necesidad de que exista la más perfecta inteligencia entre V.S. y la Autoridad militar para el caso de que se altere el orden por masas tumultuosas, cuya represión exija el concurso de la fuerza del Ejército, en armonía con lo preceptuado en el artículo 24 de la ley Provincial; y en cuanto á los efectos de la resignación del mando llegado que sea el momento oportuno, tenga V.S. presente la circular de 10 de Agosto de 1885, expedida por este Ministerio en la cual se de

230
termina el procedimiento y la legislación aplicables como también lo preceptuado en el art. 237 del Código de Justicia militar, procediendo en toda ocasión de acuerdo con dichas Autoridades.

De Real orden lo comunico á V.S. para los efectos correspondientes. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, 6 de Abril de 1892.— Elduayen.— Sr. Gobernador de la provincia de...

10). Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de 1896, dando instrucciones para perseguir los delitos que puedan cometerse con ocasión del ejercicio de los derechos de Reunión y Asociación.

Sucesos recientes ocurridos con motivo de un accidente lamentable y doloroso, cuya depuración se halla cometida á los Tribunales competentes, me obliga á reclamar la atención de los señores Fiscales de las Audiencias, llamados en primer término á valer por el cumplimiento de las leyes, á fin de que no sea ilusoria la garantía que aquellas otorgan á intereses que el legislador quiso colocar á cubierto de los ataques á insidias que pretenden moverse con evidente menosprecio de la ley.

Nada nuevo habrá de decir á V.S. porque la materia en que voy á ocuparme está perfectamente deslindeada en precept-
tos claros y preciso de nuestro derecho positivo vigente interpretados, además con el acierto que le distingue, por la jurisprudencia del más alto Tribunal de la Nación; pero si entiendo que es esta ocasión oportuna de recordar a los funcionarios todos del Ministerio fiscal, siquiera no lo hayan olvidado, los deberes que sobre ellos pesan, y las iniciativas a que vienen obligados para el respeto a la ley con la mirada fija siempre en los ideales que han de ser su norte y con la viril energía que demanda los intereses todos de que en la esfera judicial tiene que ser custodio y defensor el Ministerio público...

De lo indicado se desprende que según la ley el solo hecho de dar gritos o de ostentar lemas y banderas en público que tiendan a subvertir el orden legal establecido o diga referencia a los delitos de rebelión y sedición haya o no concierto de personas convocadas en cualquiera forma de antemano es punible y generador de delincuencia...

No hay necesidad, en rigor, de buscar apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque de un lado los hechos legales son claros, y de otro, V.S. conoce bien y sigue con referente atención las sabias doctrinas que va sentando en su diaria labor aquel elevado Tribunal; pero me incita a entrar en ese terreno el deseo de desvanecer un error bastante extendido, cual es el de suponer que hu-
bo una época en el Tribunal Supremo estuvo lícito, ó al me-
nos no constitutivo de delito, el grito de "viva la Repú-
blica". Arranca ese error de querer convertir en doctrina
simplas apreciaciones de prueba que, por su propio carác-
ter, excluyen todo límite de generalizaciones. En 12 de E-
nero de 1882 el Tribunal Supremo pronunció, en efecto, sen-
tencia de casación en recurso interpuesto en causa proceden-
te de la Audiencia de Burgos sobre religión. Consiste el he-
cho en que un sujeto, hallándose solo en la plaza del pue-
blo de Carcedo gritó "viva la República", oído con indife-
rencia por alguna que otra persona que salía de la Iglesia.
Encerrado en tan insignificantes proporciones, sin tener si-
quiera auditorio, y sin concurrir ni aún el elemento del es-
cándalo por falta de quien se pudiera escandalizar, el acto
realizado por el procesado no podía estimarse como delito
grave sin evidente exageración y sin el peligro de que re-
sultase injustamente desproporcionada la pena que se impu-
siera.

A partir de esa sentencia que, como V.S. habrá notado,
no autorizada para suponer rectificaciones en la jurispru-
dencia, ésta ha mantenido constantemente el criterio que
informa la presente circular; y si bien se han dictado va-
rios fallos que no conviene perder de vista, uno de ellos,
el día 11 de Abril de 1887, merece especial estudio por lo
explicito y nutrido de doctrina, el 26 de Noviembre de 1888.
Cuando se excita con palabras o actos a atentar contra la forma de gobierno de un modo especialmente no previsto pero de naturaleza análoga a los que son objeto directo de sanción, o cuando en asociaciones, reuniones y asambleas se dan gritos provocativos de rebelión y sedición, se comete delito perseguible de oficio; y los señores fiscales desde que el hecho llegara á su noticia, están obligados á iniciar proceso; sin que las tolerancias, más ó menos disculpables, al amparo de las que hubiesen podido pasar desapercibidos actos semejantes, sean motivo suficiente para excusar al Ministro fiscal del deber en que se halla de procurar siempre y en todo caso el establecimiento del imperio de la ley; bien entendido que la circunstancia de que los Delegados de la Autoridad, que á tales asambleas ó reuniones asistan se abstengan de formular denuncia, bien por entender erróneamente que nada hay que entre en la esfera de la jurisdicción de los Tribunales, bien por otra cualquiera no sólo no ha de ser motivo de abstención por parte del Ministerio público, sino que, lejos de eso ha de estimular doblemente la acción de ésta así para que los hechos punibles se persigan, como también para que no queden sin el condigno castigo las propias omisiones de aquellos funcionarios, dado que bajo cualquier concepto resultan generadoras de responsabilidad penal. Reducida la tarea que me había impuesto á recordar á V. S. lo que las leyes dis-
ponen la interpretación que la jurisprudencia les ha da-
do y las instrucciones anteriores de esta fiscalía, res-
tema manifestar la seguridad que abrasgo de que V. S. res-
ponderá una vez más á la delicada y honrosa misión que
por razón de su cargo desempeña y de que dando á la ma-
tería de que he tratado la importancia que tiene encami-
nará sus actos á que quede impune ninguno de esos deli-
tos que castigados por todas las legislaciones, son más
dignos de este castigo tienen menos razón de ser en los
pueblos regidos por instituciones libres.

Se servirá V. S. acusar recibo de la presente cir-
cular.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 13 de Febrero
de 1896. Luciano Puga.— Sr. Fiscal de la Audiencia de...

11). Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 17
de Noviembre de 1895, dirigida al Ministro fiscal, rela-
tiva al castigo y persecución del anarquismo.

El art. 582 del Código penal castiga como delincuen-
tes á los que por medio de la imprenta, el grabado u otro
medio mecánico de publicación provocan directamente á la
perpetración de algún delito, y el núm. 4º, del 584, co-
mo autores de falta á quien emplean iguales medios para
hacer la apología de acciones calificadas también de de-
Fanáticos secuaces de doctrina servidas en nuestra Nación y fuera de ella por criminales empeños colectivos de desarraigar por el fuego y por el terroso, condiciones perdurables de la sociedad llevan su audacia hasta hacer gala en la prensa periódica de sus reprobables designios y de propósitos exterminadores de cuanto vive al amparo del derecho positivo. Validos de escritos propios o de conferencias a la imprenta destinadas se atreven unas veces al público elogio de crímenes perpetrados y al ensalzamiento de sus autores, y llegan otras a excitarse sin rebozo y a provocar sin respeto de la moral ni de la ley a la ejecución de esos gravísimos delitos que exacerba la conciencia humana. Aumentan así con doble quebranto del reposo social la justa y extensa alarma y la piadosa pesadumbre que produce la vista de la fría sahidad con que al azar se vierte sangre inocente y de la asombrosa indiferencia con que se reparten sin provecho daños y males, lágrimas y lutos.

Tales aplausos y tales provocaciones no son solamente desvaríos de espíritus ciegos. Con esa impudencia manifiesto, reclama sancción penal. La ley es la señala. Y la ley ha de ser severamente cumplida. Es defensa de la
sociedad y de los ciudadanos y unos y otra tienen dere-
cho á que con severidad se cumpla.

Al Ministerio fiscal ayudado, como es de esperar
que lo sea, por las Autoridades gubernativas, toca cui-
dar asiduamente de su observancia y precaver olvido y de-
satención. Confio en que sus funciones serán fieles, sin
vacilación y con energía, si es necesaria, á todos sus
débres. V.S. y sus inmediatos auxiliares al intervenir
en los procesos por delito ó promoviéndoles; V. S. ade-
más poniendo en ejercicio su Autoridad, mediante instruc-
ciones adecuadas que dice para la dirección que le com-
pete de los fiscales municipales, en lo que pertenece á
la esfera en que estos sus sobordinados actúan y todos
procurando que, cuando se realicen las indicadas y cuan-
tas acciones el Código penal declara punibles la de nues-
tro ministerio se haga sentir tan inmediata como inexo-
rable.

Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 17 de Noviem-
bro de 1.893.— Martínez del Camps.— Sr. Fiscal de la
Audencia de ...

12) Ley de 10 de Julio, de 1.894, fijando las penas en que
incurren los que atentan á las personas y cometen daño
en las cosas por medio de sustancias ó aparatos explosivos.
(Gaceta de 11).

D. Alfonso XIII, etc.

Artículo 1º. El que atentare contra las personas ó causa daño en las cosas, empleando para ello sustancias ó explosivos, será castigado:

Primero. Con la pena de cárcel perpetua ó muerte, si por consecuencia de la explosión resultare alguna persona muerta ó lesionada.

Con la misma pena si se verifica la explosión en edificio público, lugar habitado ó donde hubiere riesgo para las personas y resultare daño en las cosas.

Segundo. Con la de cárcel temporal en su grado máximo á muerte si se verifica ó la explosión en edificio público, lugar habitado ó donde hubiere riesgo para las personas, aunque no resultare daño en las cosas.

Tercero. Con la cadena temporal en los demás casos si la explosión se verifica.

Art. 2º. El que colocare sustancias ó aparatos explosivos en cualquier sitio público ó de propiedad particular para atender contra las personas ó causar daño en las cosas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, á cadena temporal en su grado medio.
si la explosión no se verifique.

El que empleare sustancias ó aparatos explosivos para producir alarma, será castigado con la pena de presidio mayor si la explosión se verifique y con la presidio correccional en su grado medio á la de presidio mayor en su grado mínimo si la explosión no tuviera lugar.

Las penas del presente artículo serán aplicadas á los hechos en él comprendidos, á menos que el resultado de los mismos esté castigado con otras mayores en el Código penal.

Art. 38. El que tenga, fabrique, facilite ó venda sustancias ó aparatos explosivos, será castigador.

Primero. Con la pena de presidio correccional ó presidio mayor, cuando destineas ó supiese que se desti-
nan las sustancias ó aparatos explosivos á la ejecución de alguno de los delitos castigados en esta ley.

Segundo. Cuando la pena de presidio correccional ó presidio mayor en su grado mínimo cuando existieran mo-
tivos racionales para afirmar que el tenedor, fabricante ó vendedor de sustancias ó aparatos explosivos sospechaba que habían de ser empleados en la ejecución de los referi-
dos delitos.

Tercero. Con la pena de arresto mayor, si hubiera cometido únicamente la infracción de los reglamentos re-
ativos a la fabricación, tenencia y venta de las sustancias o aparatos explosivos.

En la aplicación de las penas de este artículo procederán los Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso.

Lo dispuesto en el núm. 1º de este artículo no tendrá lugar cuando los actos ejecutados por el culpable constituyan además delito castigado con mayor pena en esta ley ó en el Código penal.

Art. 4º. La conspiración para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en esta ley, será castigada con la pena inferior en dos grados a la señalada al delito más grave de los que se trate de cometer.

La propuesta encaminada al mismo fin, se castigará con la pena inferior en tres grados a la correspondiente al más grave de los delitos que fuieren objeto de la proposición.

Art. 5º El que amenazase con causa algún mal de los previstos en el art. 1º de esta ley aunque la amenaza no sea condicional, será castigado con la pena inferior
en dos grados á la señalada en dicho artículo para el delito respectivo.

Art. 69. El que aun sin inducir directamente á otros á ejecutar cualesquiera de los delitos enumerados en los artículos anteriores, provocar de palabra, por escrito, por la imprenta, el grabado ó otro medio de publicación á la perpetración de dichos,curriráá en la pena señalada a los autores respectivos, sí á la provocación hubiere seguido la perpetración, y en la inferior en un grado cuando no se realizase el delito.

Art. 79. La apología de los delitos ó de los delincuentes penados por esta ley será castigada con presidio correcional.

Art. 89. Las asociaciones en que de cualquier forma se facilite la comisión de los delitos comprendidos en esta ley, se reputarán ilícitas y serán disueltas, aplicaciones, en cuanto a su suspensión lo dispuesto en la ley de Asociaciones, sin perjuicio de las penas en que incurran los individuos de las mismas asociaciones por los delitos que respectivamente hubieran cometido.

Art. 99. Corresponde al Tribunal del jurado el conc-
cimiente de las causas que se instruyan por cualquiera de los delitos á que se refiere esta ley.

Art. 40. En la instrucción de dichas causas los jueces respectivos practicarán con urgencia todas las actuaciones, omitiendo las que no fueran precisas para determinar las circunstancias del delito y la responsabilidad de los culpables y emplearán los procedimientos más rápidos para hacer constar cuando fuera necesario a dicho objeto la edad é identidad de los presuntos culpables.

Cuando sean varios los procesados, el Juez instructor podrá acordar la formación de las separadas que estime conveniente y activar los procedimientos á fin de que no se dilate el castigo de los que resulten confesor y convictos.

Los Tribunales corregirán severamente á los responsables de las dilaciones injustificadas que observen en la instrucción de los sumarios.

Art. 11. Terminado el sumario por el Juez instructor lo remitirá á la Audiencia, con un emplazamiento de las partes por término de cinco días.
Llegados los autos á la Audiencia, ésta en el término de tercer día confirmará el auto de terminación del sumario, ó mandará si lo entima indispensable, practicar las diligencias que, solicitadas por las partes acusadoras hubiesen sido denegadas por el Juez.

Confirmado el auto de terminación, se comunicará inmediatamente por tres días al Fiscal, y después por igual plazo al acusador privado si en caso de haberlo hubiere comparecido. Uno y otro solicitarán por escrito el sobreseimiento, la inhibición ó la apertura del juicio. En este último caso, formularán las conclusiones provisionales y articularán las pruebas de que intentan valerse.

La Audiencia acordará el sobreseimiento el inhibición en los casos en que la ley impone estas resoluciones y se declarará la apertura del juicio en los demás.

Si el acusado ó los acusados no nombrasen defender se hará la designación de oficio, en cuyo caso las defensas lugar bajo una sola dirección si no fuesen incompatibles.

La Audiencia dispondrá que se pongan los autos de manifiesto en la Secretaría á los distintos defensores para su instrucción en el plazo que señale, y que no de-
berá exceder de días comunes para todos.

Si el defensor se excusaren de asistir al juicio por cualquier causa que al Tribunal no estime debidamente justificada, se nombrará defensor de oficio.

Art. 42. Inmediatamente que la causa se halle en estado de ser sometida al Jurado, el Tribunal dispondrá lo conveniente para que de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del art. 43 de la ley del jurado, se reúna desde luego el correspondiente al partido de donde proceda la causa, aun cuando no se haya verificado el alrde general y la vista de estas causas se celebrará con preferencia a la de cualesquiera otras, aunque estuviesen señaladas con anterioridad.

Cuando se someta la causa al conocimiento de un nuevo Jurado, deberá tener lugar el segundo juicio dentro de los quince días siguientes á la terminación del primero,

Art. 43. Las competencias que se promuevan con ocasión de las causas que se refiere la presentación de la ley entre Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, se sustanciarán con arreglo á lo dispuesto en el artículo 782 de la ley de Enjuiciamiento criminal.
Art. 44. El término para preparar el recurso de casación por infracción de ley, será de dos días, contados desde la publicación de la sentencia.

En el mismo plazo se podrá interponer recurso por quebrantamiento de forma y anunciar el infracción de ley.

Dentro del término del emplazamiento se formaliza rá el recurso por infracción de ley si se hubiere anunciado o preparado.

Ambos recursos, si se hubieren interpuesto, se sustanciarán conjuntamente en el Tribunal Supremo, y los autos se podrán de manifiesto a las partes en los trasladados que proceda.

El tribunal Supremo sustanciará y resolverá estos recursos con preferencia a los demás, aún cuando sea en el periodo de vacaciones.

Disposición Final

Se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código penal y en las leyes de Enjuiciamiento criminal y el Jurado, tanto general como especial, en todo lo que se hallen expresamente modificadas por la presente ley.

Por tanto mandamos, etc.
Dado en Palacio el día de julio de mil ochocientos noventa y cuatro.

—Yo la Reina Regente.— El ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepón.

13) Ley de 2 de septiembre de 1896, fijando las penas en que incurren las que atentan contra las versiones, o causan daño en las cosas empleando para ello sustancias o aparatos explosivos o materias inflamables. (Gaceta de 7 de diciembre)

D. Alfonso XIII, etc.

Art. 49. El que atentar contra las personas o causare daño en las cosas, empleando para ello sustancias o aparatos explosivos, o materias inflamables será castigado:

Primero: Con la pena de muerte si por consecuencia de la explosión resultare alguna persona muerta.

Segundo. Con la pena de cadena perpetua ó muerte, si por consecuencia de la explosión resultare alguna persona lesionada, ó se verificase la explosión en edificio público, lugar habitado ó donde hubiere riesgo para las personas y resultare daño en las cosas.
Cuarto. Con le de cadena temporal en los demás casos si la explosión se verifica.

Quinto con le de presidio mayor en su grado máximo a cadena temporal en su grado medio si la explosión no se verifiques.

Art. 28. Los delitos á que se refiere el artículo anterior serán juzgados por la jurisdicción militar, debiendo ésta proceder en juicio sumarísimo si el delito fuese flagrante.

Los demás delitos no comprendidos en estalay castigados con arreglo á la prescrita en la de 40 de Julio de 1894, y en los Códigos penal de Justicia militar y de Marina de guerra comociendo de las causas que se instruyan por ellos los Tribunales de derecho de la jurisdicción ordinaria, ó en su caso, los Tribunales militares.

Art. 30. Los Tribunales que conozcan de las causas por delitos comprendidos en la presente ley, proporcerán al Gobierno la rebaja ó comuéntación de la pena si entendieren que ésta es notablemente excesiva, atendidas las circunstancias del hecho ó del delincuente.

Art. 40. El Gobierno podrá suprimir los peródi-
cos y centros anarquista y cerrar los establecimientos y lugares de recreo donde los anarquistas se reúnen habitualmente para concertar sus planes o verificar su propaganda.

También podrá hacer salir del Reino a las personas que de palabra, por escrito, por la imprenta, grabado u otro medio de publicidad, propaguen ideas anarquistas o formen parte de las Asociaciones comprendidas en el art. 51 de la ley de 40 de julio de 1894.

Si el extranjero en esta forma volviese á la Península, será sometido á los Tribunales y castigado por haber quebrantado el extranjamiento con la pena de relegación á una colonia lejana por el tiempo que los Tribunales fijen en cada caso, pero que nunca podrá ser menos de tres años, quedando allí sujeto al régimen disciplinario que, según la conducta que, según la conducta que observe, consideren indispensable las Autoridades militares.

Los acuerdos á que se refieren los párrafos anteriores se adoptarán en Consejo de Ministros y previo informe de la Junta de Autoridad de la capital de la respectiva provincia.

Art. 59. Lo prescrito en el artículo anterior só-
se aplicará con relación al territorio que el Gobierno, por decreto acordado en Consejo de Ministros señaló.

Art. 69. Por los Ministros de Gracia y Justicia de la Guerra de Marina y de la Gobernación, se darán las instrucciones convenientes para la ejecución de esta ley.

Art. 79. La presente ley permanecerá en vigor durante tres años.

Terminados éstos, necesitará ser ratificada por las Cortes.

Sí el aspirar al plazo señalado en el párrafo anterior no estuvieren las Cortes reunidas, el Gobierno podrá acordar que continue rigiendo por un año más dando cuenta á las Cortes tan pronto como se reúnan.

Art. 89. Quedan en vigor las disposiciones de la ley de 40 de Julio de 1.894, que no estén modificadas por la presente.

Art. 99. El art. 13 de la misma ley será aplicable á las contiendas de jurisdicción entre los tribunales militares y los civiles, con las modificaciones que respecto al Tribunal que ha de decidir la competencia se establece en el Código de Justicia militar.
Por tanto, mandamos, etc.

Dado en San Sebastián á dos de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis.- Yo la Reina Regente.- El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

14) Real decreto de 16 de Septiembre de 1896, considerando en vigor desde promulgación las disposiciones de la ley de 2 del mismo, sobre señalamiento de penas y sobre competencia de la jurisdicción militar para los delitos perpetrados con el empleo de sustancias ó explosivos ó materias inflamables. (Gaceta de 18).

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino.

Vengo en decretar lo siguiente, de acuerdo con el Consejo de Ministros:

Art. 4º. Las disposiciones de la ley de 2 de este mes sobre señalamiento de penas y sobre competencia de la jurisdicción militar para los delitos perpetrados con el empleo de sustancias ó aparatos explosivos ó materias inflamables se consideran en vigor y con toda su eficacia legal desde su promulgación con arreglo a lo que la misma ley ordena.

Art. 2º Las prescripciones de su art. 4º sobre facu-
tades gubernativas para la supresión de periódicos y centros anarquistas, y para el extrañamiento de los propagadores de ideas anarquistas, y para el extrañamiento de los propagadores de ideas anarquistas y de los afiliados a asociaciones comprendidas en el art. 31 de la ley de 10 de julio de 1.894, sólo se aplicarán por ahora en las provincias de Madrid y Barcelona.

Dato de San Sebastián a diciembre de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis. — María Cristina —
El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

15) Real orden de 19 de septiembre de 1.896, creando un Cuerpo de policía judicial, destinado al descubrimiento y persecución de los delitos que se cometen por medio de explosivos, el cual prestará sus servicios por ahora en Madrid y en Barcelona. (Gaceta de 20)

Ilmo. Sr. Promulgador: en el corriente la ley sobre represión del anarquismo, en que se encomienda á este Ministerio la tarea de dictar las disposiciones necesarias para su ejecución, y concedida por la ley de 48 del corriente mes un crédito de 125.000 pesetas para organizar un servicio especial de policía judicial, que tenga por objeto el descubrimiento y
persecución de los delitos que se cometen ó se inten-
zan ó se intente cometer por medio de explosivos, se
ha estudiado la mejor forma de plantamiento de dicho
servicio, teniendo en cuenta las necesidades que
responde la creación de este policy, los datos pedi-
didos á algunos Tribunales y facilitado por medio de
los mismos y cuantas circunstancias se ha estimado
necesario atender para dar verdadera eficacia á sus
funciones.

Por hoy y teniendo en cuenta que aparte de hechos
aislados y que no pueden constituir base de fundada
alarma, los atentados anarquistas sólo se han verifi-
cado en Madrid y Barcelona, siendo en esta última don-
de mayor gravedad revistieron, basta que el estableci-
miento de la nueva política se circunscriba á ambas
capitales, si bien dotando á Barcelona de mayor núme-
ro de individuos de aquélla, por la mayor importancia
que han tenido hasta ahora y lo más frecuentes que
fueron allí los delitos cometidos por medio de ex-
plorivos.

La intervención que tienen en la persecución
y castigo de estos delitos las Autoridades militares—
y la consideración de que los servicios del nuevo Cuer-
po serán tanto más eficaces cuanto más desciplinado
eiste, han hecho pensar en la conveniencia de que al Jefe que manda á los nuevos agentes así en Madrid como en Barcelona, proceda del ejército, y que los individuos todos que constituyan el Cuerpo sean nombrados previo al informe de la Autoridad militar del distrito y de la civil de la provincia, que unido á la designación por la judicicial, será una garantía de la idoneidad y condiciones de los agentes que se nombran.

No puede empero dejar de tomarse en cuenta la circunstancia de que los atentados contra el orden social llevados á efecto por medio de explosivos si bien en determinados momentos pueden exigir toda la actividad de los funcionarios del Cuerpo que se crea y aun resultar este Cuerpo poco numeroso, en tiempo normales y de escasa ó ninguna agitación permanecerán inactivos dichos funcionarios y en ese caso sus servicios pueden ser utilizados para prestar otros análogos á los que principalmente les están encomendados, ejercitando en auxiliar á los Tribunales de justicia y al Autoridades respectivas en la investigación y persecución de los delitos comunes.

Por todo lo expuesto, S. M. la Reina (G.D.G.) Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo Ha tenido á bien disponer:

19. En cumplimiento de lo dispuesto en la citada ley
sobre represión del anarquismo y utilizando la concesión del crédito hecho por la relativa a la organización de un servicio especial de policía judicial contra los delitos que se cometen o se intente cometer por medio de explosivos se crea un Cuerpo de policía judicial destinado al descubrimiento y persecución de dichos delitos, el cual prestará sus servicios por ahora en Madrid y Barcelona.

En este Cuerpo constará de dos secciones una en Madrid compuesta de un Jefe militar, a quien se le asignará una gratificación anual de 4,000 pesetas; un Subjefe, que disfutan el haber de 3,500 pesetas, y 11 agentes, retribuidos con 2,000 pesetas cada uno.

Otro en Barcelona, formado por un Jefe militar y un Subjefe que disfrutarán de la misma gratificación y haber que los de Madrid y 23 agentes igualmente retribuidos con 2,000 pesetas.

3° El Jefe militar será nombrado por el Comandante en Jefe del Cuerpo de Ejército correspondiente. El resto del personal por el Presidente de la Audiencia, previa informes del mismo Comandante en Jefe y el Gobernador civil de la provincia.

4° Los funcionarios que ingresen en el Cuerpo no podrán ser separados del servicio sin expediente en que susa—
riamente se haga constar su unaptitud ó mala conducta. Si del expediente resultaren estas comprobadas, el Presidente de la Audiencia respectiva dispondrá su separación y procederá á nombrar al que haya de ocupar vacante, cumpliendo lo que dispone el artículo anterior.

6. El sobrante de 18.000 pesetas que, cubiertas las atenciones del personal que establece el art. 39, resulta del crédito presupuesto de 125.000 se destinará á gastos de investigación y á premiar los méritos especiales contraídos por los individuos del Cuerpo en el desempeño de sus funciones: Para ello se asignarán á Madrid 18.000 pesetas y á Barcelona 36.000 siendo la aplicación de estos fondos atribución del Presidente de la Audiencia previa propuesta á informe de la Audiencia que quedan mencionadas, según, su caso. El total asignado á cada una de las citadas capitales podrá tener distinta distribución entre las dos atenciones de premios y gastos de investigación y entre los que causen en ambas poblaciones según las necesidades del servicio.

69. Cuando las circunstancias lo permita, los Presidentes de las Audiencias encenderán á la nueva policía, sin perjuicio de sus funciones principales, la prestar su auxilio á los Tribunales y á las Autoridades en la investigación de los delitos comunes.

78 Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para llegar á cumplido efec-
Lo que de Real orden comunica a V. I para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde a V. I. Muchos años.
San Sebastián 19 de Septiembre de 1896.—Tejada.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

16) Real de 7 de Octubre de 1896, disponiéndose proceda desde luego á la organización de la policía judicial especial contra los delitos por medio de explosivos en los términos que se establecen en la Real orden de 19 de Septiembre de 1896. (Cátedra de II).

Ilmos. Sres: En cumplimiento de lo previsto en el num. 7º de la Real orden de 19 de Septiembre último:

S. M. la Reina (D.D.O.) Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo, ha tenido á bien disponer que proceda V. I. desde luego á la organización de la policía judicial especial contra los delitos cometidos por medio de explosivos, en los términos que dicha Real orden establece, á fin de que se halle constituida y comience á funcionar el día 1º de Noviembre próximo consultando V. I. directamente con este Ministerio las dudas que puedan ocurrir.

1) **Sentencia de (11 de Enero de 1873).**

En la villa y Corte de Madrid, a 11 de Enero de 1873 en el recurso de casación por infracción de ley que — ante Nos pendía...

Resultando que en 21 de Abril de 1873 los operarios de la fábrica de papel de D. Facundo Victoria se declararon en huelga y dirigieron al propietario algunas comunicaciones con el sello de "Sección Internacional de papeleros de Cogen- taina", a que pertenecían aquellos en su mayor parte, haciéndole exigencias reducidas substancialmente a que despidiera — los obreros no afiliados a dicha Sociedad, volviendo a admitir a los huelguistas y satisfaciendo a la Sección 328 pese- tas a que ascendían los gastos de la huelga; que una de las comunicaciones lleva la firma de Gabriel Botella como Presidente de la Asociación, y José Mullor como Secretario, y otra está firmada por la Junta Internacional de obreros de Cogen- taina y rubricada, en la que se expresa que todos están conforme y unidos para conseguir el triunfo de La Internacional contra los exploradores, anunciando al fabricante que al día siguiente se encontraría solo en el molino; y no aceptando — Victoria las condiciones citadas, suspendió los trabajos de su fábrica por falta de operarios, y acudió a otros, cuyos o- breros se negaron a elaborar papel con las marcas de Victoria, existiendo alguna indicación de que fue por acuerdo de La In- ternacional:

Resultando que a poco de ocurrir los sucesos de Al-
coy, que por aquel tiempo tuvieron lugar, se presentó D. Nicolás Abad, Gerente de la fábrica de Victoria, a una Comisión internacionalista de aquella ciudad, para tratar sobre la vuelta de los operarios a la fábrica, y como le indicasen que el asunto competía a sus compañeros de Coextaina, se avistó con estos, consiguiendo su propósito mediante la promesa de entregar 6.000 rs. a la Sociedad por los perjuicios ocasionados con la huelga; y transcurrido algún tiempo sin que el Gerente ni —el dueño de la fábrica entregasen dicha cantidad, se dirigió una comunicación al primero por la Asamblea de La Internacional, firmada por su Secretario José Torregrosa, recordando el cumplimiento del convenio entregando los 6.000 rs. que necesitaba la de Alcoy para el pago de gastos, y no habiendo dado esa cantidad, sabiendo los afiliados de La Internacional que —se había cobrado una letra por cuenta del Abad, salió al camino una Comisión al encuentro del conductor para que se los satisfaciera aquella, conviniendo por fin en entregarla descontando las que ya tenían recibidas los huelguistas, interviniendo en la entrega y dación del recibo el Notario Sr. Barrachina, quien confiesa tuvo por voluntaria la entrega hecha por Abad... 

Considerando que por el párrafo tercero del art. 17 de la Constitución del Estado de 1859, vigente cuando ocurrieron los hechos de la causa, y que se invoca como infringido, —no podía ser privado ningún español del derecho de asociarse para los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública; reputándose asociaciones ilícitas por el artículo 198 del Código penal las que por su objeto o circunstancias sean contrarias a la moral pública, y las que tengan
por objeto cometer alguno de los delitos penados en el Código, y castigándose en el art. 200 los meros individuos de dichas asociaciones:

Considerando que penados en esta causa ejecutoriamente por no haberse interpuesto recurso de casación los que se coligaron con el fin de encarecer abusivamente el precio del trabajo o regular sus condiciones; y absueltos los recurrentes del delito de amenazas y coacciones, y del anónimo —que se dirigió a D. Facundo Victoria, no debió la Sala condenarlos por la única circunstancia de confesar haber pertenecido a la Asociación de La Internacional de papeleros de Comenta, que no consta estuviera afiliada a la general, sino por el contrario, los procesados trataron de probar que constituían una Sociedad cooperativa de trabajadores:

Considerando que no se consigna tampoco ningún antecedente en la sentencia de la organización, planes y estatutos de dicha asociación más que lo referido en los resultando sobre la muela para encarecer el precio de los jornales, y en cuyos hechos no figuran la mayoría de los recurrentes que han sido declarados culpables, no de los delitos principalmente —perseguidos en la causa y alguno penado, cuya es el de la obligación, sino porque confesaron, según queda dicho, haber pertenecido a la referida Asociación, que no está probado sea contraria a la moral pública, infrigiéndose en la sentencia, bajo tal concepto, las disposiciones legales citadas vigentes en Abril de 1873, y que es preciso aplicar por haber ocurrido entonces los hechos denunciados;

Hallamos que debemos declarar y declaramos haber lu-
gar al recurso de casación interpuesto...

2) Sentencia de (19 de Junio de 1879)

En la villa y Corte de Madrid, a 19 de Junio de 1879, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pendía...

Resultando que en el mes de Julio de 1873 existió en la villa de Bocairente una Sociedad titulada La Internacional de los trabajadores, sección de tejedores de Cocosíente, a la que pertenecieron los que hoy recurren en casación y se adhieren al recurso, presididos repetidas veces por Juan Bautista Mira, la cual tenía por objeto, entre otros, conseguir el aumento del jornal o precio de trabajo, a cuyo fin satisfacía cada individuo un real mensual destinado a cubrir las necesidades de los asociados en las épocas en que no tenían trabajo o se constituían en huelga, nombrando una comisión especial compuesta de Juan, Enrique y Jaime Miralles y Vicente Santója, para intervenir y arreglar todo lo concerniente al aumento del jornal y disminución de horas de trabajo, la que trató con otros que nombraron los fabricantes de tejidos de lana y filaturas, celebrando reuniones bajo la presidencia del entonces Alcalde D. Franciscico Belda, y extendiéndose las oportunas actas, conviniendo la mayoría de los que formaron la comisión de los fabricantes en que si acedieron al aumento del jornal y disminución de horas del trabajo fue por los escritos y palabras amenazadoras de aquellos, por las circunstancias que en aquella época se atravesaban y por temor de que ocurriese
...sen actos más desagradables; habiéndose visto amenazados también varios trabajadores que no pertenecían a la asociación y obligados a ausentarse de la población por temor de que les maltratasesen por asistir a las fábricas....

Resultando que la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valencia, revocando la sentencia consultada, declaró que los hechos probados constituyen los delitos de asociación ilícita y coligación para encarecer abusivamente el precio del trabajo y regular sus condiciones, siendo el uno medio - necesario para cometer el otro...

Considerando que al tenor del art. 198 del Código penal vigente se reputan asociaciones ilícitas: primero, las que por su objeto o circunstancias sean contrarias a la moral pública; y segundo, las que tengan por objeto cometer alguno de los delitos penados penados en el Código:

Considérando que deduciéndose de los hechos declarados probados que la Asociación titulada Internacional de los trabajadores, sección de tejedores de Bocairente, por su objeto de conseguir aumento de jornal o precio del trabajo y disminución de horas del mismo, no contraría a las reglas y preceptos de moral, ni fue por consiguiente ilícita por su objeto y circunstancias, que es lo que en su letra y espíritu exige ya mencionado art. 198 para que la mera asociación constituya delito, y sin duda alguna ha desconocido la Sala al calificarlo y penarlo en el caso presente, infringiendo de este modo el art. 17 de la Constitución entonces vigente de 1869,
también invocado por los recurrentes:

Considerando que, no obstante coligados éstos y los demás procesados para encarecer el precio de su trabajo y regular además sus condiciones de duración, al hacerlo abusivamente empleando al efecto la coacción y, la amenaza, es visto que incurrieron en delito, conforme al art. 556 no infringido, y antes bien rectamente aplicado por la Sala sentenciadora;

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber —lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto...

3) Sentencia de (11 de Octubre de 1880)

Considerando que, según el art. 193 del Código penal, no son reuniones o manifestaciones pacíficas, entre otras, las que se celebren con infracción de las disposiciones de policía; y según el 199, las promotoras y directoras de las que se celebran sin haber puesto por escrito en conocimiento de la —Autoridad, con 24 horas de anticipación, el objeto, tiempo y lugar de la celebración, incurrirán en la pena de arresto mayor y multa de 125 a 1,200 pesetas;

Considerando que por el art. 193 del citado Código se reputan directoras de aquellas los que por sus discursos impresos, publicados o repartidos, por los lemas, banderas y otros signos que hubieren ostentado, o por cualesquiera otros hechos aparecieran como inspiradoras de sus actos:
Considerando que, según los hechos declarados como probados en la sentencia, la reunión objeto de la causa ha sido bien calificada de ilícita, porque para celebrarla no se puso en conocimiento de la Autoridad su objeto, ni se obtuvo el permiso escrito de la misma, conforme a la circular de 5 de Julio de 1875, declarada ley por la de 2 de Enero de 1877...

4) Sentencia de (12 de Enero de 1882)

En la villa y corte de Madrid, a 12 de Enero de 1882, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende.....

Resultando que en ocasión de salir la gente de la iglesia en Cacerón de Pareba, Lorenzo Alonso Lucas dio voces de "viva la República," cuyo hecho puesto por el Alcalde en conocimiento del Gobernador de la provincia, se ha acreditado en la causa seguida al mismo:

Resultando que la Sala de lo criminal de la Audiencia de Burgos declaró que el hecho constituye el delito previsto y penado en el artículo 273 del Código...

Considerando que son reos de delito de desorden público, al tenor del art. 273 que aplicaba la Sala sentenciadora, y cuya infracción se alega por el recurrente Lorenzo Alonso Lucas, los que dieron gritos provocativos y rebelión y sedición en cualquiera reunión o asociación o en lugar público, u ostentaren en los mismos sitios lemas o banderas que provocan—
ren directamente a la alteración del orden público:

Considerando que el mero grito de viva la República, proferido en la plaza por Alonso Lucas, hallándose solo, y oyéndolo con indiferencia alguna que otra persona al salir de la iglesia, en cuanto no puede considerarse dirigido a producir ninguno de los objetos taxativamente inductivos de rebelión y sedición, conforme a los artículos 243 y 250 del Código, y en cuanto no parece que directamente provocase a la alteración del orden público, es consiguiente que no puede constituir el mencionado delito de desorden público que el citado art. 273 define y castiga:

Considerando que es por tanto errónea la aplicación que del mismo hace la Sala al caso presente...

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto...

5) Sentencia de (26 de Enero de 1884)

En la villa y corte de Madrid, a 26 de Enero de 1884, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende...

Resultando que a las once de la noche del 24 de Febrero último, con noticias reservadas de la existencia de una sociedad internacional clandestina, el Alférez de la Guardia civil de la línea de Cartagena Don Juan Vallén Segundo, acom-
pañado de la correspondiente fuerza del cuerpo y del Juez mu-
nicipal de Juzcar, comprendió en una casa de la calle de la -
Cruc de dicha villa a 38 individuos pertenecientes a una so-
ciedad o asociación denominada Federación del Júzcar, ocupán-
dole un libro de actas que da principio con la constitución de
la Federación, su fecha 17 de Octubre de 1862, y termina con
la iniciada en la expresada noche 24 de Febrero último, en la
que se observa que los socios ocultan cautelosamente sus nom-
bres, se conocen y distinguen por números, y que esto llega al
99 elegido. Secretario: una cartera con varios documentos,
entre los que se halla el título impreso de socio del federa-
do Juan Rodríguez Blanco, que principia: "Federación de traba-
jadores de la región española," autorizada por el Presidente y
Secretario de la Sección, con iniciales y un sello, que en su
orla y centro dice: "Federación local, Sección de agricultores"
el reglamento orgánico y manuscrito de la Federación, en el
que se consigna que los principios de la misma son anárquicos
collectivistas, lucha del trabajo contra el capital y de los
trabajadores contra la burguesía; se entrevió una organización
ministeriosa y se habla de peligros; los números de los perió-
dicos Revista Social. El defensor del Pueblo, cuatro libros y
varios papeles, y una caja para sellar, pero sin sello...

Resultando que, según el libro de actas, se ha reu-
nido la asociación 29 veces, que los socios ignoran si está
competentemente autorizada, y que no consta se hayan presente-
da a la Autoridad para su aprobación los estatutos o reglamen-
tos que acreditan la vida legal de la misma...
Resultando que calificados estos hechos como constitutivos del delito de asociación ilícita, cometida con ocasión del ejercicio de los derechos individuales, comprendidos en los números 1º y 2º del art. 198, y castigado en los 199 y 200 del Código penal...

Considerando que, según determina el art. 198 del Código penal se reputan asociaciones ilícitas las que por su objeto o circunstancias sean contrarias a la moral pública, y las que tengan por objeto cometer algunos de los delitos penados en dicho Código;

Considerando que el concepto de la moral en el terreno legal significa la conformidad de las acciones del hombre con las leyes naturales y positivas, en cuyo sentido la moral pública es referente a las acciones que salen de la esfera privada y trascienden a afectan a los intereses generales de la sociedad;

Considerando que siendo principios fundamentales de la asociación titulada Federación de trabajadores, de que los recurrentes formaban parte, la anarquía y el colectivismo, y proponiéndose emprender y sostener la lucha del trabajo contra el capital y de los trabajadores contra la burguesía, es indudable que dicha asociación, tanto por su objeto como por sus circunstancias, es contraria a la moral pública, contradiciendo como contradice el principio más fundamental del orden social, cual es el de Autoridad y la propiedad industrial:
Considerando que cualquiera que sea la libertad que pueda existir para exponer, ya por medio de la prensa periódica, ya por el del libro, ya por el de las conferencias públicas, ideas o sistemas más o menos autóctonas o simplemente contradictorias de las leyes naturales o positivas, sensada libertad no implica ni supone la facultad de asociarse para conseguir directamente la realización de las doctrinas o ideales por otros procedimientos más prácticos, positivos e inmediatos, estando, como están, prohibidas con sanción penal esta clase de asociaciones por el Código penal:

Considerando, por último, que cualquiera que sea la doctrina sentada por este Supremo Tribunal en otros casos, no puede ser motivo de casación su infracción, según reiteradamente tiene declarado, en consonancia con la ley respectiva, y mucho menos no habiendo identidad de aquellos con el presente:

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que por infracción de ley, y contra la sentencia pronunciada por la Audiencia de lo criminal de Hoya...

6) Sentencia de (5 de Julio de 1884)

En la villa y corte de Madrid, a 5 de Julio de 1884, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende...
...contra la sentencia pronunciada por la Audiencia de lo
criminal de Utrera en causa por asociación ilícita:

Resultando que la indicada sentencia, dictada —
en 21 de Abril último, contiene los resultados siguientes:

Resultando que en el pasado año de 1881 se cons-
tituyó en la villa de Arahal, sin permiso de la Autoridad,
una Sociedad federativa de trabajadores, cuyo objeto era —
mejorar la condición de los de su clase, la que celebraba
sesiones clandestinas y obedecía los acuerdos y órdenes de
los Congresos de Obreros de Barcelona y Sevilla y del perió-
dico titulado La Revista Social; hechos probado:

Resultando que varios de los procesados manifies-
tan en sus inquisitivas que solicitaron permiso del Alcalde
de Arahal para tener una reunión pública, al cual les fue
denegado, y en otra que procuraron presentar al Gobernador
de la provincia un reglamento distinto del por que se regían
pero que no pudieron ver a dicha Autoridad:

Resultando que por el Alcalde de Arahal se mani-
fiesta en su informe, folio 232, que la Asociación de Tra-
bajadores constituida en dicha villa no le había pedido au-
torización para organizar y celebrar reuniones, ni tampoco
presentado a la aprobación el reglamento que tuviera para —
su régimen y gobierno; hecho probado...

Resultando que aquel Tribunal, calificando la Aso
ociación de ilícita por no haberse puesto previamente su e
constitución en conocimiento de la Autoridad, de autores
del delito previsto en el núm. 2º del art. 199 del Código
penal a las personas expresadas en el cuarto resultando,
les condenó a la pena de un año, ocho meses y 21 días de
prisión correcional y multa de 125 pesetas a cada uno, —
accesorias y pago de costas, y absolví a otros tres proce-
sados por aparecer con el mero carácter de socios:

Resultando que contra esta sentencia, declarada
firme respecto a Miguel Fernández y Antonio Reina, se ha
interpuso recurso de casación, fundado en los números 1º
y 4º del art. 849 de la ley de Ejecución criminal, se-
ñalando como infracciones:

1º El Art. 13 de la Constitución, que garantiza
derecho de reunión y asociación, sin otra limitación que
las impuestas por las leyes:

2º El art. 198 del Código penal, porque señala
los límites únicos de la disposición procedente:

3º El art. 199 del mismo Código por no estar pro-
bada la no presentación del Alcalde de reglamento, sino lo
que está Autoridad dijo, y porque solo exige el párrafo se-
gundo de tal precepto que se ponga en conocimiento de la —
Autoridad local al objeto y estatutos, pero, no permiso pre-
vio:

4º Como consecuencia de las anteriores, el art.
1º del mismo Código por falta de intención de delinquir:

5º El citado art. 199, en el supuesto de delito
por aplicarse su penalidad, lo mismo a los fundadores que a los Directores de la Asociación, que a la vez no pueden ser autores del delito, por no ser responsables los primeros de las omisiones de los segundos...

Considerando que el art. 199 del Código penal señala las penas en que incurren "los fundadores, Directores y Presidentes de Asociaciones que se establecieren sin haber puesto en conocimiento de la Autoridad local su objeto y estatutos con ocho días de anticipación a su primera reunión o 24 horas antes de la sesión respectiva, el lugar en que hayan de celebrarse éstas;" cuyos términos, por no distinguir actos ni tiempo, comprenden a cuantas personas concurren al establecimiento de la asociación o presiden su régimen por medio de dirección unipersonal o colectiva, sobre quienes recae la obligación de cumplir las exigencias legales previas o simultáneas al ejercicio de derecho de asociación, reconocido en la ley fundamental de la Monarquía dentro de los límites indicados en su art. 14, y de modo preciso fijados por el Código penal:

Considerando que declarando que Francisco Ruiz, Francisco Carreño y Juan Góez fueron fundadores de la Sociedad federativa de trabajadores de Arahal, e individuos de su Comité directivo José Oliva, Fernando Fuentes, Juan Cabrera, Antonio Gamboa, Manuel Peñalosa, José Ferrate, José Alba y Antonio Bonilla Cjeda, es manifiesta su no subordinada ni excluyente responsabilidad, por no haber puesto
en conocimiento de la Autoridad Local su formación y estatueto ni al constituirse ni más tarde...

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto...

7) Sentencia de (8 de Octubre de 1884)

En la villa y corte de Madrid, a 8 de Octubre de 1884, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos penda, interpuesto por el Ministerio fiscal contra la sentencia pronunciada por la Audiencia de lo criminal de Antequera en causa por asociación ilícita contra Juan Navarro González y consortes:

Resultando que vista en juicio oral y público la referida causa, dicho Tribunal dictó sentencia en 15 de Mayo último, consignando los hechos en los siguientes:

Resultando que en el año pasado de 1882 se constituyó en la villa de Ardales una asociación con mas de 700 trabajadores, a la que han pertenecido en concepto de Presidente Juan Navarro González, y como individuos de su junta directiva, los demás procesados Juan Antonio Ramírez, Rafael Arjona Bravo, Miguel Ruiz Mena y Juan Galián Real, que desempeñan los cargos de Secretario, Tesorero, Contador y Propagandista, respectivamente, cuyos individuos, detenidos por la Guardia civil, fueron entregados en 11 de Marzo último —
pasado a la Autoridad judicial con los documentos, efectos que se les encontró y una caja perteneciente a la sociedad en la que guardaba la suma de 355 pesetas; hechos probados:

Resultando que el constituirse en sociedad los trabajadores de la villa de Ardales y con ellos los procesados, lo pusieron oportunamente en conocimiento del Alcalde de dicha villa por conducto de Juan Antonio Ramírez Cázpedes y Miguel Ruiz Mena, cuyo Alcalde los autorizó verbalmente para que se reunieran y asociaran, mientras tanto presentaban una solicitud con el reglamento por que habían de regirse, lo que efectuaron presentando el reglamento que, impreso y conteniendo 24 artículos, corre unido a los autos, pero el repetido Alcalde les devolvió sin cursar el reglamento y solicitud, por haber presentado ésta sin fecha ni firma y extendida en papel común; hechos probados:

Resultando que si bien la sociedad de trabajadores de Ardales tenía por principal objeto la instrucción y socorro mutuo para mejorar la condición económica social de los asociados, como consta del artículo primero del reglamento, era federada de las demás asociaciones de obreros, existentes en otras poblaciones, obedecía los estatutos y reglamentos de la asociación Internacional, sometiéndose a los acuerdos adoptados en el Congreso de la unión de trabajadores del campo, celebrado en Sevilla en el mes de Septiembre del repetido año de 1882 y los del que se celebró en Barcelona en igual mes de 1891, han contribuido directamente al sostenimiento de una huelga de trabajadores ocurrido en Málaga, y se proponían al sostenimiento de otras por medio
de cajas de resistencia, que se crean y constituyen según el regla-
mente antes citado, y se armoniza con los principios de solidaridad
y colectivismo que los asociados profesan, contribuyen al sosten-
imiento de la organización internacional obrera; abonando las cuotas
reglamentarias a la Comisión comarcal de Andalucía del Sur y Conse-
jo de la Unión; hechos probados;

Resultando que la Audiencia de Antequera declaró que —
los trabajadores de Ardales podían asociarse para los fines que lo
hicieron, garantizados por el art. 13 de la Constitución del Estado;
que no constando probado que la asociación fuera contraria a la sa
raz, no podía reputarse como ilícita por haber estado en relación con
otra de igual carácter y formar parte de una organización más exten-
sa, y que el haber contribuido al sostenimiento de huelgas no puede
constituir el delito de defensa y castiga el art. 356 del Código pe-
nal, mientras no se pruebe que la obligación se para alterar abusiv-
vamente el precio del trabajo, por lo que, no siendo eso su objeto,
no está dentro de los artículos 198 y 200 del mismo Código, y en su
consecuencia absolvió libremente...

Resultando que contra la referida sentencia ha interpuso
la Ministerio fiscal recurso de casación por infracción de ley...

Considerando que, según tiene declarado este Supremo Tri-
bunal son contrarias a la moral pública, y consiguientemente ilícitas, aquellas asociaciones que tienden al objeto de realizar por procedimientos prácticos los principios de anarquía y colectivismo, tan contrario al modo de ser de nuestra sociedad y a la legalidad que sirve de fundamento a la misma.

Considerando que de los hechos consignados en la sentencia recurrida, a que se precisa atenerse para formar juicio exento de la índole de la asociación dirigida por los procesados, no resulta que la reunión o sociedad de trabajadores de Ardeles se propusiera ningún de los fines señalados en el considerando anterior, porque sólo se afirma concretamente de ella que su principal objeto era el de la instrucción y asesoría mutua de los asociados; pero aún cuando además se añade que era federada de otras asociaciones de obreros, que abscindía los estatutos y reglamentos de la Asociación internacional, que se había acostado a los acuerdos adoptados en dos Congresos celebrados, uno en Sevilla y otro en Barcelona; que habían contribuido al sostenimiento de una huelga y se proponían al sostenimiento de otra por medio de cajas de resistencia, no se determina que acuerdos fueron los obedecidos, ni que prescribían los estatutos y reglamentos a que se asentieron, ni con qué condiciones favorecían las huelgas; todo lo cual hubiera sido pre-
ciso hacer constar para saber si los asociados se habían encarre-
ddo dentro de los límites trazados por la Constitución, o si los -
había rebasado...

Sallamos que debemos declarar y declaramos no haber
lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por
el Ministerio Fiscal contra la sentencia pronunciada por la Audiencia de Antequera.

8) Sentencia de (5 de Diciembre de 1887)

En la villa y corto de Madrid, a 5 de Diciembre de 1887, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nue pende...
interpuesto por Indalecio Cuadrado Rodríguez contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona...

Resultando que vista en juicio oral y público la referida causa, dicha Audiencia dictó la expresada sentencia en 26 de Na-
yo último, consignando los hechos en el siguiente:

Resultando que en el número once del periódico titulado El Grito del Pueblo, que se publicó en San Martín de Provenza el
da 26 de Septiembre de 1886, se publicó un artículo con el epígra-
fe "Las ocho horas", del que se reconoció autor Indalecio Cuadrado,
que dije...
El Gobernador Dr. Antúnez parece que se ha propuesto concluir con las sociedades de resistencia y con las que profesan principios sociológicos. ¿Que suena tan a la oriente? ¡Que imposible! -Candau, aquel diputado enemigo declarado de la gloriosa e inseparable Asociación Internacional, al tímido garrote que se ensartaba de los principios anarquistas, al infame protecciónista que a los trabajadores daba un pan más negro que su tenueza conciencia, y al que, por último, pade a vez un grito la lucha contra los explotados rebeldes que reclamaban sus derechos, murió como fueron los miserables, rodeado de solo sus herederos y de un clero ambicioso - que por vil overlay presta lo que no vió ni palpó y ni inventó, pero sin un pueblo que admirara sus proezas, sus bandadas, su laboriosidad. Pues bien: Candau murió, pero no la Internacional, no los anarquistas, no los revolucionarios. Esto mismo sucederá al Gobernador de Barcelona; si es cierto ha prometido concluir con las sociedades obreras, morirá, pero las organizaciones que caminan al progreso jamás.- Y esto que afirmamos lo están ya descartando las sociedades obreras. Ellas han visto que a sus hermanos, aquel criminales repugnantes (aunque lo repugnante es la organización actual, que continuamente incita al crimen), se les ha detenido en nauseabundos calabozos, que no ha declarado, o poco menos, delito el reclamar más jornal y menos horas - de trabajo, y que para buscar a la mano que depositó al célebre carr-

276
lucha en el Fomento de la Producción Nacional se llega a perturbar
al orden familiar en el hogar doméstico de nuestros compatriotas de
infortunio; y por esto mismo han hecho suya la causa de los albañi-
les, se declaran solidarios de tan justa demanda y apizazan a estu-
diar los medios de alcanzar que las ocho horas de jornada sean gene-
ral a todas las artes y oficios de España. — Hasta la fecha son 60 —
las colectividades que han respondido al llamamiento de las ocho ho-
ras, cuyas Sociedades obreras de diferentes grandes vienen a reunir
un contingente de 40,000 obreros. ¿Quien se atreve con ellos? Ningu-
na Autoridad, ya sea civil, ya sea jurídica, militar ó eclesiástica...

Ahora sólo nos resta recomendar á los obreros de España
que organicen las comisiones de huelga para que se entiendan con la
Regional que reside en Barcelona, denominada "Comisión de las ocho
horas" compuesta de obreros que militan en diferentes secciones socio-
lógicas...

La lucha por la existencia es un deber la lucha por el
mejoraiento es otro; al responder a la fuerza con la fuerza; es el
instinto de conservación. — ¡Que los obreros españoles no sean me-
nos energicos que nuestros hermanos de otras regiones! Los mismos
presidentes que ellos deben animar; la misma táctica (si no
perfeccionada, si cabe, por la experiencia) debe servirnos de guía
y norma... Compañeros, si por temor a prisiones, arbitrariedades o deportaciones, se apoderara de alguno esa cobardía o el miedo, nada práctico obtendríamos. Debemos tener en cuenta que la clase obrera es la más potente y esforzada; para ella, ni existen Autoridades, milicia, clero, capital ni poderes jurídicos que la venza...

Resultando que la Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona declaró que con la publicación del artículo denunciado se ha cometido el delito de provocación directa por medio de la imprenta a la perpetración del delito de coligación, con el fin de encarecer abusivamente el precio del trabajo y regular sus condiciones, y el de injurias a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, en escrito no dirigido a ella, comprendiendo en el art. 582, en relación con el 583 y 586, y en el 269 del Código penal, cometidos ambos en un solo acto, por el que debe imponerse la pena del más grave en su grado máximo...

Resultando que contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley a hombre del procesado, fundado en el número 1º del art. 849 de la de Enjuiciamiento criminal, citando como infringidos:

1º El Art. 1º del Código penal, por considerar delito un hecho que no lo constituye:

2º El 269, porque en el artículo que ha motivado el proceso no se infiere ofensa concretamente a persona o entidad.
investida de autoridad:

3º Los artículos 582, 583 y 556 del referido Código por aplicación indebida, puesto que el hecho de aconsejar el articular que se asocien para conseguir licitamente la disminución de las horas de trabajo y que recurran a la legítima defensa, no constituye el delito que aquellos definen y penan, ni otro alguno...

Considerando que todo el concepto del artículo que con el epígrafe “Las ocho horas” se hallan inserto en el periódico El Grito del Pueblo, que se publica en San Martín de Provenzals, correspondiente al día 16 de Septiembre del año último, se encamina y dirige directamente a promover y organizar la coligación de los obreros con el fin de regular las condiciones del trabajo y de encarecerlo abusivamente, pues tal concepto merece el pretender sustituir la libre contratación y la natural competencia con la intimidationy consiguientemente a la amenaza que se hace de emplear la fuerza e imponer de esta manera la reducción a ocho horas de trabajo para el obrero, excitándole a la lucha contra el capital para obtenerla, deduciéndose de todo su contenido una evidente excitación para ejercitar actos ilegales dirigidos al logro de un propósito criminal, que si bien pudieran ser constitutivos de otro —delito más grave, no puede declararse en casación por no haber sido objeto del recurso.

Considerando que, si bien pudiera haber duda respecto a las injurias inferidas a las Autoridades constituidas
en el artículo referido, no cabe dudar en cuente a las ame-
nazas que se le hacen, lo cual constituía un delito más gra-
ve que el de injurias apreciado por la Sala sentenciadora:

Considerando que, ejecutados ambos delitos en un
solo acto, debe imponerse la pena del más grave en el grado
máximo.

Faltamos que debemos declarar y declaramos no haber
lugar recurso de casación que contra la sentencia dictada -
por,la Sala de lo criminal de Barcelona ha interpuesto Inda-
lecio Cuadrado Rodríguez.

8) Sentencia de (20 de Noviembre de 1888)

En la villa y corte de Madrid, a 20 de Noviembre de 1888, en el recurso de casación por infracción de ley que an-
te Nos pende, interpuesto por el Ministerio fiscal y D. Prota-
sio Rueda Ramírez contra la sentencia pronunciada por la Au-
diencia de lo criminal de Logroño...

Considerando que según los números 1º y 2º del art.
231 del Código penal, comete delito contra los derechos in-
dividuales el funcionario público que ordenase la disolución
de alguna reunión o manifestación pacífica, o la suspensión
de cualquiera asociación no comprendida en el art. 198 de die-
cho Código como ilícita:

Considerando que siendo un hecho probado, según la e
sentencia recurrida, que el Casino de Alfaro era una associa-
ción establecida legalmente para recaudar de los socios, cu-
yos estatutos fueron aprobados por el Gobernador civil de
la provincia, es indudable que todos los actos de recreo lí-
cito que se realizaran dentro del local elegido para la reu-
nión de aquellos, son actos propios del objeto con que se –
establecen tales asociaciones, cual acontece en los bailes
que periódicamente o en días determinados suelen darse por
las mismas, y que esto supuesto, ni con arreglo a la vigen-
te ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887, ni a la de –
Reuniones de 15 de Junio de 1880, se necesita dar parte a –
la Autoridad de esta clase de reuniones, después de celebra-
da la primera con conocimiento de aquella.

Considerando que el baile cuya suspensión acordó
el Alcalde de Alfaro no está tampoco comprendido entre las
reuniones excepcionales a que se refiere el segundo párra-
fo del art. 9º, porque si concurrieron D. Pedro Ochea y D.
Julio Ruiz, fue con el carácter de socios presentados, lo –
cual excluye la suposición de que fueran personas extrañas
da la Sociedad, y la concurrencia de señoras forasteras in-
teadas al efecto es una condición normal y corriente, propia
de todas o casi todas estas clases de sociedades, por lo que
no puede interpretarse la ley en sentido tan estricto que –
excluya la posibilidad de esta suerte de invitaciones sin
licencia de la Autoridad:

Considerando que esto supuesto, el Alcalde de Al-
faro D. Protasio Rueda Ramírez ha cometido el delito que define y pena el art. 214 de Código penal al acordar sus pension del expresado baño, y que la Audiencia de lo criminal de Logroño no ha incurrido en error de derecho al declararlo así:

Faltamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación por infracción.

10) **Sentencia de (18 de Marzo de 1889)**

En la villa y corte de Madrid, a 18 de Marzo de 1889, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por Don Raimundo Menéndez Urre contra la sentencia que dictó la Audiencia de lo criminal de Santander en juicio oral y causa por asociación ilegal:

Resultando que dicha sentencia, dictada en 15 de Octubre último, contiene los siguientes resultados:...

Segundo. Que el citado día 10 de Marzo presentó el Menéndez en unión del otro procesado D. Vicente García al Gobernador civil de la provincia dos ejemplares suscritos por ambos en concepto de comisión organizadora del reglamento de la Asociación católica, apostólica, española...

...de cuyos dos ejemplares se les devolvía uno en el acto con la nota de presentación firmada por el Go-
bernador y sellada con el del Gobierno civil de la prov-
vincia; hechos probados:

Que en el día 18 del propio mes de Marzo, Me-
ández Urra abrió al público el cuto de la capilla, ac-
tuando en él como Pastor o Jefe indisputable de lo que
llamaban Asociación católica, apostólica, española, con-
tinuando diciendo misas en ella.

Que el domingo de Ramos antes citado o sea en
el día 25 de Marzo, D. Raimundo Menéndez, vestido con
ornamentos al parecer iguales a los que para tales casos
usan los Sacerdotes de la religión católica del Estado,
bendijo los ramos, repartiéndolos entre los niños, empe-
zó a decir la misa en castellano, como siempre, y cier-
to periodo de ella Vicente García, vestido con sotana,
sobrepelliz y bonete negro, empezó a explicar el Evgan-
lcio del día, como así bien que cuando el García se halla-
ba predicando o explicando el Evangelio, el Jefe de segu-
ridad y vigilancia D. Luis Bourgón suspendió aquellos ac-
tos religiosos y puso a los hoy procesados a disposición
del Gobernador civil de la provincia...

Resultando que la referida Audiencia calificó
los hechos expuestos como constitutivos de delito de aso-
ociación ilegal, comprendido en el artículo 201 en rela-
ción con el 199, núm. 2º, del Código penal, y condenó a
su autor D. Raimundo Menéndez a seis años, ocho meses y
veintiún días de prisión mayor, accesorias y costas:...
Considerando que el hecho de presentar los fundadores o iniciadores de una Asociación al Gobernador de la provincia, en que haya de tener aquella su domicilio, dos ejemplares firmados por los mismos, de los estatutos, reglamentos, contratos o acuerdos, por los cuales haya de regirse, da derecho a los iniciadores de la Asociación para constituir ésta, si pasado el plazo de ocho días desde la presentación de los expresados documentos al Gobernador, este no los devuelve por estimar que reúnen las condiciones exigidas por la ley, y que no se trata de Asociación que deba reputarse ilícita, pero bien pueden dejar de hacer uso del derecho de constituir la asociación los que la iniciaron, y en este caso la presentación de los estatutos y reglamentos de la repetida asociación proyectada y no constituida por desistimiento tácito de los iniciadores, es un hecho aislado del cual no se puede derivar ninguna de las obligaciones y responsabilidades que la ley de Asociaciones y el Código penal determinan.

Considerando que no pueden estimarse como actos de constitución de la Asociación proyectada los que tuvieron lugar el día 25 de Marzo, porque no resulta de la sentencia que los allí reunidos tomaran acuerdo ni menos levantarán acta de la constitución de la Asociación, y no habiendo llegado a fundarse y establecerse ésta, es evidente que no pueden tener aplicación los artículos 199, en su núm. 2º, y 201 del Código penal que cita la sentencia reclamada, y que se refieren en términos claros y precisos, que excluyen toda duda, a infracciones legales en
el formalismo de la constitución de la Asociación; y como la que pretendieron fundar y tenían derecho a constituir Menéndez Urra y García no llegó a establecerse, es indudable que falta el hecho fundamental de que se deriva la aplicación de los citados artículos:...

Pallamos que debamos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto.
1) **Programa del P.S. de 1879**

El Partido Democrático Socialista Obrero Español declara que su aspiración es: la abolición de clase, o sea -la emancipación completa de los trabajadores; la transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera; la posesión del Poder político por la clase trabajadora. (A lo cual se añade un programa de objetivos inmediatos como libertades políticas, derecho de huelga, reducción de horas de trabajo, etc., etc.,).

2) **Nuevo Programa definitivo del P.S.O. de 1898**

1°. La posesión del poder político por la clase trabajadora.

2°. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común. Entendemos por instrumentos de trabajo: la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, máquinas, capital-moneda, etcétera, etc.

3°. La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el usufructo de los instrumentos de trabajo por las colectividades obreras, garantizando a todos sus miembros el producto total de su trabajo, y la enseñanza general, científica u especial de cada profesión a los individuos de uno y otro sexo.

4°. La satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad o padecimiento. En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación...
ción de la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e —inteligentes.

3) **Declaraciones contra la "Mano Negra" del III Congreso de la F.T.R.E.**

El Congreso declaró, a propósito de la "Mano Negra": "Nuestra Federación nunca ha sido partidaria del robo, ni del incendio, ni del secuestro, ni del asesinato... no hemos sostenido ni sostenemos relaciones con lo que llaman "Mano Negra" ni con la Mano Blanca, ni con alguna asociación secreta que tenga por objeto la perpetración de delitos comunes.

4) **Discursos pronunciados en el debate sobre la Ley de Asociaciones de 1877.**

a) **Discursos de los conservadores.**

Fernández Villaverde (4 y 5 de marzo de 1877)

"...a mi me pareció demasiado optimista el Sr. Sagasta cuando, interviniendo en este debate hace dos tardes, nos hablaba de la situación de los bandos revolucionarios, de la actitud y el estado del partido socialista en Europa, de la guerra contra la sociedad y el Estado, que consideraba no se en que trégua, desaliento o desmayo; tan optimista como pesimista, aunque no imprevisor, pudo parecerme el día en que con ocasión más o menos propia, trataba aquí de la guerra posible entre los Estados de Europa."
No es cierto que La Asociación Internacional de trabajadores no ofrezca hoy el temor que pudiera inspirar en 1870 y en 1871. No es un secreto para nadie que siga con atención, como deben seguirlo todos los hombres de Estado, el movimiento del socialismo militante en Europa, que las doctrinas colectivistas de Karl Marx imperan hoy en absoluto en todos los partidos socialistas de acción, sin excluir a los mismos socialistas franceses; no es un secreto para nadie que La Internacional tiende a reconstituirse, y tal vez se reconstituya por completo muy en breve...

No creo como Lorenzo Stein, en su gran tratado de la ciencia administrativa, que toda asociación, y principalmente toda asociación política, sea un miembro orgánico del Estado y deba estar por eso bajo la acción constante del Gobierno; pero permitánsene a lo menos creer con Bluntschli que delante de las asociaciones políticas la mera supremación como aplicación de la ley penal, cuando la asociación viola el orden jurídico, no basta para la defensa del Estado; que el Estado necesita procedimientos más rápidos y la facultad de poder suspender, suprimir, disolver aquellas asociaciones que, sin caer bajo la acción de la ley penal, pueden comprometer y aún amenazar su seguridad propia...

La mera represión judicial adelece para la defensa del Estado de dos graves defectos; de la solemnidad, y portanto, de la lantitud del procedimiento, y de que exige la prueba plena que tan difícil es de encontrar cuando la responsabilidad individual se escuda y refugia detrás de la acción colectiva.

Ved ahí por qué el sistema preventivo no puede abandonarse en absoluto.
Contra el recreo punible, contra el juego ilícito y contra la agitación revolucionaria os pido, Sres. Ministros, alguna prevención, alguna facultad de gobierno, no la previa autorización absoluta, sino un verdadero proyecto de ley de asociaciones...

...que desenvelopa el artículo deficientísimo de nuestro Código penal en materia de obligaciones de obreros; que diga algo sobre sindicatos de oficios, algo de lo que me parece que ha venido a pedir una Comisión de obreros de Cataluña; cuando debe contener en suma un proyecto de ley de asociaciones. El dictamen puesto a discusión no merece tal nombre.

La Constitución del 69 pedía una ley en cada caso, y yo he dicho que la pedía; pero esa ley podría ser ahora —en general la ley que se dice sobre asociaciones, acasandose al espíritu de la Constitución de 1876, que una medida semejante de defensa del Estado pueda dictarse por decreto— que no de otra manera esa medida podrá ser útil, eficaz y pronta para defender los atributos esenciales del Poder, a causa de que el procedimiento legislativo tiene el mismo defecto para este fin que ayer presentaba yo, como propio del procedimiento judicial, la falta de rapidez con que el Estado puede necesitar la aplicación de tal medida.....

Marques de Vadillo (10 de marzo de 1877)

Toda vida deja indudablemente rastro, deja huella en el derecho; pero la ley señala condiciones, y así como señala condiciones al ser que viene a esta vida; así como dice, por ejemplo, que es necesario que tenga figura humana y que no sea
mostruo, la ley debe decir que puede haber asociaciones que sean verdaderamente mostruosas, que no tengan forma que pudiéramos llamar social, que se encaminen a fines verdaderamente mostruosos e irracionales...

... reconozco que en el desarrollo del derecho de propiedad se ha podido llegar a verdaderas aberraciones. ¿Quiere esto decir que niegue ni pueda negar nadie que el principio de la propiedad es un principio fundamental de la sociedad?. Es más, ¿podemos negar que lo que se llama cuestión de organización y forma de la propiedad, afecta gravedad profunda, encierra algo que indudablemente toca a toda la sociedad?. Pues que, la organización de la propiedad, ¿no lleva, por ejemplo, modificaciones a la familia, a la organización política a toda la manera de ser de los pueblos? Pues si es base y principio capital, ¿quién duda que al presentarse una asociación que pueda, directamente o indirectamente, atacar, que verdaderamente se proponga atacar ese principio social, se impone desde luego el deber sagrado de velar por ese interés, y se impone también el deber sacratísimo de negar realidad y existencia a la asociación que viene a constituir un verdadero peligro para esa institución

... yo lo único que puedo decir ahora, es citar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, casando otra en la que se había condenado a la Sociedad Internacional de trabajadores, sección de tejedores de Bocairente, provincia de Valencia, porque atendió el Tribunal Supremo que los fines que se proponía aquella sección no venía a herir de una manera directa la moral pública. ¿Cuáles eran estos fines?. El aumento de salarios y el producir ciertas alteraciones en el orden del trabajo. Esto era, como afirmaba el Sr. Villaverde, lo que se de-
cia; pero, ¿que era lo que se callaba? Para esto no tengo más que remitirme a los resultados de la sentencia.

Pues si ha podido existir un Tribunal y este —es nada menos que el Supremo de Justicia de la Nación, — que ha venido a fallar que la Sociedad Internacional de trabajadores no está comprendida en los preceptos del —art. 198 y siguientes del Código penal, entonces ¿donde está la garantía que ven los que dicen que estos artículos del Código defienden a la sociedad, porque condenan a La Internacional de trabajadores como opuesta a la moral pública? Si es cierto que la moral pública debe estar garantida y protegida, y si es cierto, como vosotros habéis afirmado, que la Sociedad Internacional de trabajadores ofende a la moral pública y en tal concepto cae fuera de la jurisdicción de la ley y queda dentro del Código, y si el Tribunal Supremo, el más alto de la Nación —ha dicho que La Internacional no ofende a la moral pública, ¿cómo resolveis este conflicto.

Resolved esta contradicción; que mientras no lo hagais, yo tendré el derecho de decir que no están garantidos estos principios cardinales, estas instituciones fundamentales del orden jurídico-social. Y toda vez que no están garantidos, me queda como conclusión el pregunta-ros: ¿Es que por ventura era más peligrosa en 1871 La Internacional de trabajadores que lo es ahora?

b) Discurso de los supranamentales

Sánchez Pastor (10 de marzo de 1887)

Por lo demás, no se asuste S.S., ni debe asus-
tarse nadie de la exposición ni de la discusión de las utopías más absurdas, porque todas esas utopías, lo mismo las de los socialistas que las de los individualistas no han llegado ni llegarán nunca a regir en nin gún pue-

blo...

Moret (12 de marzo de 1887)

La distinción entre lo repressivo y lo preventi-
vo hay que buscarla en otro principio, en el ejercicio-
del derecho. Prevenir, es un sistema que consiste en te-
ner miedo al ejercicio del derecho y coartarlo para impe-
dir el mal; y reprimir, es tener confianza en el derecho
y no coartarlo más que por otro derecho. He aquí la dife-
rencia radical. Si el derecho de asociación tras el peli-
gro, engendra el mal; pero yo no niego el derecho, porque
la asociación lo es todo, desde el pobre, ara el que es
medio de encontrar más baratos los artículos de la vida,
hasta para el sabio, para el cual es medio de encontrar
los secretos de la naturaleza; desde el capitalista, que
sumado con otros puede emprender grandes obras, hasta los
infielices que no tienen más medios que la paralización —
del trabajo para que, adelantando el hambre, por medio —
de una huelga lícita, conseguir el aumento de jornales.
De estos medios es cierto que nacerá el peligro; pero tam-
bien nace de la palabra humana, y no por eso se le va a
poner una mordaza; también nace del libro pero al través
de las obscenidades del impreso, nacen los resplandores
de la idea que lo purifican; también el movimiento es pe-
ligroso, porque el niño puede caer en el abismo y el via-
jero en el barranco del camino; pero en cambio, el movi-
miento va multiplicando la vida por todas partes; y yo —
prefiero caer con el movimiento a quedarme estacionado.

Garijo y Lara (12 de marzo de 1887)

Los señores de la minoría conservadores desearían más medidas preventivas, lo cual sería peligroso para el ejercicio del derecho; los señores de la minoría republicana desearían que hubiera menos garantías, menos higiene en el ejercicio del derecho, lo cual sería peligroso para el Estado; y como lo uno sería peligroso para el Estado, y lo otro sería peligroso para el ejercicio del derecho, la Comisión cree que el Gobierno en este proyecto ha cumplido perfectamente los compromisos que tiene adquiridos y que este proyecto de ley llena todas las exigencias.

Santa María (14 de marzo de 1887)

Así, nosotros amamos por igual la libertad y el orden, porque sin la libertad es imposible el cumplimiento del fin individual, y sin el orden es imposible el cumplimiento del fin social. ¿Cuál es el punto de intersección, como decía Rossi, entre este interés del individuo y este interés de la sociedad? Pues lo encontramos precisamente en el derecho, porque en tanto reconocemos la libertad, en cuanto es conforme a derecho, y en tanto defendemos las atribuciones del Poder, en cuanto son conformes a derecho. Pero el derecho no es un principio abstracto, es un principio real. ¿Quién garantizará este derecho en la vida práctica? Los Poderes públicos, que mal que pese a S.S., la ciencia piensa hoy que son cuatro esos Poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el armónico o regulador; y en esta división de los Poderes públi-
cos, en la distinción entre el Poder ejecutivo y el Poder judicial, que son, los llamados a garantizar el derecho en la vida práctica, es precisamente donde la escuela liberal armónica encuentra la fórmula que protege por igual al derecho —del individuo y el derecho de la sociedad.

La libertad es la legítima en tanto que por medio de ella no se quebrantara la libertad ajena; todo derecho individual tiene por límite otro derecho. Trátase, pues, suprimir término, de definir límites de derecho, de definir infracciones de derecho, y dentro de la doctrina constitucional ¿a quien compete la decisión de lo que es justo o injusto con arreglo a la ley, de lo que es lícito en la realidad de la vida jurídica? Pues al Poder judicial, y por eso le entregamos la disolución de las asociaciones.

¿Pero es que la perturbación se presenta con tales exigencias, con tal alarma que el mantenimiento del orden imperiosamente reclama que no se aguarde a la resolución judicial? Pues como el Poder ejecutivo tiene por misión mantener de hecho el orden jurídico, conservar lo que pudiéramos decir el estado de derecho, el Poder ejecutivo suspende la asociación hasta tanto que tomándola por su cuenta el Poder judicial vea si existe o no motivo para el procesamiento y después para la disolución.

3) Discurso de los republicanos

Azcárate (10 de marzo)

¡Y la propiedad! ¡Ah señores, la propiedad! Yo ya se que habrá algunos conservadores, como el Sr. Marqués de Vadillo,
que, al defender la enmienda que ha presentado al Art. 6º, dirán que hay sociedades que ponen en duda el derecho de propiedad y que tratan de abolirlo; cosa que no tiene nada de particular, porque no es que realmente traten de abolir el derecho de propiedad, sino la propiedad del uso. ¡Ah Sr. Marqués de Vadillo! esto tiene un inconveniente, y le voy a hacer a S.S. un recuerdo, y es: que hace pocos años, en Cuba, una de las formas de la propiedad existente, era la esclavitud; y, cosa rara, consecuencia de la aplicación de ese ejercicio, era honroso defender la esclavitud y un crimen el atacarla. ¿Que sucede con la cuestión de la propiedad? Pues no es más que una condición lo que se aprecia en ella, si es individual o colectiva, y en qué proporciones. ¿Hay alguien capaz de definir donde está ese límite, cuando toda la historia del derecho de propiedad no es otro cosa que una lucha entre estos dos elementos?.

...pero, Sres. Diputados, no os hagais ilusiones; si poneis ese límite en el orden social, la clase obrera lo mirará siempre como principio de exclusión de la vida jurídica; y el problema está en un estado tal, que en medio de sus vaguedades y dificultades inmensas, grandísimas con que se presentan, hay una cosa, a mi juicio, indudable, y es que debe ser total y libremente discutido por todo el mundo, comenzando por las clases a las cuales afecta....

... el partido conservador tiende siempre a la persecución, olvidando que la persecución en estos casos produce, entre otros efectos, el de la unidad entre aquellos a quienes persigue, mientras que la libertad los divida; y no es que yo lo celebre con habilidad maquiavélica, es que me atengo al
hecho. Frente a la persecución, todos tienen un interés común, que es déf de la defensa, y allí donde hay libertad como se - trata de la resolución de problemas verdaderamente difíciles, las opiniones se dividen, y hasta se dan casos en que la misma discusión llega a convergerles.

Labra (9 de marzo)

... se consagra el sistema preventivo. Porque resul-
ta que si un individuo pretende asociarse, pero no envía al -
registro aquellos documentos y aquellos datos en cuya virtud 
la asociación debe producir su eficacia legal, no solo no se
reconoce la existencia de la sociedad, sino que se la persi-
gue y se le pena.

Esto es una verdadera enormidad......

Además, yo entiendo, señores, que estos rigores y es-
tas prevenciones son deficientes, por dos motivos: primero, 
porque son absolutamente ineficaces; ineficaces han sido todas 
las persecuciones, todas las leyes prohibitivas, promulgadas con una verdadera espãndidez contra las sociedades secretas. 
Las sociedades secretas contra las cuales mayor lujo se ha des-
plegado, llamense sociedades religiosas de jesuitas, llamense 
de fraismasones, han continuado y continúan figurando en la his-
toria política contemporánea....

Y en ese punto, señores, ¿que es lo que pasa en to-
da Europa? Hacia el otro día un digno miembro del partido con-
servador referencia a los espectáculos que se daban allá al 
otro lado del Atlántico. La verdad es que en esa Alemania, don-
de se ha llevado con exageración brutal la persecución contra los socialistas y contra los judíos, el hecho positivo es el desarrollo extraordinario que la causa socialista y la causa misma de los judíos tienen en ese centro del continente de Europa.

No me extraña, y no lo he ocultado, que la legislación europea haya partido de puntos de vista diferentes de los míos y que haga afirmaciones contrarias a las mías, porque la legislación europea en materia de asociaciones se ha movido bajo la preocupación de dos ideas: antes de 1860 bajo la preocupación de los clubes políticos y de las sociedades religiosas; es decir de las sociedades católicas, y de 1860 acá, bajo la preocupación de la Internacional, y en su consecuencia, casi toda esta legislación ha tenido muy presente esta idea, y por tanto, ha dado grandes disgustos al Gobierno, creyendo que de este modo evitaría estos males, y sin embargo, antes lo dije y lo repito, la Internacional, desde las primeras reuniones de Londres y de Ginebra, ha continuado potente, a pesar de estas leyes; y las sociedades secretas han continuado, y las sociedades piadosas que tanto miedo infundían en 1850 a 58, son hoy asociaciones aceptadas en la vida corriente, después de haber sido inútilmente combatidas por los medios legales.
5) Discurso pronunciados en el debate sobre la ley de represión del anarcosimo de 10 de Julio de 1894.

a) Discurso de los Liberales.

1º) Discurso de Pérez Castañeda, 16 de Mayo de 1894.

... Yo debo decir a S.S. que el jurado es instituido que existe en casi todos los países que debemos mantenerlo y conservarlo a todo costo, que es la reparación de una clase de la sociedad enfranque de otra autoritaria, que demuestra la deficiencia de las funciones encomendadas a los tribunales de justicia, ...

2º) Discurso de Arnott y Estava, 16 de Mayo de 1894, (en contra)

... Toda vez que este no es un proyecto ministerial en el sentido de obligar a los individuos de la mayoría a seguirse el derrotero que el Gobierno marca, yo puedo decir con toda libertad, acaso con todo error, que la parte primera del dictamen, que yo llamo penal, la encuentro excesiva, la encuentro dura, la encuentro inmecesaria en alguna parte, en tanto que la segunda parte, que yo llamo procesal, sólo tiene en opinión, y he de hacer observaciones que demuestren mi tesis, sólo tiene de plausible al el cometeras al conocimiento del Tribunal del jurado las causas que se van a lle-
mar de hoy en adelante de explosivos y materias explosivos y materias explosivas; explosivos y materias explosivas que todavía no sabe el Diccionario lo que son; explosivos y materias explosivas que todavía la ciencia no ha definido; medios y materias que van a erigirse en principios de delitos, precedente desusado en nuestra legislación penal...

— La "Internacional incendiaria", con sus excesos en España, los terrores de la "Mano negra", que escritos están en las páginas de la jurisprudencia del Tribunal Supremo; los excesos anarquistas de Barcelona y de Jerez, en parte juzgados, en parte pendientes todavía de Terribles condenas que aún no han llegado a imponerse, ¿no han sido embates contra el Código Penal? Sin embargo, el Código penal de 1.870 ha sabido resistir esos embates, y no han temblado los fundamentos de la sociedad española.

España, menos que ninguna Nación, tenía necesidad de acudir a estos recursos tan severos, porque tiene, por fortuna, un Código en cuyas páginas han encontrado represiones esos fases ilegales y tan negras del problema social del presente siglo, presentadas desgracias de 1870...

— La Comisión tendrá también presente, mucho mejor
que el que en este monumento os dedique la palabra que se, como en el prólogo se consigna, esos medios explosivos llevan consigo la clerocracia y la premeditación, luego hecho aterrador que causa pérdida de la vida, es un asesinato; y si además se agrega la premeditación, no necesitamos de leyes especiales para conseguir esa represión tan dura y tan energica...

Si se consigna bajo el punto de vista delito contra los casos, ¡oh, señores! yo veo, y ojalá sea con error, que se eleve la cosa a la misma categoría que la persona en este proyecto; yo veo que causar la explosión en edificios públicos, en lugar habitado, con riesgo en las personas y con daño, aunque no sea en las personas, sino a las casas, puede en el grado máximo llegar a esa pena; de muerte que bien pudiera ser que a un daño ninguno de personas y sólo por el daño de las casas, lleváramos la penalidad a ese grado tan alto. Ojalá no sea así, ojalá yo esté en un error, y no tenga nunca la práctica a confirmarse esta suspiciona mía...

.- La libertad de inducir directamente, ¿Para qué se ha de provar a nadie de creer que la más feliz de la tierra es que no haya anterioridades? ("El señor Perez Castañeda"); Eso no es un anarquista.) Será lo que fuese;
será contrario a lo que piensa S.S. ya lo que yo pienso pero será lícito en la Constitución. ("El Sr. Perez Ca-
ñada". ¿Eso quien lo ha dudado? Eso no se castiga aquí) Yo me felicitaré de que el Sr. Castañeda no defina lo que es un anarquista, y torpe todo el anarquista delincuente .("El Sr. Castañeda: Un socialista que tiene prisas.) Ese socialista que tiene prisas, puede ir por la prisas de un fiscal excitado por el Gobierno, o un artículo de la ley . ¿Dónde está la raya de la indicación?...

Para el jurisconsulto, además el procedimiento mili-
tar sólo puede traerse al estado de guerra, sólo puede el ejército tenerlo y aquellas otras indicaciones que se aso-
mejan por las ciencias que las rodean, á la situación del ejército. Aplicar del procedimiento la jurisdicción, ap-
plicar del procedimiento el tribunal, llamar capitanes ó generales á juzgar de los delitos, caso sólo puede suje-
to en la teoría española, sólo debe suceder con arreglo á la grandísima obra de la unificación de fuerzas del año 68, sólo puede aplicarse, si no se quiere también quebran-
tar esa grande unidad que nuestras anteriores legislado-
res establecieron, á mi parecer de un modo indestructible sólo puede aplicarse al ejército mismo, á las situaciones de guerra...
¡Ahí! Pero si aquel tribunal que en la milicia lo milicia lo juzga, si aquel capitán, que está en contacto con sus soldados, si aquel capitán, que está habituado á la vida severa del cuartel es el que va á venir á juzgar al anarquista, ¿de que sirve esta dualidad, y donde están las fronteras de la milicia y las fronteras de la sociedad civil?...

39) Ramos Calderón, 21 Mayo de 1894

Y á propósito de esto, ¿ha citado el Sr. Amat y Estévez el hecho de la Intervención. Pero olvida S.S. que la Internacional no tuvo entre nosotros, por fortuna el carácter de hecho, sino de propaganda; no pasó de esta situación; así es que la discusión que tuvimos aquí el año 1.871 no fue tanto para comparar las doctrinas de la Internacional con el art. 198 del Código penal como para compararlas con el artículo 17 de la Constitución entonces vigente en España, que otorgaba á todos los españoles el derecho de asociaciones para los fines de la vida humana que no atacasen á la moral pública...

Pero en este cuarto de centuria, la ciencia ha adelantado mucho, la química ha hecho progresos extraordinarios y cuando se ha visto á los criminales que se han valido de los progresos realizados por la ciencia, no mejoran las
condiciones sociales, sino para atacar los fundamentos de la sociedad en seguida que han visto esos hechos repetidos, ha habido un clamor general pidiendo al Gobierno una reforma y una agravación de las penas establecidas en el Código penal...

Examinemos los delitos de robo, de hurto, de lesiones, y aun el de estragos y se verá que el legislador ha apreciado el hecho prestando de la intención del agente. Y estos principios en que descansa el Código nos revelan por sí que era completamente imposible encajar estos nuevos delitos sin romper y destrozar completamente los moldes del Código penal, porque estos delitos participan del carácter espiritualista; no se fijan tanto en los efectos como en la voluntad del agente que los produce.
Por eso se castigan las bombas explosivas cuando hacen efecto en personas o destruyen objetos, porque no se trata de castigar el hecho sino la intención del criminal que arroja la bomba...

Esta ley es preventiva, decía el Sr. Apat y Estave. Si por prevención se quiere decir que la ley va a buscar el delito desde su origen y que en esa serie y génesis, desde que se concibe hasta que se ejecuta el delito, en todos esos momentos en que toma carácter exterior la ley,
la pena; si este es el sentido en que se dice que la ley es preventiva, es evidente que la ley tiene ese carácter puesto que evita que otros delincan á la sombra de la impunidad; pero si se entiende por prevención de lo que se ha entendido siempre nuestras leyes, ó sea á la autoridad gubernativa tales medios que pueda juzgar, no por los tribunales sino por la policía, entonces podemos decir que esta ley no es preventiva ni falta á ninguna de los principios fundamentales de la democracia española...

Crea 3.9, que era nulidad á una observación del lo que habíamos establecido referente á las asociaciones; pero yo va á permitir 3.9, que se diga que sin duda no ha comprendido bien el artículo relativo á ese punto que tras el proyecto, con lo que establece la actual ley de asociaciones; porque es tal la importancia de esta forma, que si solo valdría el proyecto mismo.

La ley actual de Sociedad ó Asociaciones y el art. 198 de Código penal, declaran ilícitas, y por consiguien-
ta sujeta á la pena, primero de suspensión y después de dis-olver á aquellas Sociedades ó Asociaciones que tienen por objeto especial atacar á la moral ó á las disposiciones del Código; mientras que el artículo del proyecto que se discute ataca á esas sociedades no porque constituya su
carácter o su manera de ser la condición de dedicar a la predección de los delitos, sino porque consisten, porque permitan que en su seno una fracción más o menos numerosa de asociados se dedique a preparar los delitos que aquí se menciona. Resulta pues que eso que el Sr. Amat llama simiedad, es una réforma de tal trascendencia, que sus efectos se han de sentir en la sociedad española...

d) Discurso de Canaleja, 26 de Mayo de 1.894

...Cuando yo leo tanto artículo consagrado a instituciones jurídicas menos trascendentales y veo sin embargo que la forma de contratación que comprende la mayor suma de intereses y en que se conciernen el mayor número de voluntades, no recibe del legislador sino tímidas expresiones de un respecto, o fingido respeto, a la libertad individual entonces me acuerdo de que el Estado es una fuerza de armónía, de que el Estado es una fuerza de ponderación que ha de proteger al débil y equilibrar las desigualdades, pues nada hay injusto como aplicar un crédito igual a un derecho idéntico a relaciones jurídicas, en que intervienen elementos desiguales. Y este mi concepto acerca del contrato de trabajo...

En lo que difiere radicalmente de un concepto vertido aquí es en que esa obra, haya de realizarse por la iniciativa del Diputado...
Yo creo que todo esto ha de ser obra de los Gobiernos y así como hemos, y llegado en los político á una verdade-
ta conciliación y aspiramos á llegar también en la econó-
mico, ¿Por qué en lo jurídico-social no aprovechamos la
oportunidad de este debate ó otra cualquiera, para que éstos
problemas, que pueden ser manzana de discordia, sea
de odio, se reduzcan con grandes soluciones armonicas...

a) Discurso de Ruiz Candaspeón, de 5 de Junio de 1894.

... Es que en el afán y en el propósito de S.S. quería
llegar á sembrar cierta alarma á establecer ciertos distinc-
tos á hacer creer que entre las clases proletarias y las
classes acomodadas hay diferencias que hacen que la justicia
sea desigual en este país, y que las clases pobres están
sometidas á una detención más o menos larga, mientras que
á las clases acomodadas y yo no sé si á ellas pertenecen
las personas á quienes S.S. quería aludir se las trata con
una desigualdad irritante ó injusta? El Gobierno no puede
dejar pasar sin proteste esas afirmaciones...

b) Discurso de los Republicanos.

Discurso de Azcárate, 22 de Mayo de 1894.

Es de notar, para que se comprenda la gravedad de es-
tas penas, lo siguiente: la pena de cadena perpetua á muerte sólo le impone el Código en tres casos en cierto delitos
de traición de los más repugnantes, como entrega de una plaza al enemigo; en el caso de piratería con asesinato y en el caso de parricidio. Ahora bien; según la doctrina sentada en este proyecto, aun no habiendo daño para las personas aun no resultando ningún muerto ni herido, sólo con que haya daño en las cosas se puede imponer la pena de muerte y se puede imponer la de cadena perpetua aunque ni siquiera haya daño en las cosas. Pues figúrense, señores, un individuo toma un poco de pólvora, la ponen un car- tucho con una pequeña mecha y se lanza en un café. Es lugar habitado, puede haber riesgo para las personas; pero por un accidente causal, el cartucho ha ido a un rincón y aunque la detonación ha tenido lugar no ha ocurrido nada, no ha habido lesión en las cosas ni daño en las personas. Pues cause criminal: se le aplica el párrafo 2º del art. 1º de este proyecto de ley que imponen para este caso la pena de cadena temporal en su grado máximo a muerte. Pero el Tribunal estima una circunstancia agravante, la de nocturnidad, ó resulta que el autor de ese delito es un vagabundo, ó concurre otra circunstancia agravante pues entonces pena de muerte... 

---

“Consiste pues, que si los trabajadores anarquico-colectivistas aspiramos á la abolición de los Estados politico-jurídicos actualmente existentes y á la transformación de
la propiedad individual de la tierra y de los grandes instrumentos del trabajo en propiedad colectiva, la efectuarémos cuando tengamos medios y poder para verificarlo por medio de la revolución social; y no queramos ni podamos, ni debamos hacer propaganda en pro de tan grande y justa transformación, ni por el robo ni por el secuestro, ni por el asesinato. El que roba siempre será un ladrón; el que secuestra un secuestrador; y el que asesina, un asesino lo mismo en la sociedad presente que en la del porvenir.

"Esta declaración que hace dos meses publicamos, no ha sido rechazada por ninguna de las 270 federaciones locales, ni por ninguna de las 836 secciones ni por ninguno de los 70.000 federados que constituyen en la Federación de trabajadores de la región española!"

(Cita de la declaración antiterrorista del III Congreso de la FTRE).

Discurso de Vallés y Ribet, 29 de Mayo de 1894.

Lo que principalmente se proponen los terroristas es introducir la alarma; pero esta alarma & la extingüis, la aminirás siguiendo haciendo lo que haces? ¿Sabéis lo que más pronta y eficazmente habría disminuido en Barcelona el estupor, la alarma, la consternación producidos por la catástrofe del Liceo? ¡Ah! Más eficaz que empezar aquella razzia, aquella persecución, aquél verdadero ojo contra
todos los obreros no ya de ideas anarquistas sino contra los que se habían distinguido en algunas huelga en algún meeting, en alguna publicación; más afezaz que esto, que sólo contribuyó á aumentar la alarma y el espanto, hubiera sido el que todas las autoridades de Barcelona, puesta de acuerdo con las personas de arraigo, con esas personas que cobarde y sin dar la cara se excitan á que fubliéan y que no tienen valentía bastante para ponerse al lado de las autoridades en trance tan crítico y prestar les resul tamente todo el concurso de su fuerza moral, de sus recursos, de su nombre y de su arraigo, hubieran abierto de nuevo el día siguiente ó los dos días de la catástrofe el gran teatro del Liceo...

El terrorismo Sres. Diputados es manifestación tremenda del estado en que se encuentra el proletariado en el mundo. Es evidente, Sres. Diputados que existe en nuestros días un desequilibrio manifiesto entre las nuevas necesidades que van creándose y los medios que tiene á su disposición los proletarios para llenarlas; es evidente que también hay un desequilibrio extraordinario entre los adelantos materiales y el progreso intelectual y el progreso moral de esta misma clase social...

Pero se me dirá ¿no se ha otorgado en España el sufragio universal? ¿no tiene con el sufragio universal el proletariado la manera de intervenir en el Poder legislati-

Si ni siquiera los partidos republicanos pueden traer aquí toda la representación que por su importancia les corresponden, a causa de la manera cómo se practica el sufragio universal en nuestro país en nuestro por las sofisticaciones de todo linaje de que se le hace víctima porque ya la misma ley electoral está elaborada de modo y de suerte que pueda el Gobierno intervenir con tal eficacia en las elecciones que pueda hacer que en todo caso, necesariamente las pierdan las oposiciones; si esto acontece con el mismo partido republicano ¿que la ha de suceder con el proletariado? ¿Cómo han de poder las masas proletarias mandar aquí sus Diputados, si vosotros tenéis organizadas las cosas de tal modo, que no ya los obreros no ya los trabajadores, ni siquiera los que no son trabajadores ni proletarios, pero que no vive en Madrid, puedan ser Diputados, si no ricos?...

Yo veo, Sres. Diputados, y esto constituye en mi humilde concepto un gravísimo peligro, en estos artículos que tan repetidamente he de citaros, la muerte, en primer lugar de la propaganda socialista; la muerte, en segundo lugar de las organizaciones obreras, de las asociaciones de trabajadores. (El señor Ministro de Gracia y Justicia: Ni una ni otra cosa...
Pues qué, ¿no hemos visto recientemente aplicados medios que se llaman gubernamentables y que son muchos más gravísimos que otros que podrán utilizarse mañana, para hacer que esas asociaciones desaparezcan, considerándolas comprendidas en algunas de los artículos de esa ley? ¿Es que sería más grave es que sería más injusto que los tormentos que se han aplicado a varios de los presos con motivo de los atentados de Barcelona, para obligarles a declarar la verdad ó la impostura, hacer de modo y manera que dentro de local de una sociedad obrera ó de una sociedad política, se introdujese subrepticiamente un cartucho siquiera fuese liviano de dinamita, para que a la medida hora, en virtud de un registro se encontrase aquel cartucho y quedase legitimada desde aquel momento la disolución de aquella sociedad...

Quizá me dirá lo que ya indico aquí mi ilustre compañero el Sr. Canalejas: que con esta ley no se trataba ni por asomo de perseguir las ideas de nadie: que con esta ley no se trataba, ni por cierto de cohibir la propaganda que pudiera hacerse de cualquiera de las escuelas sociológicas que se ocupan del mejoramiento del proletaria-
do...

Si esto acontece, si está aconteciendo sin que pueda, ni directa ni indirectamente ni próxima ni remotamen-
te autorizarlo. ¿Que no habéis vosotros que no harán los conservadores con esta ley cuando llegue a ser aprobada...?

¿Pero es que creen el Sr. Ministro y algunos otros Sres. Diputados que esta es también una vana afirmación mía y que estoy desposeído de toda probanza para evidenciarla en el Congreso? Por si acaso, ya me permitirán los Sres. Diputados que lea un brevísimó documento.

Dice así: "Señor director de El Diluvio, salud. Si encontráis bien enterarse y publicar la siguiente carta, se lo agradeceremos infinitamente...

"Es el caso que hace unos siete meses que la mayoría de los firmantes estamos presos en estas cárcelés por orden gubernativa y por ser sospechosos de anarquistas."

"Es el caso que todos somos trabajadores que ganamos entre miseria y miseria el pan de nuestras pobres familias cuando trabajamos, y esta es la principal sospecha; es el caso que muchos de nosotros por cuestiones en las que nada teníamos que ver fuimos puestos á disposición del juzgado; y éste obrando rectamente nos puso en liberal como inocentes á pasar de los cual continuamos presos por órdenes de quién pueda."

"Es el caso que no obstante habernos quejado públi-
ca y privadamente del atropello de que somos víctimas, nadie ha hecho caso de nuestras quejas...

"Es el caso que esta encierro se nos tiene y antes más amontonados haciendo faltos de aire de higiene, de tod, con un ranche insuficiente y poco alimentoso; llenos muchos depiojos y granos; harapientos no pocos; enfermos otros; recibiendo cada día tremendo disgustos, porqué se muere de aintimiento y poco menos que de hambre algún ser de nuestra familia; al uno la madre los Hijitos al otro esposa, etc.; porqué se nos hace jurar la Constitución á la fuerza esto es se nos obliga á oir sermones de curas á quienes no hemos pedido nos molestarán...

"Es el caso... pero, ¿á que continuar? En fin, sepa, señor director que los firmantes y otros que no firman además de los 13 ó 14 que están en Montjuich, y otros 32 que están en el crucero Navarra, todos igualmente presos por orden gubernativa, nos encontramos en tan violenta situación sin hacer hecho nada, absolutamente nada, sólo por la sospecha de ser anarquistas, lo que no es ningún delito, porque creemos que cada cual puede honradamente tener la opinión que le dicte su conciencia. Si hubiéramos cometidos algún delito, á no nos hubieran proce-
sado ya en siete meses? Y si no nos han encontrado deli-
to ¿por qué há tantos meses nos hallamos detenido? Tiem-
po atrás pedimos justicia. Ahora no pedimos nada.

"¡Oh, qué es amargo pobre! Calla, sufre pago y tra-
baja para todos laborioso jornalero, que ya en contrarás
la recompensa en la... cárcel.

"Si en esta sociedad hay quien aún tenga sentimientos
humanitarios; si ni la ceguza ni la hipocresía no
se ha apoderado de los hombres todos; si en el mundo que-
dan, que no lo dudemos, liberales de corazón de verdade-
ro corazón que aman idolatrán, la libertad y felicidad
humana, que mediten,""Sigan las firmas!"

Oigo que aplicando la pena de muerte en esta clase
de delito, no pocas veces colaboran á la misma obra de
los terroristas; porque en mucho caso los terroristas e
cuando conciben la comisión del delito, no solamente tra-
tan de dañar y de matar, sino que se proponen morir; es
decir que de su delito es complemento el acabar con su
existencia. Vocotros no le mandaís á presidio; vocotros
le mandaís colaborais la la obra del terrorismo.(El Sr.
Ramos Calderén: Le damos gusto.) ¿No le parece á S.S., po-
co serio ante una cosa tan solemne como esta decir pala-
bres? A mí me parece que sí. (El Sr. Ramos Calderón: ES
la consecuencia del razonamiento de S.S.

c) Discursos de las Conservadoras

Lebres, 22 de Mayo de 1894.

¿Sabéis lo que dicen esos señores anarquistas, tratando de dar soluciones a los problemas sociales? Pues lo que la Cámara va a oír, que contiene El Indicador Anarquista.

"Uno de los trabajos importantes que hay que hacer, consiste en destruir todos los edificios que bajo cualquier punto de vista sean símbolos de opresión. Ningún vestigio del pasado debe ser respetado, hay que hacer de una vez, y para siempre tabla rasa de todos los instituidos gubernamentales, jurídicos, religiosos y administrativos. Que todos los monumentos que puedan servir de punto de concentración cualquiera autoridad, sean destruidos sin piedad ni remordimiento.

"Camaradas, que vuestros corazones sean de bronce, porque hay necesidad de mucho odio para hacer esta limpieza de las cuadras de Augias.

"Volved las iglesias, los conventos, los cuarteles, las cárcceles, las prefecturas y las alcaldías... Quemad todos los documentos administrativos en donde se hallan.
Al fuego los títulos de propiedad de rentas, de acciones de obligaciones. Al fuego las hipotecas, las actas-de Sociedades. Al fuego el gran libro de la deuda pública de los empréstitos municipales y departamentales. Al fuego los libros de las casas de banca y de comercio los pagarés, los cheques, las letras de cambio. Al fuego los papeles de estado civil de reclutamiento, de la intendencia militar de las contribuciones directas ó indirectas. Al fuego todos esos papeles malsanos, títulos se esclavitud de la humanidad, defendidos por millones de soldados de policía y de magistrados de todas clases."
FUENTES. ANEXO II (CAP. IV).

1) Boletín de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1875, ps. 169 a 171.

2) Idem, ps. 791 a 795.

3) Diario de Sesiones, Sesión de 13 de diciembre de 1876, Apéndice 2º al nº 98.

4) D.S., Ses. de 8 de abril de 1878, Apéndice 1º al nº 43.

5) Bol. de la Rev... 1880, ps. 1087 a 1088.

6) D.S., Ses. de 17 de noviembre de 1881, Apéndice 2º al nº 49.

7) D.S., Ses. de 31 de mayo de 1882, Apéndice 4º al nº 140.

8) D.S., Ses. de 25 de junio de 1887, Apéndice 15 al nº 124.

9) Bol. de la Rev.... 1892, ps. 523 a 525.

10) Bol. de la Rev... 1896, ps. 146 a 154.

11) Bol. de la Rev... 1893, ps. 272.

12) Bol.de la Rev... 1894, ps. 273 a 276.

13) Bol. de la Rev... 1896, ps. 947 a 948.

14) Bol. de la Rev... 1896, p. 516.

15) Bol. de la Rev.... 1896, ps. 537 a 539.

16) Bol. de la Rev... 1896, p. 620.

2) Idem, p. 323.


4) Diario de Sesiones, marzo de 1877, pp. 941 y ss.
   a) D.S., sesión de 4 y 5 de marzo, pp. 941-943 y 971
   D.S., sesión de 10 de marzo, pp. 1079-1082.
   b) D.S., sesión de 16 de marzo, pp. 1085-1086.
   D.S., sesión de 12 de marzo, p. 1135.
   D.S., sesión de 12 de marzo, p. 1138.
   D.S., sesión de 14 de marzo, p. 1165.
   c) D.S., sesión de 18 de marzo, pp. 1069-1070.
   D.S., sesión de 9 de marzo, pp. 1051-2 y 1057.

5) Diario de Sesiones, mayo de 1894, pp. 4213 y ss.
   a) D.S., sesión de 16 de mayo, p. 4213.
   D.S., sesión de 16 de mayo, pp. 4215-4218 y 4301.
   D.S., sesión de 21 de mayo, pp. 4305-4307 y 4309.
   D.S., sesión de 26 de mayo, pp. 4415-16.
   D.S., sesión de 5 de junio, pp. 4669.
   b) D.S., sesión de 22 de mayo, pp. 4330, y 4436.
   D.S., sesión de 29 de mayo, pp. 4470-71, y 4632-4635 y 4640.
   c) D.S., sesión de 22 de mayo, pp. 4533.